



Arxiu històric FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Los límites de la socialdemocracia europea

Josep Picó

OCTUBRE 1991

FUNDACIÓ
Fundació
JAUME
Jaume
BOFILL
Bofill

INDICE

INTRODUCCION	1
I. EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA ALEMAN	
1.1. Los trece años de Brandt y Schmit	10
1.2. Tendencias y Programas	22
1.3. El éxito frente a la crisis económica	38
1.4. El DGB, un sindicato fuerte	53
1.5. El SPD en la oposición	64
II. EL PARTIDO LABORISTA INGLES	
2.1. De Wilson a Callaghan	69
2.2. La ruptura del partido	86
2.3. Thatcherismo y Laborismo	95
2.4. Keynesianismo frente a Monetarismo	103
2.5. Los Sindicatos: de la participación política a la exclusión	118
2.6. La Reconstrucción del Laborismo	129
III. EL PARTIDO SOCIALISTA FRANCES	
3.1. Mitterrand y la batalla por la hegemonía	135
3.2. La lucha por el liderazgo interno	150
3.3. El PS: del Socialismo a la Socialdemocracia	160
3.4. Del expansionismo al rigor	174
3.5. Pluralidad Sindical y distanciamiento	187
3.6. La Cohabitación Mitterrand-Chirac	199
IV. EL PARTIDO SOCIALISTA ITALIANO	
4.1. Un partido siempre coaligado	205
4.2. De la división interna a la unidad	224
4.3. Estrategias para el éxito	231
4.4. La batalla en torno a la escala móvil	246
4.5. El reformismo posible	260
V. EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	
5.1. De la oposición al poder	266
5.2. Un partido sin fisuras	283
5.3. Entre el ajuste y la expansión	290

En todo este período, bien en el poder bien en la oposición, han tenido que conjugar el mensaje ideológico con el gobierno político en el marco de un proceso de cambio social que ha pasado de la estabilidad a la crisis y, cuando ya nos acercamos al final del siglo, a un juego entre estabilidad política y crisis económica que cuanto menos provoca la incertidumbre del futuro.

Agotadas las políticas económicas del Welfare con la crisis de los años setenta, salpicados de conflictos internos y con las centrales sindicales y derrotados en muchos de los procesos electorales más recientes, los partidos socialdemócratas europeos se han visto desprovistos de un aparato ideológico y de un programa que les diese las bases suficientes para afrontar el futuro de sus respectivos países, y para ser considerados como una voz mundial que responda a la ofensiva conservadora a la que estamos asistiendo en estos últimos años.

La intensificación del proceso de integración europea, la interdependencia y mundialización de la economía, la segmentación de la sociedad y el cambio tecnológico son algunos de los procesos que han modificado la escena política y que a su vez obligan a replantear muchas de las categorías y postulados con los que se estaba actuando que, junto a otros factores, han provocado que los socialdemócratas suecos perdieran su hegemonía parlamentaria en 1976 después de 34 años de gobierno, y que los gobiernos socialdemócratas de Inglaterra y Alemania Federal también llegaran a su fin en 1979 y 1982 respectivamente.

Un repaso al desarrollo experimentado recientemente por algunos de estos partidos, una descripción de las estrategias y políticas con las que los socialistas han afrontado estos cambios y una visión

introspectiva al interior de los mismos nos pueden ayudar a comprender el camino que estamos recorriendo y aventurar cuáles pueden ser las perspectivas y limitaciones del futuro.

Nuestra intención no ha sido emprender un estudio exhaustivo de la socialdemocracia europea, sino conocer las claves del cambio de escenario en la praxis política diaria y el comportamiento de los socialistas dentro de este nuevo horizonte. Para ello nos hemos fijado en los partidos socialistas alemán, inglés, francés, italiano y español. En primer lugar por ser los países que en el ámbito de la Comunidad Europea tienen mayor densidad demográfica, alcanzando todos juntos más del setenta y cinco por cien de la población, y en segundo lugar por motivos comparativos, sin olvidar que los socialdemócratas del norte han sido en muchas ocasiones punto de mira y modelos de referencia para el camino que han seguido posteriormente los del sur.

Bruno Kreisky dijo en el Congreso del SPD de 1975 que la fuerza de la socialdemocracia en Europa y en el mundo depende en gran medida de la fortaleza de la socialdemocracia alemana, parafraseando el famoso dicho de que "quien controle Alemania determina la suerte de Europa", y es que el SPD ha sido después de la II Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de su Congreso del año 58, el motor de la mayor parte de los partidos socialistas europeos. Su programa tuvo la capacidad de adaptarse de tal manera a las necesidades y expectativas de la sociedad alemana que les ha permitido gobernar aquel país durante muchos años. Pero desde hace un decenio han perdido el poder y a su izquierda se han asentado movimientos de oposición tan importantes como los verdes.

Su gran preocupación en estos últimos años ha sido reelaborar el Programa Básico. Para ello constituyeron una

Comisión de Valores Fundamentales que ha considerado el programa de Bad Godesberg obsoleto debido fundamentalmente a las transformaciones que está sufriendo la sociedad occidental en esta segunda mitad del siglo XX.

Afirmaba hace un tiempo Peter Glotz, en una entrevista concedida a Marxism Today, que el desarrollo de los socialistas en Inglaterra y Alemania ha sido muy parecido por la división que se ha producido en estos países tanto en el movimiento obrero como en el seno de la izquierda. El triunfo de la derecha, en estos últimos años, se ha debido a la conquista, por parte de los gobiernos liberales, de las clases medias y de la clase asalariada con puestos seguros y bien remunerados, en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad (jubilados, jóvenes, desempleados, etc..). Sin embargo durante mucho tiempo han existido también diferencias significativas entre la izquierda alemana y la inglesa en su actitud respecto a temas como la modernización tecnológica y ecológica de la sociedad industrial, la terciarización, la Comunidad Europea, la carrera armamentista, la utilización de la microelectrónica o la tecnología de la información, entre otros.

La izquierda inglesa, a su vez, sufrió una profunda división, lo que ha contribuido, juntamente con su postura respecto a determinados temas como la política económica, la defensa estratégica, el sistema electoral, o el ingreso en la Comunidad Europea, a imposibilitar su acceso al gobierno.

El socialismo francés, por su parte, que accedió al poder en 1981 por primera vez después de la II Guerra Mundial, trató de poner en práctica una política que rompiese con la lógica del capital e insistió en una estrategia industrial que debería estar basada en un sector dinámico

pero nacionalizado, en la reducción de la jornada laboral y en la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales, es decir en aplicar una política socialista más agresiva. El fracaso de esta política económica al colisionar con los problemas estructurales del capitalismo moderno contrastó con el éxito aparente que obtuvo en el mismo período Margaret Thatcher al afrontar problemas parecidos aunque en diferentes contextos y obligó a los franceses a cambiar sus postulados.

Junto a la obsolescencia de los programas políticos, a los diferentes modelos de política económica que se han puesto en marcha para afrontar situaciones de crisis parecidas, y al desarme ideológico en el que muchos partidos socialistas se han encontrado para afrontar una situación tan cambiante como la actual, cabría subrayar también la importancia de su propia vida interna como organización política y sus relaciones con los sindicatos.

La lucha interna por el liderazgo que ha tenido lugar en muchos de estos partidos, los cambios en la composición interna de su militancia, así como su relación con el movimiento obrero, han marcado la transición de estas organizaciones políticas desde su imagen decimonónica a la situación actual.

Uno de los más marcados en este sentido ha sido el PSI. La historia del Partido Socialista Italiano está entretrejida de luchas internas que durante muchos años, bien por motivaciones ideológicas o políticas, han contribuido a ralentizar su desarrollo y a inmovilizarlo en los momentos cruciales de su historia reciente hasta el punto de desembocar en rupturas traumáticas.

La época Craxi se ha caracterizado por la desaparición de este tipo de luchas debido a la imposición de un

liderazgo sin paliativos que ha redundado en la creación de un bloque monolítico en el que ha desaparecido incluso la izquierda estratégica de Signorile. Su opción de poder ha conseguido por una parte desbloquear el estancamiento electoral en que se encontraba el PSI, subiendo hasta cinco puntos en algunas de las últimas elecciones, pero por otra parte, se ha ganado la crítica y separación de algunos de sus intelectuales más prestigiosos y la acusación de instrumentalizar el partido para servir a una política muy escorada a la derecha.

A nivel ideológico y teórico este cambio ha desencadenado un debate nuevo en la ya tradicional dialéctica entre comunistas y socialistas italianos. Desde el punto de vista político, y sobre todo de política económica, los socialistas han tenido que afrontar, después de muchos años de oposición insignificante, las relaciones internacionales del Estado Italiano con EEUU, las cuestiones referentes al Welfare, la política sindical y las dificultades de gobernar en minoría.

Por último, en el caso español, la victoria electoral de los socialistas en los años 82, 86 y 90 ha forzado a gobernar con realismo, olvidar la retórica de la oposición, practicar una política económica de saneamiento y una cultura política de profundización democrática. La herencia de la dictadura ha sido, no obstante, un pie forzado en algunas líneas de actuación de gran alcance, como la militar, que ha mermado esfuerzos para profundizar en otros sectores más necesitados. Con todo, el mantenimiento del poder adquisitivo, el descenso de la inflación, la entrada en la Comunidad Europea y otros éxitos políticos mantienen todavía al PSOE como partido favorito del arco parlamentario español.

Sin embargo, la dificultad para disminuir el paro, la lentitud en la reforma administrativa y en la ampliación del Estado del Bienestar, sumado a la actitud contestataria de los sindicatos son nubes siempre permanentes en el futuro del PSOE.

Vemos, pues que cada partido tiene que afrontar muchas veces problemas comunes en contextos diferentes, o, al revés, problemas diferentes en contextos comunes. Se tratará de describir y analizar cada uno de estos contextos y ver cómo se afrontan los problemas por cada uno de los partidos. Esto nos permitirá conocer qué posibilidades hay, cuando el contexto es común, de afrontar los problemas de forma coordinada o unitaria, y cómo ir superando los problemas en los contextos nacionales de los diferentes países, para lanzarse a una ofensiva más internacional que es, según muchos autores, el campo de batalla donde se juega el futuro del socialismo europeo.

Esta proyección internacional, sobre todo como miembros de la Comunidad Europea, es la que permite aventurar a muchos que el campo nacional es ya demasiado estrecho para afrontar las perspectivas de futuro. Recientemente Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea, afirmaba que dentro de poco el setenta por cien de las decisiones más importantes que se tomen en los países que pertenecen a la C.E. ya no estarán en manos de los gobiernos nacionales sino en manos del Parlamento Europeo y que, por tanto, el papel de las Asambleas Nacionales quedará sensiblemente reducido.

La importancia de esta internacionalización de las decisiones políticas y económicas nos ha llevado a dedicar un capítulo -aunque muy descriptivo- a la actitud que los socialistas y los sindicatos han mantenido en estos últimos años respecto a la C.E. Consideraremos también los últimos

acontecimientos que se están desarrollando en su ámbito, que avanzan a una velocidad acelerada comparada con el lento caminar que ha observado la Comunidad desde el Tratado de Roma de 1954 hasta la década de los setenta.

Por último, en las conclusiones trataremos de comentar y comparar algunos de los temas aparecidos en la estructura de cada uno de los capítulos precedentes en lo que se refiere al desarrollo de los partidos socialdemócratas, la política económica y de bienestar que han aplicado cuando han estado en el poder, la evolución de los sindicatos y las últimas aportaciones teóricas que tratan de aventurar sus perspectivas de futuro y conocer las limitaciones reales a las que se enfrentan.

En un trabajo de esta índole quedan siempre facetas por estudiar, algunas de ellas incluso de mucha importancia, como puede ser en nuestro caso las relaciones internacionales de los partidos socialdemócratas que hoy tanto condicionan la vida diaria. Pero las limitaciones del autor también son muchas a pesar del tiempo dedicado al estudio y redacción de un trabajo que necesariamente se ha de compaginar con otras obligaciones intelectuales y docentes. Dos años después de su inicio se han producido también los acontecimientos de la Europa del Este a los que tampoco hago referencia, aunque en este caso con el convencimiento de que ninguno de los problemas vinculados a la especificidad de nuestro sistema se ha resuelto con la caída del Muro de Berlín, tal como manifestó Habermas en un artículo publicado poco después en la revista italiana Micromega.

Para documentar esta publicación han sido consultadas algunas bibliotecas específicas, como la del Office Universitaire de Recherche Socialiste en París o la Fundación

Friedrich Ebert en Madrid, y otras más generalistas, aunque la mayor parte de la exploración bibliográfica se desarrolló en la biblioteca de la Universidad de Cambridge en el verano de 1989. Durante el trabajo he mantenido contactos, consultas y correspondencia con estudiosos de otros países que trabajan o han trabajado sobre el mismo tema como los profesores H.J.Puhle, W.Merkel, P.Guidoni, L.Pellicani, J.M. Vallés, I.Molas de quienes he recibido sugerencias e incluso papeles de difícil acceso, pero a ninguno de ellos hay que imputar los errores o defectos del escrito que aquí se presenta. No quisiera olvidar ayudas puntuales como las de Rosa Catalá y Eva Calatrava en la pesada tarea de traducir fichas, corregir y revisar papeles, o la de Gustau Muñoz y Enric Sanchis en la de comentar algunos aspectos descriptivos y teóricos del libro, ni aquellas más fundamentales como la del Institut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona y la Fundació Jaume Bofill, o la del Clare Hall College de Cambridge, que me hospedó de nuevo en el verano de 1989, y la ayuda que me prestó la Presidencia de la Generalitat Valenciana, sin las cuales probablemente este texto no se hubiese elaborado en las mismas condiciones.

I. EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA ALEMAN

1.1. Los trece años de Brandt y Schmidt

El SPD es, sobre todo, un partido con una militancia de masas. Como tal, ha servido de modelo para muchos otros partidos socialdemócratas desde el periodo de la Segunda Internacional a finales del siglo pasado. Su crecimiento, tanto electoral como organizativo, ha sido constante desde 1871, a pesar de la frecuente persecución política y de la discriminación social que han sufrido sus activistas. Hasta 1933, pero en muchos aspectos hasta los años cincuenta, el SPD fue el partido que tradicionalmente (aunque no exclusivamente) representó a los trabajadores industriales. Sólo en los años sesenta consiguió extender su militancia significativamente a otros estratos de la sociedad, en particular a la clase media culta y al funcionariado civil, compensando así la caída del número de trabajadores industriales en la población activa total. De este modo el partido tiene básicamente todavía una militancia de masas, aunque ya no es el partido de una clase determinada, como lo fue una vez.

Hoy día reivindica ser, y lo es, un Volkspartei moderno, capaz de representar políticamente varios intereses sociales, y todavía recibe los votos de la mayoría de los trabajadores, especialmente de los trabajadores industriales. No es un apéndice político de los sindicatos, como en Gran Bretaña, e históricamente ha precedido al nacimiento y desarrollo de las organizaciones obreras.

Habiendo permanecido tradicionalmente en la oposición, el ascenso de la socialdemocracia alemana al poder se produce en los sesenta como resultado de la crisis de todo un sistema político creado por el partido demócrata cristiano, y como consecuencia de las modificaciones que sufrió el panorama político interno y externo, frente a los cuales ya no sirvieron las viejas recetas del gobierno

demócrata cristiano de la CDU. Se trataba de someter a revisión la política que durante toda una época había llevado a cabo Adenauer y pasar de la "sociedad ordenada" a la "sociedad integrada" a través de la apertura al Este normalizando las relaciones con la Europa Oriental, por un lado, y promoviendo, por otro, la apertura a la colaboración con el sindicato unitario a fin de ofrecer una política de integración y estabilidad social. Por otra parte, se pretendía acomodar los usos políticos a los cambios que se habían producido en la sociedad especialmente entre la nueva generación, que impugnaba la jerarquización tradicional y el autoritarismo en las relaciones sociales. De aquí que la consigna de democratización, recogida y promovida por el SPD tuviese una gran importancia.

Con esta nueva orientación, que reflejaba ampliamente el cambio que había sufrido la voluntad popular, la coalición entre socialistas (SPD) y liberales (FDP) reemplazó a la derecha alemana (CDU) en 1969 y prolongó su mandato hasta 1982, es decir durante trece años más. En la primera parte de su mandato los socialistas tuvieron como líder a Willy Brandt (1969-74) mientras que en la segunda tomó el control del partido Helmut Schmidt (1974-82). Conviene

decir, no obstante, que el acceso al poder del SPD había estado precedido por su pacto de coalición con la CDU (la "Gran Coalición") que durante tres años había servido para que los socialistas, y en particular su ministro de Economía Karl Schiller, consiguiesen un buen resultado en la batalla contra la recesión económica que había aparecido en 1966. A esto habría también que añadir que su éxito estuvo condicionado por el aumento de la proporción de los votantes jóvenes y de mujeres, y como resultado de los cambios en las tácticas de coalición del partido liberal (FDP), que con su adicional 6-10 por cien permitía establecer mayorías de gobierno estables (tabla 1) (1)

TABLA 1

RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES GENERALES

	<u>1969</u>	<u>1972</u>	<u>1976</u>	<u>1980</u>	<u>1983</u>	<u>1987</u>
CDU-CSU	46.1	44.9	48.6	44.5	48.8	44.3
SPD	42.7	45.8	42.4	42.9	38.2	37.0
FDP	5.8	8.4	7.9	10.6	6.9	9.1
Verdes	---	---	---	1.5	5.6	8.3
Participación	86.7	91.1	90.7	87.8	89.1	84.4
Total						

En la década de los 70 los Socialdemócratas comenzaron a poner en práctica de manera decidida el programa que habían aprobado unos años antes en su Congreso de Bad Godesberg, con el que abandonaban una política de izquierda radical en favor de una actuación más interclasista en consonancia con la composición de la militancia del partido y de su espectro electoral. El programa de Bad Godesberg (1959) había impuesto la ruptura definitiva con los residuos ideológicos del período de Weimar e introdujo una valoración filosófica y cultural más cercana a ciertas tendencias protestantes progresistas de la Alemania actual. El Canciller Willy Brandt, basándose en los documentos aprobados por el partido en

1968 "Perspectivas de la política socialdemócrata en la transición hacia los años 70", se comprometió a profundizar en la democracia y en la justicia social a través de leyes reformistas. Así, se rebajó la edad para la participación electoral a los 18 años (1972), se aprobaron medidas para democratizar la vida económica a través de la codecisión (Mitbestimmung) en las empresas, se reformó el sistema educativo y se aumentó el gasto en políticas de bienestar social dirigidas a los jóvenes, los ancianos y los disminuidos físicos. Se aplicaron medidas fiscales concertadas adoptando el modelo de planificación keynesiano, y se trató de integrar todos los elementos del desarrollo que habían quedado marginados en un proceso general de racionalización del sistema.

Pero no todas las reformas políticas fueron aceptadas por la coalición. El partido liberal FDP no estaba dispuesto a apoyar una legislación que se enfrentase abiertamente al sistema capitalista. De ahí que diversas propuestas del SPD fuesen aplazadas para una consideración posterior. Brandt trató de justificar ante el partido estas limitaciones que imponía la coalición declarando que, las decisiones de los congresos pueden ser citas importantes para el gobierno, pero un Primer Ministro tiene deberes y responsabilidades que están por encima de las resoluciones de los partidos; "el gobierno no es un receptor de órdenes del partido, la tarea de éste es apuntar la dirección de los objetivos, pero después depende de los aliados gubernamentales cumplir todos los que sean posibles en el marco de una situación determinada" (2). Así pues, el énfasis gubernamental en la estabilidad política y económica dificultó la puesta en práctica de algunos programas de reforma más profundos y que resultaban más costosos para el Estado. Sin embargo el gobierno aprobó un conjunto de leyes

destinadas a mejorar la política de bienestar social. El ministro de Trabajo, por ejemplo, propuso un paquete de reformas con las que implantaba la flexibilización en la edad de jubilación, aumentos en la cuantía de las pensiones, mayor cantidad de fondos para subvencionar los transportes, la educación, la investigación, etc. Pero poco después cuando estalló la crisis económica de 1973 el gobierno, en el intento de mantener el crecimiento económico y el pleno empleo, tuvo que abandonar muchos de sus ambiciosos programas de reforma, como el de la codecisión, el de la legislación sobre cártels y los que se debían aplicar sobre áreas constitucionales o judiciales (3).

En el momento de la crisis, con el considerable aumento del precio del petróleo y la consiguiente recesión mundial, el número de parados alcanzó también a un millón de trabajadores. A su vez se disparó el gasto público que repercutió en la balanza de pagos y la inflación, lo cual tuvo repercusiones negativas para una economía como la alemana fuertemente orientada hacia la exportación de sus productos.

A finales de 1973 Brandt tropezó con otros obstáculos; por una parte las juventudes socialistas manifestaron su desacuerdo respecto a algunas posiciones ideológicas y programáticas del gobierno; por otra las dificultades económicas empujaron a los trabajadores en algunos sectores de los servicios a la huelga; y por último en abril de 1974 estalló un escándalo de espionaje en la oficina del Canciller. Un agente secreto de la República Democrática Alemana que llegó a ser uno de los secretarios personales de Brandt fue arrestado por espionaje, lo que llevó a la dimisión del Canciller, quien propuso nombrar como sucesor al ministro de Economía Helmut Schmidt.

Schmidt se había ganado una excelente reputación como administrador eficiente, con gran capacidad para la estrategia y duro polemista. Frente al carácter carismático de Brandt se presentaba como un político pragmático no ideologizado y técnicamente muy preparado. En su primer discurso prometió continuar el programa de coalición con los liberales, asegurar la estabilidad gubernamental y proseguir un programa de progreso económico y social. Hizo todo lo posible para equilibrar la política de defensa entre el Este y el Oeste (4) lo que implicaba acatar la voluntad europea de proseguir la modernización de las armas como medio para persuadir a la Unión Soviética a aceptar un cierto nivel de reducción de su capacidad militar; contribuyó al establecimiento del Sistema Monetario Europeo (SME) para aislar a Europa de las fluctuaciones del dólar americano; impulsó el programa de energía nuclear a la vista de la crisis petrolífera de 1973-74, y aseguró una política de rigor económico. Con estas medidas se ganó la imagen de ser un excelente gestor de la Administración del Estado para llevar a Alemania a jugar un papel de primera fila en la escena mundial.

En el programa de esta segunda fase del gobierno socialdemócrata se contemplaba, entre otros objetivos, la reforma del derecho de familia, la despenalización del aborto, la reforma del código penal, la mejora de la formación profesional, la humanización del trabajo, la seguridad y el desarrollo de los transportes, incentivos en favor del ahorro y el consumo, la reforma del sistema sanitario, y otras medidas que mejorasen la calidad de vida.

Durante todos estos años la vida del partido tuvo sus

altibajos. En las elecciones de 1976, el SPD y el FDP obtuvieron la mayoría sólo por diez escaños. Esta pérdida de votos se produjo sobre todo a causa de los continuos problemas económicos nacionales, del nivel alcanzado por el desempleo, del aumento de los precios y de los conflictos y escándalos de corrupción en el seno del SPD. También tuvieron importancia los enfrentamientos entre las tendencias internas. Pero a finales de la década el prestigio de Schmidt creció considerablemente gracias a su política internacional y a la superación de la crisis terrorista de 1977. Como consecuencia de esto los socialdemócratas ganaron algunas elecciones regionales, las luchas internas se moderaron y en la misma medida aumentaron las expectativas de ganar las elecciones de 1980. Por otra parte, la coalición de derechas nombró candidato para estos comicios a F.J. Strauss, cuya popularidad era considerablemente baja, y esta decisión se volvió contra la alianza de derechas CDU-CSU en la que incluso un sector significativo de electores prefería al candidato socialista antes que al autoritario líder del CSU .

Schmidt basó su campaña fundamentalmente en la política exterior, tomando como eslogan "Seguridad para los ochenta", subrayando el valor de la distensión para reducir las fricciones entre el Este y el Oeste y atacando a la figura de Strauss como una amenaza para la paz. En estas elecciones la proporción del SPD en el voto federal permaneció constante situándose en un 42'9 por cien, mientras la coalición de derechas cayó 4 puntos al perder una parte de su electorado tradicional compuesto por trabajadores manuales y protestantes del Norte (5).

Durante los dos primeros años de este nuevo gobierno la coalición entre socialdemócratas y liberales tuvo que afrontar dificultades cada vez mayores con motivo de la segunda crisis petrolífera. La economía se mantuvo estancada y el paro alcanzó en 1982 a 1'7 millones de personas, es decir al 7'4 por cien de la población activa. De esta manera crecieron las desavenencias en el gabinete sobre las medidas que había que tomar para combatir la

recesión. Schmidt respondió a esta situación presentando en 1980 y 1981 presupuestos de carácter deflacionista, restringiendo el crédito y reduciendo los salarios del sector público, mientras crecía en términos reales el gasto de defensa. A esta política restrictiva contribuyó el éxito electoral de los liberales (FDP) que trataban de ejercer una mayor influencia en la política federal a través de los recortes en los programas sociales y de la disminución de los impuestos a las empresas para estimular las inversiones, favoreciendo así el abandono paulatino de las políticas Keynesianas.

A estas dificultades propias de la discrepancia de criterios dentro de la coalición gubernamental se unían las divisiones internas del partido, donde se enfrentaban las distintas formas de ver la política, sobre todo respecto a los temas de política económica, defensa y necesidades energéticas.

Los Jusos, la organización juvenil del SPD, proponían una vuelta a los principios anteriores al programa de Bad Godesberg para retomar los hilos de un socialismo más participativo y descentralizado. Esta tendencia radical cobró fuerza a principios de los años 80 y se opuso a la política de Schmidt. Otro grupo radical, los ecologistas, se oponía a la creación y continuidad de las centrales nucleares y al despliegue de misiles de alcance medio. La fortaleza del ala izquierda del SPD dentro del Bundestag, el grupo llamado Círculo de Leverkusen, aumentó de 30 a 50 diputados, con lo cual se agudizó la división interna del partido. Muchos de ellos llegaron a pensar que una ruptura de la coalición con los liberales y un período de oposición podría ser preferible a continuar en el gobierno; además, eso daría pie a una regeneración del partido y a la elaboración de un programa político más socialista.

Durante 1981, a pesar de la popularidad de Schmidt, el partido descendió a su nivel más bajo de confianza popular desde 1945. En Hamburgo, la ciudad natal del Canciller, el alcalde rechazó cooperar en el proyecto de una central nuclear y dimitió en junio de 1981. Meses antes 24 diputados

del ala izquierda rompieron la disciplina del partido al votar contra los aumentos del presupuesto de defensa y la venta de armas a Arabia Saudí. La derrota en las elecciones del Land de Berlín Oeste, punto neurálgico para la distensión y la Ostpolitik, donde tradicionalmente había ganado la coalición SPD-FDP, fue el indicador más claro de que el electorado había perdido la confianza en la coalición gobernante, lo cual tuvo su confirmación en la caída de votos del partido en las elecciones de marzo de 1982 en la Baja Sajonia. En el congreso de Munich de abril de 1982 el partido acordó una vez más, bajo la amenaza de dimisión de Schmidt, aplazar el tema de la aceptación de los misiles Cruise y Pershing II hasta que terminasen las conversaciones de Ginebra entre EEUU y la URSS sobre el control de armas nucleares. Mientras tanto, en febrero del mismo año, un nuevo programa de creación de puestos de trabajo valorado en 12.500 millones de marcos, que se financiaría con el aumento del IVA y de los impuestos sobre el patrimonio pasó la votación parlamentaria con éxito gracias a una llamada al voto de confianza que hizo el Canciller. Pero este éxito fue efímero, puesto que durante ese verano el liberal FDP

rechazó el aumento de los impuestos para costear el programa de inversión pública propuesto por los socialdemócratas . De esta manera el 17 de septiembre terminaba la coalición SPD-FDP que duraba ya trece años y era la más larga de toda la historia política de Alemania Occidental.

Por su parte, el FDP a la vista de los conflictos que afrontaba la coalición desde 1980 había iniciado contactos unilaterales con los partidos de la derecha. Su líder H.D. Genscher preocupado desde 1981 por el futuro electoral de su partido comenzó negociaciones secretas con el CDU tanto a nivel regional como federal; no obstante fue el Congreso del partido, que se celebró en junio del 1982, el que decidió firmar un pacto de coalición con el CDU para las próximas elecciones de septiembre. En septiembre, cuando el ministro de Economía del FDP, conde Lansdorff, presentó un informe al Canciller Schmidt exigiéndole más recortes del gasto público para consolidar la recuperación económica, esta petición se consideró como el deseo explícito de romper con la filosofía política de los socialdemócratas, con lo cual la ruptura sólo tuvo que esperar su sanción formal en el congreso del FDP que se celebró a finales de 1982. Poco después el líder del CDU, Helmut Kohl exigió la dimisión del canciller Schmidt.

A pesar de las maniobras de Schmidt para evitar su dimisión mediante la petición de un voto de confianza, la oposición impidió todas las posibilidades de continuidad y Kohl fue investido canciller el 1 de octubre de 1982 declarando su deseo de convocar elecciones generales lo más pronto posible. Mientras tanto la nueva coalición cortó el gasto público y aumentó el IVA para financiar las nuevas inversiones.

En el seno del partido socialdemócrata Schmidt fué

reemplazado como candidato a Canciller por Hans Jochen Vogel, antiguo ministro de Justicia y alcalde de Munich, aunque todas las miradas se volvieron hacia el poder carismático de Willy Brandt que soñaba con una nueva coalición de izquierdas que acogiera a los partidarios de la paz, los liberal-demócratas anti-Genscher, los verdes y otras alternativas, con un programa de matriz verde, renunciando a los misiles Pershing II y Cruise y a las centrales nucleares. Por su parte Vogel, arrastrado por el ala conservadora del partido (Kanalarbeiter), mostraba simpatía por las ideas de Brandt pero no se inclinó claramente a su favor. Los socialdemócratas se preparaban así para las elecciones de marzo de 1983 con actitudes divididas. La campaña tuvo dos protagonistas ideológicamente muy polarizados, el SPD y el CDU, y se centró fundamentalmente en dos temas: la política de defensa, con la batalla sobre la instalación de los misiles Pershing II, y la política económica.

En defensa los socialdemócratas, aunque no rechazaban el estacionamiento de los misiles si ello fuese absolutamente necesario, insistían en el compromiso de los americanos para iniciar conversaciones serias sobre el control armamentista con la URSS. Los dirigentes, incluido Schmidt, pensaban que el presidente Reagan no había hecho verdaderos esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre el control del armamento ni había dado respuesta a las concesiones soviéticas. Por su parte el CDU acusaba al SPD de no mantener un compromiso firme con la OTAN y de dejarse influir demasiado por la Unión Soviética que pedía a los países europeos que se resistieran a las iniciativas de rearme. En economía el SPD proponía el incremento de los impuestos sobre las rentas más altas a fin de que el Estado pudiese financiar la creación de puestos de trabajo, acortar el horario laboral

semanal, reforzar la política agrícola de la CEE para reducir el stock de alimentos y el nivel de los precios. La coalición gobernante, por el contrario, pedía una reducción del déficit presupuestario gubernamental mediante políticas de ahorro en los servicios sociales y la reducción de las subvenciones a las empresas; la promoción de la empresa privada y la inversión; una reducción en los impuestos y la continuidad en el programa de energía nuclear.

El tema clave de las elecciones fue, no obstante, el programa de defensa, al que los alemanes, dada su posición estratégica en Europa, eran especialmente sensibles. Sobre esta cuestión la población estaba profundamente dividida, pero se sentía más segura con la posición pro-OTAN del CDU-CSU.

En estas circunstancias los socialdemócratas, divididos internamente, sin un claro liderazgo y acusados de fracaso económico en su última etapa de gobierno, sólo alcanzaron el 38'2 por cien de los votos, la cuota más baja desde 1961. Mantuvieron el apoyo de la clase trabajadora tradicional, tanto de los trabajadores cualificados como de los no cualificados, pero perdieron muchos votos de las clases medias y los empleados que fueron a parar a los partidos de la derecha y a los verdes.

Estos últimos habían aparecido bajo forma de partido a principios de 1980 como resultado de un proceso de convergencia de lo que a comienzos de la década de los 70 se llamó los "grupos de iniciativa ciudadana" (Bürgerinitiativen). Estos grupos se extendieron por toda Alemania Occidental a través de campañas locales en las que se reivindicaban objetivos como jardines de infancia, campos de juego para los niños, políticas sociales de transporte y medidas contra la contaminación del medio ambiente. En estas luchas se involucraron los jóvenes, funcionarios y

grupos de profesionales que tenían como objetivo prioritario la calidad de vida. Estas organizaciones de base, en las que llegaron a estar comprometidos dos millones de ciudadanos, ofrecían además el atractivo de estilos de vida política más directos y participativos que los de los partidos tradicionales. En las elecciones de 1983 los verdes llegaron a conseguir 27 escaños, casi tantos como el partido Liberal (FDP), convirtiéndose en una formación política de carácter federal.

Sin embargo el SPD, a pesar de su derrota, había conseguido estar en el gobierno entre 1969 y 1982, la primera vez que accedía al poder desde la República de Weimar, y con ello se ganaba la legitimidad y respetabilidad que tanto necesitaba para ejercer su papel de líder de los partidos socialdemócratas europeos.

1.2. Tendencias y Programa

Para ganar las elecciones y acceder al poder los socialdemócratas alemanes no podían ser sólo un partido obrero, ni tampoco podían dejar de ser un partido de los obreros (6). Por eso las declaraciones de sus líderes hacían continuas referencias no sólo a las clases trabajadoras sino a todo el pueblo alemán. Aun así en 1970 el alma del SPD continuaban siendo los trabajadores industriales sindicalizados de la industria, pero a ellos se fueron uniendo poco a poco otros grupos como los funcionarios, los profesionales asalariados, trabajadores católicos no sindicalizados y clases

medias. El apoyo creciente de estas últimas a los partidos socialistas fue una característica común de Europa Occidental en esta década debido sobre todo a la movilidad social y a la modernización que transformó la estructura social de estas sociedades.

En esos años cambió también la composición social de los militantes del partido y eso influyó en su programa e ideología, en las luchas internas y en la capacidad de atracción sobre el electorado. Cuando el SPD llegó al poder como el mayor partido de la coalición, en 1969, tenía 778.945 militantes y en un año pidieron la afiliación más de 150.000 simpatizantes. En 1976 alcanzó la cifra máxima de 1.022.191 afiliados, pero desde entonces el número ha descendido progresivamente, sobre todo a causa de la mortalidad de los más viejos y del desencanto político de los más jóvenes, situándose en 1980 con 986.872 militantes y en 1981 con 954.119 (7).

A final de la década, en 1989, eran 921.000.

La mayoría de estos militantes eran hombres: en 1976 había alrededor de 807.000, es decir el 79 por cien, y 215.000 mujeres, el 21 por cien. La Asociación de mujeres socialdemócratas tuvo cierto éxito en su tarea de reducir ese desequilibrio ya que en los años 80 la proporción alcanzó el 30 por cien. En 1952 los trabajadores aún eran el 45 por cien de la militancia, pero hacia 1980 habían descendido al 28 por cien. Por el contrario el número de empleados asalariados, que en 1952 constituían el 17 por cien ascendió al 25 por cien en 1980. Este cambio en la composición del partido guarda paralelismo con la transformación de la fuerza de trabajo alemana.

Peter Glotz dibujaba el perfil de los militantes del SPD dividiéndolos en tres grupos (8): primero, el de la clase media-baja formado por los militantes de la antigua

socialdemocracia a quienes después de la II Guerra Mundial les fue posible ascender lentamente en la escala social; el segundo grupo es el del "establishment liberal de izquierdas", formado por afiliados con ingresos altos y educación superior; y el tercer grupo, está formado por los militantes más jóvenes, principalmente los Jusos y los movimientos feministas que no compartían el estilo de vida de la generación anterior, y rechazaban la civilización tecnocrática, el consumismo y el crecimiento económico sin control. Los estudios confirman, por tanto, la imagen del SPD como un partido de clase media, cuyos miembros en su gran mayoría tienen una movilidad ascendente.

La figura indiscutible del partido durante todos estos años, aun después de su caída como canciller, fue Willy Brandt, que proyectaba una imagen como dirigente de gran integridad personal, honesto y simpático. Era proverbial su moderación en el uso del poder, tolerancia con los disidentes y talante conciliador, ya que trataba de buscar siempre el consenso entre sus colegas. Además, demostró gran habilidad para integrar a las tendencias enfrentadas en las luchas internas del partido.

Los líderes de las diversas tendencias tuvieron muchas dificultades para trabajar en equipo y, aunque sus diferencias ideológicas no eran muy importantes, su relación no contribuyó a la cohesión del partido. En los periodos anteriores a los procesos electorales de 1976 y 1980 prevaleció la armonía entre los líderes, sobre todo porque todos tenían un gran interés en mantener el statu quo. Schmidt necesitaba a Brandt, que seguía siendo un dirigente muy popular, y a Wehner, puesto que el apoyo del Grupo Parlamentario (ala izquierda del partido) a la política del gobierno era esencial(9), y Brandt y Wehner necesitaban a Schmidt puesto que su popularidad entre los electores se mantenía en un nivel muy alto. Era cierto por tanto el dicho de que "Brandt es el mejor vendedor de la política que Wehner diseña y Schmidt pone en practica" (10).

Ahora bien, en el transcurso de las legislaturas se rompía la tregua que había entre los tres dirigentes. En

junio de 1977, por ejemplo, Wehner, el presidente del Grupo Parlamentario, furioso porque no todos los diputados socialistas habían apoyado un proyecto de ley sobre impuestos del gobierno, culpó a Brandt de no haber informado suficientemente al partido de la necesidad de esta medida, a lo que Brandt respondió reafirmando su lealtad hacia Schmidt y su gobierno. En 1979 el ala derecha del SPD insinuó que Brandt había perdido el control y debía acabar con el exceso de discusiones dentro de la organización. Al principio de los años 80 un bloque intermedio con orientación de centro-izquierda intentó restablecer la paz entre los sectores pero no tuvo éxito y en las agrupaciones más importantes del partido, como Berlín, Munich y Frankfurt estalló una guerra abierta.

La atmósfera de tensión y rencillas que había en el SPD perjudicó su reputación. Willy Brandt, disgustado por la proliferación de tendencias, se irritó mucho más cuando varios ministros de su gabinete trataron de encabezar nuevos grupos internos, y muchos líderes que advirtieron contra la formación de fracciones y camarillas tenían miedo de que estas escisiones condujeran a la formación de nuevos partidos políticos. En 1974 Schmidt llamó la atención a los altos dirigentes del partido puesto que los enfrentamientos calificados como "enfermedad de Berlín", por el conflicto entre la izquierda y la derecha en esta ciudad, eran fuente de noticias para los medios de comunicación. Glotz, por su

parte advirtió a la derecha que la izquierda también tenía un papel que jugar, y que si se arrinconaba irreflexivamente la "teoría", se corría el peligro de tomar el poder para no saber qué hacer con él (11). Para Glotz las discusiones teóricas y la búsqueda del poder no eran contradictorias, pero manifestaban que el espectro del partido era demasiado extenso y debía ser reducido porque los extremos estaban paralizando su actividad.

Esta proliferación de fracciones y subfracciones durante el gobierno del SPD tuvo consecuencias positivas y negativas; por una parte permitió la articulación de las opiniones de quienes tenían una ideología común y aumentó la democracia interna, pero, por otra, la pérdida de militantes debilitó la estructura del partido y coadyuvó a las derrotas electorales. McKenzie ya había advertido años antes que estaban claramente definidos los límites más allá de los cuales no se debería permitir organizarse a las minorías si un partido quiere funcionar como un contrincante coherente en la lucha por el poder (12).

Respecto a la democracia interna, los altos dirigentes declaraban teóricamente que se ejerciera al máximo, pero en la práctica se preocupaban poco de ella. Organizaban procesos electorales internos pero en casi todos los casos determinaban quiénes deberían ser los candidatos. Se aseguraban de que sus propias opiniones fuesen transmitidas desde arriba, a través de los congresos y las reuniones, hacia la base para obtener el apoyo de sus militantes. En junio de 1979, por ejemplo, los líderes de la izquierda, Junker y Scherf, presentaron a los máximos órganos del partido un informe que trataba fundamentalmente sobre los problemas de los militantes. El informe constataba que muchas veces éstos se sentían solamente como una cifra estadística

cuyas quejas y opiniones no merecían consideración. El compromiso personal se veía obstaculizado por la excesiva rutina y burocracia, por el distanciamiento entre militantes, dirigentes y diputados y por la incapacidad del gobierno para aceptar algunas de las resoluciones del partido. La resignación y la pasividad eran el resultado de que los militantes fuesen considerados como un grupo de apoyo a los individuos que buscan el poder político y de que las decisiones se tomaran sin su participación (13).

El resultado de todo esto era la destrucción de las iniciativas individuales y de la espontaneidad. Estas eran las principales razones de la pérdida de militancia en toda la República Federal Alemana a las que había que añadir la política del gobierno, una evidente pérdida de la credibilidad moral del partido y la dificultad de los jóvenes para promocionarse si los viejos militantes se mantenían en sus cargos. La conclusión era que cuando la actividad en el partido dejase de ser interesante para los militantes, entonces los grupos de iniciativa ciudadana se constituirían en alternativa de la acción política (14).

Ahora bien, el partido nunca tuvo facciones organizadas en el sentido habitual del término. Han existido y existen, sin embargo, grupos informales y grupos y asociaciones que representan líneas bastante precisas que, especialmente durante los años en que el SPD estuvo en el gobierno se enfrentaron con dureza dos de estos eran el Seeheimer y kreis, liderado en aquel momento por Hans-Jochen Vogel y situado a la derecha (con fuerza sobretodo en el grupo parlamentario), y el Frankfurter kreis, compuesto por exponentes más jóvenes del partido (entre ellos, Lafontaine y el líder del movimiento IGE Metall Franz Steinkühler), con fuerza principalmente en algunas organizaciones locales como la de Frankfurt y la de Hannover, y situado a la izquierda. Los Jusos siempre han representado un papel especial y más radical llegando incluso a ser sancionados disciplinariamente por el partido. En conjunto, sin embargo, ninguno de estos grupos

ha adoptado jamás una estructura claramente definida ni ha actuado como grupo organizado en el seno del partido (15).

Por lo que se refiere al Programa, después del documento elaborado en 1968 "Perspectivas de la política socialdemócrata en la transición hacia los años 70", el Congreso de 1970 estableció una comisión presidida por Helmut Schmidt, con la colaboración de Hans Apel y Jochen Steffen para redactar el borrador de un "Sistema político-económico de orientación para los años 1973-85" denominado "Programa de largo alcance". El documento pedía reformas progresivas basadas en unos índices de crecimiento económico cuantificables entre el 4 y el 6 por cien del PNB e intentaba vincular las obligaciones programáticas del partido

a

la

planificación limitada del gobierno. En defensa de la orientación tecnocrática del gobierno, Apel argumentó que desde Godesberg "hemos renunciado a la creencia en una sociedad socialista definida previamente con exactitud". Schmidt se sumó a esta forma de ver las cosas, aunque tanto Apel como él no deseaban ir más allá de los principios de Godesberg ni gobernar el partido en una dirección más socialista (16).

El partido nombró una comisión planificadora y grupos de especialistas para emitir informes de asesoramiento, con la obligación de reunirse en una fecha tope de dos años. Así, en enero de 1975 presentó a la ejecutiva un borrador de 245 páginas titulado de nuevo "Sistema económico-político de orientación para los años 1973-85" (denominado OR 85), que a su vez se había consensuado entre las diferentes tendencias ideológicas del partido (17).

OR'85 fue sometido a la aprobación en el Congreso de Mannheim de 1975, representó un consenso dentro del SPD sobre la doctrina de la socialdemocracia, y además fue la primera vez que un partido desarrollaba una perspectiva a largo plazo sobre la base de su programa fundamental.

El programa define los tres valores básicos del socialismo, libertad, justicia y solidaridad. Para solucionar el problema de las materias primas y para combatir el poder de las multinacionales los partidos socialistas europeos necesitarían llevar a cabo políticas comunes. Tomando una vía intermedia el programa subraya que ni la libre empresa ni la economía centralizada han producido las condiciones sociales deseables; por ello se han de crear estructuras económicas nuevas basadas en la paridad entre empresarios y trabajadores para poder mejorar la vida cultural y social de estos últimos, darles acceso a la acumulación del capital, asegurar su empleo y hacerles participes en la gestión de la política económica.

El papel del Estado es fundamental como instrumento para llevar adelante las medidas económicas y sociales que requiere una dirección políticamente satisfactoria, debido a que el 40 por cien del producto social es distribuido por

las instituciones públicas. El programa se mostraba a favor de una economía mixta en la que se complementasen las fuerzas del mercado y la planificación y en la que la propiedad pública estuviese bajo control democrático.

En el capítulo sobre la "Ejecución de las medidas socialdemócratas", OR'85 reflejaba la estrategia dual de la izquierda para movilizar tanto a los agrupaciones locales del partido como a otros grupos democráticos. Pedía al partido que se informara de los problemas y los deseos de los electores; que les informara sobre la política del SPD; que desarrollara una orientación política a largo plazo para que identificaran la socialdemocracia más allá de los problemas cotidianos; que cooperara con otras fuerzas democráticas y rechazara las opiniones de quienes se oponían a la política reformista socialdemócrata; que fomentara las actividades de los ciudadanos en las áreas de la vida cotidiana que les afectan directamente y que entablara un diálogo con las iglesias, los sindicatos y otras asociaciones (18).

Al resumir OR'85, Brandt escribió: **"El Marco de Orientación no es un sustituto del Programa básico de Godesberg, pero lo suple en aspectos importantes, y plantea soluciones a problemas con los que es posible enfrentarse en el tiempo que nos queda hasta 1985 "** (19).

Después de cinco años de elaboración, la redacción final era el resultado de prolongadas discusiones internas

que vigorizaron al SPD en todos los niveles. Aun así, el programa sufrió continuos ataques desde la izquierda, que lo juzgaba como una victoria de la derecha considerándolo como una reafirmación del sistema capitalista puesto que no contemplaba el tema de la burocracia estatal, la articulación de los intereses, las relaciones con los sindicatos y la solidaridad con el Tercer Mundo, entre otras muchas cosas.

Los críticos señalaron lo difícil que era para el partido reunir todas las tendencias bajo el mismo techo y formular un programa satisfactorio para todos, pero al mismo tiempo ellos habían conseguido algunas concesiones importantes respecto del primer borrador como, por ejemplo, que no se apoyase totalmente el sistema de libre empresa. El programa pedía además el control sobre las multinacionales, incluía una sección sobre la inversión planificada y la planificación sectorial y regional, suprimía la noción del crecimiento económico como condición previa de las reformas e incluía la reivindicación de la reforma del sistema de codecisión (20).

Sus defensores afirmaban que el programa tendía un puente entre el de Bad Godesberg y la política actual, que servía para integrar al partido después de muchos años de discusiones, reducía las diferencias entre los ideólogos y los pragmáticos, concretaba más la discusión teórica, moderaba las reivindicaciones de la izquierda y actuaba de guía para las iniciativas socialdemócratas del gobierno y de modelo para los partidos hermanos de Suecia, Bélgica y Suiza que estaban a punto de confeccionar también programas a largo plazo.

Con todo, Schmidt advirtió a los delegados del Congreso que el programa no podía ser utilizado como base

para las tareas diarias del gobierno, señalando las dificultades que habría para ponerlo en práctica dada la necesidad de establecer compromisos con sus aliados del FDP. A pesar de todos estos esfuerzos y pactos pocos años después, en la campaña electoral de 1976, se habló poco de él y algunos aludieron a su "muerte prematura", pero en realidad sirvió como directriz teórica de muchas de las actuaciones que los socialdemócratas emprenderían en el futuro.

A partir de entonces ha habido diversos intentos de discusión programática o ideológica, bien oficialmente a través de la formación de comisiones o bien extraoficialmente como preocupación de los militantes o como aportación de los teóricos. En 1974 se formó una nueva comisión que, presidida por Erhard Eppler, presentó tres años más tarde un informe titulado "Valores básicos en un mundo amenazado". Estos valores socialistas básicos tenían la misma importancia para todos y no se podía omitir ninguno en interés de otro. A finales de 1975 más de 200 universitarios y políticos de la izquierda no marxista formaron la "Iniciativa Universitaria del Socialismo Democrático", cuyo propósito era acabar con el aislamiento de la Universidad, formar grupos para analizar las condiciones contemporáneas y desarrollar teorías que posibilitasen la marcha del neocapitalismo hacia el socialismo.

Deseaban que su grupo, situado a la izquierda teórica del SPD, fuese crítico con el partido y superase tanto la falta de perspectivas socialdemócratas como el dogmatismo marxista. Trataban de llenar el vacío teórico cuyas consecuencias eran que gran parte de la juventud universitaria estuviera poco dispuesta a afiliarse al partido, y además editaron algunos libros (21).

En el primer volumen publicado en 1977 Fenner y sus

colegas señalaban que actualmente no había una teoría consistente que abarcara los objetivos, los medios y las consecuencias de un programa. Este déficit de teoría se debía al continuado recurso al pragmatismo mediante programas diseñados para los electores y análisis marxistas fallidos. Los objetivos analíticos e instrumentales del socialismo democrático debían desarrollarse mediante aproximaciones metodológicas multidisciplinarias y pluralistas. Los autores trataban así una serie de temas que deberían estar en las raíces de la estrategia del SPD (22).

Consciente de este problema de comunicación con la sociedad, el partido programó en 1979 cierto número de foros que deberían tratar sobre cuestiones de futuro como "trabajo y tecnología", "la política de medio ambiente entre ecología y economía", "la burocracia administrativa", etc. Los foros eran proyectados por especialistas que hacían el trabajo preparatorio, abrían un debate con las preguntas adecuadas y obtenían así las perspectivas teóricas para los años 80 en estrecho contacto con los militantes (23).

Aun así los teóricos se lamentaron del fracaso del partido para iniciar los debates posteriores al OR'85 sobre la política económica, las iniciativas de desarme y los peligros para las libertades civiles. Querían que el partido se mantuviese siempre por delante del gobierno en la formulación de objetivos. El partido debería establecer las prioridades programáticas y proponer soluciones a los problemas urgentes. Este marco teórico evitaría que se convirtiese en una formación dispuesta exclusivamente a aprobar sin más la política del Canciller.

Así pues este período estuvo marcado por la discusión doctrinal e ideológica entre diversos grupos, sectores y

tendencias, pero la postura oficial estuvo siempre representada por el triunfo del centro-izquierda que se apoyó en gran medida en el programa reformista de Bad Godesberg, aunque también aceptó en ocasiones algunas de las propuestas de la izquierda para democratizar muchas áreas de la vida política.

Estas discusiones ideológicas y programáticas delimitaban claramente el juego político de las tendencias en su lucha por alcanzar el control del partido. Así, por ejemplo, en 1973 la derecha se vió amenazada por la fuerza revolucionaria de las propuestas de los Jusos, y sus dirigentes e intelectuales comenzaron una fuerte oposición contra los argumentos teóricos de las juventudes socialistas. A principios de 1974 Bruno Friedrich envió un informe a la Ejecutiva del partido en Bonn, como inicio de la ofensiva del ala derecha pidiendo al partido que recordara los principios de Bad Godesberg para mantener la solidaridad y se opusiese a quienes deseaban la huelga quirúrgica como medio para mejorar las cosas, porque esas opiniones ofenderían a los electores potenciales (24).

En 1974 Hans-Jochen Vogel, en un artículo teórico, subrayaba la necesidad de alcanzar niveles superiores de calidad de vida, la autorrealización más allá del consumismo y de poner fin al crecimiento desenfrenado. Atacaba las nacionalizaciones porque conducían a un nivel cada vez mayor de burocratización, y pedía la regulación de la autonomía y libertad sindical en favor de la planificación regional (25). En 1975 Vogel y sus colegas publicaron "Bad Godesberg y el presente" en otro intento de movilizar a la derecha contra la izquierda y de aportar ideas teóricas desde un punto de vista no de izquierdas. El énfasis de los autores en el programa de Bad Godesberg era una crítica explícita a las medidas y proyectos que se habían apartado de él (26).

Otro de los representantes más significativos de esta corriente era el profesor de ciencia política Richard Löwenthal, quien afirmaba que a largo plazo las democracias occidentales podrían sobrevivir sólo si los socialdemócratas ejercían un control cada vez mayor sobre la economía y aumentaba la democracia política para obtener mayor seguridad y justicia social. Pero debían mantenerse a medio camino entre una economía libre y una economía dirigida (27). A su derecha todavía existían algunos grupos que proclamaban que el SPD se había convertido en un "partido de gente de izquierdas" y señalaban los peligros de una discusión teórica basada en el marxismo (28).

La mayoría de los militantes del ala derecha eran sin embargo moderados, se consideraban los herederos de la tradición reformista de Bernstein, se manifestaban anti-Jusos y anticomunistas y defendían el neocapitalismo.

Otra corriente del partido se situaba ideológicamente en el centro-izquierda. Estos aceptaban también la doctrina revisionista de Bernstein pero actualizándola. Eran más favorables a algunas de las propuestas de los Jusos e intentaban siempre tender un puente entre la derecha y la izquierda del partido mediante propuestas que pudiesen ser aceptadas por ambos sectores.

Peter Von Oertzen, con su discurso titulado "Tesis para la estrategia y la táctica del Socialismo Democrático en la República Federal de Alemania", que pronunció en el Congreso de Frankfurt de 1973, se convirtió en el punto de partida de esta nueva discusión teórica que tuvo repercusiones en el diseño del programa. Defendía una actitud reformista en la que el partido serviría tanto de agente estabilizador como de cambio del sistema capitalista. El movimiento socialista debería desarrollarse dentro del orden

establecido en vez de empeñarse en provocar la confrontación. Había que democratizar poco a poco los centros de poder económico y político en lugar de atacarlos frontalmente, de tal manera que se impidiese la destrucción de una alternativa socialista democrática y había que cambiar la estructura social con medios legislativos y administrativos. Sólo si el SPD permanecía unido y poderoso y conservaba sus raíces en la sociedad podría conseguir sus objetivos (29).

Por su parte, Glotz estaba a favor de un "cambio controlado del sistema" que contemplara las necesidades de los millones de personas que esperaban que las reformas diesen satisfacción a sus esperanzas de progreso. Reconocía que los Jusos habían aportado una nueva dimensión creativa al suscitar cuestiones que el SPD no había sabido plantearse, ocupado como estaba en las tareas administrativas de gobierno. El partido, por tanto, tenía que perseguir dos objetivos simultáneos: ser receptivo a las nuevas ideas trasladándolas a la acción política y continuar siendo la fuerza política en la que confiaba la mayor parte de los electores para gobernar el país. En resumen, Glotz defendía una síntesis entre utopía y realidad dentro de la cual el partido escogería el camino que acercara a la sociedad cada vez más hacia el socialismo (30).

A la izquierda de estas corrientes se encontraban los Jusos y otros grupos. Las Juventudes Socialistas, que eran la fracción más importante dentro del partido nunca obtuvieron la mayoría a nivel federal pero en muchas ocasiones desplazaron a los líderes de organizaciones locales tan importantes como Munich o Frankfurt. De todo el conjunto de jóvenes socialistas calculado aproximadamente en 300.000, los Jusos eran unos 80.000. Constituían uno de

los grupos más activos del SPD, que a principios de los años 70 capitalizaron el interés creciente de los estudiantes en las reformas educativas y políticas. En el congreso que celebraron en 1970 aprobaron resoluciones muy radicales sobre la política de defensa, el capitalismo, la codecisión y la política social. La radicalidad de sus reivindicaciones tropezaba con las expectativas de un electorado conservador que simpatizaba más con las propuestas moderadas del SPD. Los Jusos se enfrentaron en múltiples ocasiones con los dirigentes del partido, sobre todo con el Grupo Parlamentario, que constituía el sector más derechista; a su vez se subdividían en fracciones internas, y a finales de la década se vieron enfrentados a medidas disciplinarias y a una política socialista muy conservadora. Algunos dejaron el partido y otros redujeron considerablemente su actividad interna.

En un documento de crítica al partido, sus dirigentes sostenían que el SPD para vender la imagen de "partido popular" quitaba importancia a la división entre las clases sociales y no hablaba de las diferencias entre los distintos estratos sociales ni de las maneras en que se podía repartir la riqueza. A causa del estancamiento económico las diferencias estructurales siguen existiendo y crecen las tensiones entre los trabajadores. El partido encubre estos problemas, que son endémicos en el sistema capitalista, y al mismo tiempo trata de despolitizar y desmovilizar los intereses que pueden oponerse a sus opiniones, convirtiendo el mantenimiento de su organización en uno de sus principales objetivos. Si el SPD hubiese emprendido hace tiempo una verdadera política reformista hubiese recogido los dividendos electorales, pero en su lugar se convirtió en un partido "estatal" que mostraba poco interés en hacer cambios sistemáticos fundamentales (31).

En 1973 Willy Brandt quiso crear un Instituto de Socialismo Democrático para fomentar el acuerdo de las diversas tendencias y reavivar las discusiones teóricas, pero la idea fue pronto abandonada a medida que surgieron los conflictos por ver quién presidiría el instituto y bajo quién estaría su control. La derecha, temerosa de que se creara un instituto marxista, sugirió que lo presidiera R. Löwenthal. El teórico de los Jusos Strasser rechazó este nombramiento a causa de las opiniones conservadoras de Löwenthal y sugirió en su lugar a Habermas, pero su nombramiento era inaceptable para la derecha. Por otra parte la izquierda quería que el instituto tuviese un carácter independiente, mientras que la derecha insistía en que formase parte de la Fundación Ebert. Al final no hubo consenso entre los dos grupos y el instituto nunca llegó a crearse, (32) lo que puede considerarse como un hecho sintomático de lo que había sucedido durante esos años en la vida interna del partido.

1.3. El éxito frente a la crisis económica

Con la formación de la primera coalición entre socialistas y liberales en 1969 la economía alemana fue a parar a manos de Karl Schiller, quien había orientado esta importante faceta de la política del SPD desde el programa de Bad Godesberg. Schiller relanzó las inversiones y la política social, revaluó el marco y en general aplicó una política económica keynesiana. Entre 1969 y 1971 el gasto real

del Estado subió del 8 al 11 por cien del PIB ,muy influido por la presión demográfica, la gestión de la demanda y el boom económico resultante de los acuerdos salariales de la Acción Concertada con los sindicatos entre 1968 y 1969. El marco fue revaluado el 9'3 por cien en octubre de 1969 y después de insistentes presiones hubo otras revaluaciones del 13,6 por cien en 1971 y de 11'1 por cien en febrero de 1973 antes de que fuese finalmente alineado junto con otras monedas europeas en marzo de 1973.

Desde finales de 1968 a marzo de 1970 al amparo de la Ley sobre Estabilidad Económica Exterior se aplicaron otras medidas para reanimar las exportaciones y reducir las importaciones, ley que se reintrodujo de forma modificada en 1972. Hasta 1973 ninguna de estas numerosas medidas tuvo algún efecto estabilizador positivo ya que la inflación había alcanzado el 6'9 por cien poco antes de la primera crisis del petróleo.

Dado el papel central que Schiller otorgaba a la inversión y la limitación de la actividad del Estado a medidas económicas globales más que a una dirección "planificada" de las inversiones privadas, los avanzados planes del Ministerio de Economía dependían totalmente de la cooperación de los grupos más poderosos en un economía altamente concentrada por lo que se les obligó a "implicarse en la redacción de estos planes". Una planificación global no hubiese sido posible en una economía competitiva atomizada debido a la imposibilidad de aportar adecuadamente futuros programas de inversión (33). El mismo Schiller habló de que tuviesen acceso a las macrodecisiones los oligopolios y grupos organizados subordinando su política de gestión de la demanda a los planes inversores de los grandes oligopolios. De esta manera su política fue criticada por la izquierda por que estaba subordinada al capital monopolista.

Muchas otras de sus decisiones tampoco se consideraron de carácter progresista. Así por ejemplo se le criticó la idea de que juzgase las inversiones como un fenómeno unívoco que tiene resultados benéficos tanto para el crecimiento económico y de la renta como para el empleo, considerando que el Estado lo único que ha de hacer es alimentar la máquina económica para producir los niveles requeridos de crecimiento. Un fallo todavía mayor de la política nacional se refería a la flexibilidad y efectividad del gasto del Estado. En ese sentido, el plan presupuestario que tomaba cuerpo en la Ley de Estabilidad ignoraba el compromiso predominante del gasto del Estado hacia las áreas no-cíclicas, como defensa, educación, investigación, protección ambiental, agricultura, etc. Y por último se ponía en entredicho la capacidad y voluntad de todas las secciones del aparato estatal para llevar a cabo y coordinar dicha política (34).

Schiller dimitió como Ministro de Economía y Hacienda en 1972. Su salida marcó el final del intento coordinado para reconciliar la economía monopolizada de Alemania con su estructura fiscal federal y la independencia del Bundesbank, a fin de resolver los problemas cíclicos y estructurales de la economía y realizar el programa de reformas del SPD. Con él terminaba el keynesianismo en Alemania que no logró sobrevivir a la segunda recesión de 1975.

La crisis que comenzó en 1974-75 fue la recesión económica más seria que tuvo Alemania Occidental después de la II Guerra Mundial. La economía se estancó en un momento en el que el crecimiento económico era de crucial importancia para las medidas de reforma social iniciadas y planificadas por la coalición gobernante entre socialistas y liberales después de 1969. Cuando el número de parados, uno de los indicadores más importantes de la crisis económica alemana, sobrepasó el millón, por primera vez en 1975, el orden de

prioridades políticas cambió de forma significativa y el centro del debate político ya no fueron las políticas sociales sino el desarrollo económico y la política económica nacional (35).

TABLA 2

LA ECONOMIA ALEMANA 1970-85

<u>Año</u>	<u>Crecimiento del PNB</u>	<u>Inflación</u>	<u>Desempleo</u>
1970	5.1	3.3	0.7
71	2.9	5.2	0.8
72	4.2	5.6	1.1
73	4.7	7.0	1.2
74	0.3	7.0	2.5
75	-1.6	6.0	4.7
76	5.4	4.3	4.6
77	3.0	3.7	4.5
78	2.9	2.7	4.3
79	4.1	4.1	3.7
80	1.4	5.5	3.7
81	0.2	5.9	5.3
82	-0.6	5.3	7.6
83	1.2	3.3	9.3
84	2.6	2.4	9.3
85	2.6	2.2	9.4

Fuente: Deutsche Bundesbank.

La guerra árabe-israelí de octubre de 1973, el boicot petrolífero de los árabes y la consecuente subida en el

precio fijo del crudo de la OPEP fueron la cadena de sucesos que determinaron claramente la recesión en los países de la OCDE. Ahora bien estos hechos se combinaron con una serie de factores complejos que determinaron la fuerte reducción del Producto Nacional Bruto, la alta tasa de paro, la inflación, el descenso de la inversión, etc. todos los cuales caracterizaron la crisis del 74-75. Esta crisis se analiza hoy día a través de la combinación de un conjunto de factores como son el ciclo económico, la estructura de la economía y el proceso político, pero entonces el gobierno social-liberal la percibió como el resultado de una recesión internacional, es decir una recesión importada a causa de la intensa integración de la economía alemana en la economía internacional, de acuerdos salariales demasiado altos y de la extensión de las actividades del Estado más allá de límites aceptables.

En 1975, con una caída del PIB del 1'9 por cien no sólo el paro alcanzó su más alto nivel en veinte años (1.047.000 parados), sino que la inflación superó el 6 por cien por tercer año consecutivo, y el déficit del sector público aumentó del 0'7 por cien del PIB en 1973 al 5'4 por cien en 1975. Pero al año siguiente comenzó ya la recuperación, ayudada por el estímulo presupuestario a la inversión que cuadruplicó las exportaciones de bienes manufacturados a las economías del Oriente Medio ricas en petróleo, restaurando así la balanza comercial con esta región. De esta manera en 1976 el PIB creció en un 5'1 por cien en terminos reales, y el desempleo cayó solamente el 0,1 por cien aunque continuó acelerándose el cierre de empresas.

El programa a largo plazo que se había marcado el gobierno en 1975, con sus ambiciosas metas económicas y de política social, tuvo que modificarse por las limitaciones

que imponía la economía mundial y la persistencia de las tasas de paro, inflación y los cierres empresariales. El compromiso de priorizar el pleno empleo fue neutralizado por la impotencia fiscal del SPD, cuyo diagnóstico subrayó la necesidad de aplicar restricciones salariales, recortes en los impuestos a las empresas y un estrecho control monetario del gasto del Estado.

Con esta política la recuperación se hizo evidente en 1977. El desempleo cayó por debajo de la barrera psicológica del millón, el déficit del sector público se había recortado hasta alcanzar el 2'7 por cien del PIB y la inflación se mantuvo por debajo del 3 por cien. No obstante durante 1978 se temió por el estancamiento de la recuperación obstruida por una política fiscal de ajuste, por un aumento de la conflictividad sindical, y un proteccionismo creciente.

En tales circunstancias el Canciller Schmidt, en la cumbre de Bonn de 1978, se lanzó a una política de reflación a gran escala por un importe de 13.000 millones de marcos -equivalentes al 1 por cien del PIB- mediante la extensión de privilegios fiscales a la industria y la incentivación del consumo. La economía alemana que había sido criticada al inicio de los años 70 por mantener un enorme superávit comercial exterior de más de 10.000 millones de dólares por año, iba a actuar ahora como "locomotora" para librar a la economía mundial de una nueva y temida recesión. Esta reflación fue sorprendente a corto plazo puesto que hizo crecer el PNB en un 3'5 y un 4 por cien respectivamente en 1978 y 79, aunque a costa de un aumento en la tasa de inflación y el crecimiento del déficit presupuestario.

Al final de los años 70 se decía que Alemania era uno de los países que se había enfrentado con mayor éxito al reto económico de la crisis. El éxito del modelo alemán se

consideró un logro político resultado de la administración pragmática del gobierno social-liberal y de la cooperación de los sindicatos. El PNB había crecido en términos reales un 12'7 por cien entre 1976 y 1980, o un 2'5 por cien anual. La población trabajadora aumentó en unos 700.000 activos. Los trabajadores asalariados subieron desde 21.939.000 en 1976 a 22.960.000 en 1980; el desempleo cayó en 161.000 unidades en el mismo período, es decir del 4'6 al 3'8 por cien. En 1980 la producción industrial había sido un 10'2 por cien más alta que en 1976, las inversiones crecieron una media del 5,4 por cien al año, el consumo privado un 2'4 por cien y el del Estado un 2'8 por cien. Esta política reflejó la racionalización del aparato productivo interno que se puso en marcha para incrementar la productividad del trabajo y reducir el coste laboral, a través de una expansión de la demanda interna en servicios específicos, como banca, seguros, sanidad, etc., de la demanda general para productos industriales, como bienes de inversión y bienes de capital, y, sobre todo, a través de la expansión de la exportación que fue la que más ayudó a sostener el ritmo modesto del crecimiento en este período. Pero poco después, a comienzos de los 80 este éxito se vió empañado y a medida que el paro aumentó mas allá de los dos millones el gobierno cedió en su intento de disminuir el rápido incremento de la deuda nacional con recortes presupuestarios drásticos.

La nueva recesión empezó en 1981 con una caída del 0'3 por cien del PIB real y se agravó en 1982 cuando alcanzó el 1'1 por cien. El nivel de paro aumentó en 400.000 unidades en 1981 y 561.000 en 1982, y quizá fue más dramático el crecimiento de las quiebras empresariales que resultó

ser un 85 por cien más alto que el punto alcanzado en 1975 y continuó aumentando en 1983 y 1984.

Algunos de los factores que claramente contribuyeron a la crisis de los primeros años 80 fueron la subida de los costes laborales, la competencia internacional y el creciente nivel de bienestar social.

Durante 1979 el coste del trabajo por hora, incluyendo la seguridad social, subió a 21 marcos frente a la cifra de 12 marcos que subió en Japón. En años anteriores el aumento de la productividad compensó estos aumentos salariales, pero en la década de los 70 Alemania tuvo que enfrentarse a poderosos competidores, particularmente de los países recién industrializados del Sureste Asiático, que tenían costes laborales mucho más bajos y altos índices de productividad. Otro factor que subyacía a los problemas de competitividad fue la revaluación del marco que siguió al establecimiento del tipo de cambio flotante en 1973 y posteriormente al Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979.

Otro factor, común al resto de los países occidentales, fue el creciente nivel de bienestar social garantizado por el gasto público del gobierno entre 1966 y 1980. Este había empezado a estimular la inversión privada y había supuesto un aumento de las cargas sobre los empresarios en lo que se refiere a las contribuciones de Seguridad Social. De esta manera, y con la reducción de los beneficios internos, el índice de crecimiento de la inversión industrial dentro del país empezó a bajar durante los años 70, mientras que la inversión alemana en el exterior, sobre todo en Estados Unidos pero también en países en vías de desarrollo, aumentó espectacularmente.

Con la segunda crisis petrolífera y el retroceso del comercio mundial los problemas salieron a la superficie entre 1980 y 1985. La economía alemana se hundió en su más

profunda recesión desde el período de entreguerras. En 1979, como resultado de una subida repentina en el coste de la factura de importación de petróleo, la R.F.A. registró su primer déficit comercial desde 1965. Esto fue seguido por una fuerte subida en el nivel de paro, rompiendo la barrera del millón en 1981 antes de alcanzar la media de 2'3 millones entre 1983 y 1985, una cifra equivalente al 9 por cien de la población activa. La inflación también se acercó al 5 por cien, mientras los tipos de interés subieron más todavía. La crudeza de esta recesión se reflejó en el hecho de que el PIB disminuyó en los dos años sucesivos, 1981 y 82, y creció sólo un 1 por cien en 1983. Con los mercados mundiales paralizados, a Alemania le fue imposible salir de la recesión antes de 1984. El colapso político y económico durante estos años de un importante número de mercados para las exportaciones alemanas, como los endeudados países del Este, Nigeria, Irán y sus vecinos, que habían supuesto el 17 por cien de sus exportaciones en 1977, tampoco contribuyó a mejorar la situación (36).

Cuando empeoró la crisis económica en 1980-81 la coalición social liberal, en contraste con la política emprendida en 1974, no respondió con una política fiscal expansiva, sino que por el contrario ayudó a deprimir la economía con recortes radicales en el gasto público. De esta manera el gobierno sólo tuvo una salida: la austeridad fiscal.

La consecuencia más importante de las medidas económicas que se tomaron en 1981-82 fue que perjudicaron sobre todo a las bases sociales y políticas del partido socialdemócrata y de los sindicatos: los trabajadores. De acuerdo con el estudio que realizó el "Instituto de Investigación Económica y Social" de los sindicatos, las rentas de los asalariados fueron las que tuvieron que contribuir en mayor

medida a la estabilización de los presupuestos públicos. Los trabajadores tenían que soportar más del 90 por cien de la carga total del sector privado entre 1982 y 1985. El Estado no podía permitirse el lujo de mitigar por sí solo los costes sociales de la modernización económica y tenía que pedir sacrificios a los demás actores sociales. Esa fue la razón material de la ruptura del consenso político que sostenía el "Modelo alemán" (37).

En cuanto a la política social, a comienzos del período social-liberal las autoridades públicas empezaron a expandir sus inversiones a un ritmo superior al del crecimiento económico. Los ingresos sólo sobrepasaron los gastos en los años 1969, 70 y 73. Desde 1975 el déficit anual sobrepasó en un 5 por cien el gasto, y para el sector público el ratio del déficit en el gasto fue todavía más alto. La discusión que siguió a estas medidas en la segunda mitad de la década hizo frenar los presupuestos públicos y su crecimiento se puso a la par con el ritmo de crecimiento del PNB.

Así pues, los gastos sociales de la República Federal en el sostenimiento del salario, salud, vivienda, pensiones, educación etc., crecieron más deprisa que el total del gasto público; su proporción sobrepasó el 60 por cien en 1974, y aunque la consolidación de la legislación financiera en los últimos años 70 frenó considerablemente el ritmo de crecimiento, la proporción del gasto público dedicada a fines sociales ha permanecido por encima del 60 por cien.

En 1970 la seguridad social se extendió mas allá del conjunto de la población económicamente activa; en 1971 los estudiantes se incorporaron al seguro de accidentes, en 1972 el seguro de pensiones se amplió voluntariamente a

diversos grupos sin cobertura. En general podemos decir que se amplió muchísimo la clientela del Welfare, siendo los pensionistas el grupo más beneficiado puesto que en 1960 eran un tercio de la población con más de 60 años, mientras que en 1980 eran más de la mitad dentro del mismo grupo. También se generalizaron las prestaciones a la infancia en 1974, que se convirtieron en el segundo grupo más grande de la cobertura. Con todas estas medidas en marcha algunos autores afirmaron que solamente el 2 por cien de los hogares vivían en extrema pobreza. En ese sentido la afirmación de los cristiano-demócratas de que la pervivencia de la vieja "cuestión social" con la existencia de un proletariado pobre había sido resuelta contiene muchos elementos de verdad. Con todo, los más afectados por la pobreza continuaban siendo los parados y los ancianos (38).

Por lo que se refiere a las pensiones, en 1972 se llevó a cabo una importante reforma. Los derechos individuales se ampliaron con la introducción de una pensión mínima que subió el nivel de los grupos con rentas bajas, y se introdujo la flexibilidad en la edad límite de jubilación, bajando el mínimo a los 63 años. El coste de esta reforma se estimó en 10 billones de marcos anuales. El freno a la política expansiva de las pensiones llegó en la segunda mitad de los años 70 cuando el sistema de seguridad social entró en déficit. A partir de 1977 se introdujeron una serie de recortes que frenaron significativamente el ritmo de crecimiento (39).

En el aspecto de la sanidad, el crecimiento del gasto comenzó a acelerarse también a principios de la década cuando el gobierno aprobó diversas mejoras de las prestaciones, entre las que hay que mencionar el aumento del número de médicos y la renovación del instrumental. Este esfuerzo también se frenó en la segunda mitad de los años 70

cuando se estableció una forma corporatista de "acción concertada" que obligaba a las asociaciones de médicos y a los fondos de la seguridad social a vincular más estrechamente las negociaciones de las tarifas médicas al desarrollo de los salarios (40).

A su vez la subvención de la vivienda fue una herramienta política importante. Desde 1966 los subsidios para rebajar el interés sobre la deuda en el programa de viviendas sociales se ampliaron gradualmente a los grupos con mayores rentas construyendo así viviendas que serían ocupadas por los propios compradores.

Una ley aprobada en 1971 aumentó considerablemente el límite de ingresos para obtener una vivienda social. También amplió el derecho a obtener una subvención por el préstamo concedido a los constructores, que podía sobrepasar hasta en un 40 por cien el límite establecido hasta entonces, y como consecuencia de todo ello los presupuestos públicos para subvencionar las inversiones comenzaron a crecer de nuevo considerablemente (41).

En educación las leyes federales de 1969 y 1971 introdujeron un sistema extensivo de prestaciones para alumnos y estudiantes con rentas familiares bajas. Se construyeron nuevas universidades y aumentó el cuerpo de profesores. Durante varios años el gasto en educación tuvo prioridad en el presupuesto público de tal manera que entre 1969 y 1974 su proporción en el PNB subió del 3'4 por cien al 5 por cien. Con la recesión de 1974-75 la fase expansiva terminó. Entre 1975 y 1977 el gasto en educación disminuyó aunque comenzó a aumentar de nuevo en 1978 (42).

A partir de 1975 las políticas de reforma del Estado, las subvenciones a la infancia (1975), al trabajo juvenil (1976), a las pensiones (1978) y a la maternidad (1979)

fueron posibles gracias a la mayor aportación de la clase trabajadora, a los impuestos sobre la renta y a los fondos de la seguridad social.

Por lo que se refiere al paro, los programas de empleo iniciados por el gobierno federal en 1973 llevaron a la creación o mantenimiento de 200.000 empleos anuales entre 1974 y 1978. Estas medidas redujeron el nivel de paro entre una séptima y una quinta parte, pero no fueron suficientes para terminar con el desempleo masivo.

A comienzos de los años 80 apenas la mitad de los parados estaban subsidiados, una quinta parte recibía asistencia médica y un tercio no recibía ningún tipo de asistencia. La peor situación del desempleo se debió principalmente a la creciente duración del paro, pero el recorte de los derechos al subsidio que se ha producido desde 1975 ha tenido también un fuerte impacto.

Entre todas las familias que reciben algún tipo de prestación regular el porcentaje de las que recibían subsidio de paro creció del 1 al 10 por cien, entre 1973 y 1982. La proporción de desempleados que no recibían subsidios se estimaba entre un 10 y un 20 por cien. En este contexto de preocupación por el paro, durante la recesión de 1975 los subsidios estatales ascendieron al 29 por cien de los salarios totales, pero en 1980 esta proporción había bajado al 17 por cien (43).

Con todo se puede afirmar que hoy día las condiciones de vida de la población no son ya mera función de su posición en el mercado de trabajo sino que están cada vez más determinadas por transferencias y servicios provistos por el Estado. En 1978 el 80 por cien de los hogares alemanes recibían subvenciones estatales y, aun excluyendo las prestaciones estatales a los niños, el 50 por cien de los

hogares, aunque en diversos grados, dependían de las transferencias públicas. Ahora bien, ¿en qué medida han contribuido las transferencias públicas a una distribución más igualitaria de la renta?

En un estudio comparativo sobre el Estado de Bienestar llevado a cabo por el Instituto Europeo de Florencia se afirma que en el campo de las transferencias los obreros han obtenido un balance más favorable que los empleados y los trabajadores autónomos. En 1980 los trabajadores manuales recuperaban una cuarta parte de su contribución total, mientras que los empleados recibían solo una sexta parte, y los trabajadores autónomos menos de la décima parte de su contribución (44).

Esta política se dejó notar en todos los sectores. El gasto en salud, por ejemplo, condujo a mejoras considerables en la dotación de servicios médicos: en 1982 cerca de un millón de personas -el 40 por cien más que en 1973- estaban empleadas en el sector sanitario. Esto correspondía al 4'1 por cien de la fuerza de trabajo comparado con el 2'4 por cien existente en 1970. La vivienda también ha obtenido importantes subvenciones. Las casas han mejorado mucho en sus condiciones mínimas de habitabilidad, aunque la política parece que ha puesto mayor énfasis en estimular la oferta que en la redistribución social. En educación han desaparecido muchas desigualdades aunque persistan todavía algunas; desde 1975 la proporción de universitarios que provienen de la clase obrera ha permanecido estable. Sólo el 8 por cien de los jóvenes de clase obrera empezaban en 1975 estudios académicos frente a un 39 por cien de hijos de funcionarios del estado y un 20 por cien de hijos de trabajadores autónomos. El riesgo de marginación a principios de los años 80 era especialmente alto en unos 100.000

jóvenes que abandonaban la escuela cada año sin ninguna cualificación. Pero a su vez disminuye el número de alumnos por profesor y la desigualdad entre los sexos.

Así pues el gasto social que se había consolidado durante el mandato de los gobiernos cristianodemócratas (1958-69) tuvo una fase fuertemente expansiva en el primer período socialdemócrata (1970-75) y sufrió una recesión en el segundo (1976-83). En el primero, bajo el liderazgo de Willy Brandt, los gastos sociales se desarrollaron independientemente del crecimiento del PNB, mientras que en el segundo, bajo la dirección de Schmidt, fueron frenados y se les vinculó más estrechamente al ritmo del crecimiento económico. Con todo, los socialdemócratas promovieron mucho más activamente la expansión del Estado de Bienestar que los cristianodemócratas. El crecimiento del gasto social total en relación al PNB, fue en el primer caso de 7'5 puntos (1969-82), mientras que en el segundo fue de 4'4 puntos (1951-66).

Utilizando los términos desarrollados por Titmuss y Korpi podemos decir que los socialdemócratas alemanes abogan más por un modelo institucional de Welfare State, en el que las transferencias públicas y los servicios sociales cumplen el papel de complementar al mercado y a los hogares privados como un gran mecanismo de distribución, mientras que los partidos burgueses, por su parte, patrocinan un modelo más residual, donde los esquemas estatales quedan confinados a un papel subsidiario activados sólo cuando fallan el mercado o la familia (45).

Con todo, actualmente se camina hacia un denominador común de fórmula mixta en el que se han de combinar la ayuda estatal y la autoayuda familiar o de redes asociativas. Los socialdemócratas proponen para el futuro "ayuda

estatal amplia más solidaridad asociativa", mientras que la estrategia cristiano-demócrata se centra sobre "ayuda estatal sólo la necesaria, más solidaridad de los grupos primarios".

1.4. El DGB un sindicato fuerte

Ya hemos dicho que la formación de la Gran Coalición de 1966 entre la CDU y el SPD supuso un cambio en el equilibrio de fuerzas parlamentarias que dio lugar poco después a la coalición reformista social-liberal de los años 70. Uno de los frutos de esta coalición fue la modificación del marco institucional de las relaciones laborales que habían tenido vigencia en Alemania desde los años 50.

Esto fue posible gracias a la consistencia de uno de los Sindicatos más poderosos del mundo, el DGB, cuya federación central agrupa a 17 sindicatos industriales de todo el país, entre los que se encuentra el poderoso sindicato de los Trabajadores del Metal con más de dos millones y medio de afiliados (46).

A finales de 1980 había inscritos en el DGB, 5.376.454 de obreros, 1.658.121 de empleados y 847.942 funcionarios públicos (Tabla 3). Este panorama se completaba con dos sindicatos menores, el DAG Sindicato Alemán de Empleados Asalariados (DAG) y la Federación Alemana de Funcionarios (DBB). La doble militancia en los sindicatos y en el SPD era significativamente apreciable ya que en 1977 se contabilizó que un 58 por cien de los militantes socialistas estaban afiliados a los sindicatos, y de ese porcentaje la mitad

pertenecían al DGB. A principios de esa década los dirigentes del partido trataron de aumentar esos porcentajes creando la AFA (Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen), una comisión de trabajo que tenía la intención de atraer hacia el partido más trabajadores del sector de los servicios, cuyo peso era muy pequeño en relación al de los trabajadores industriales.

TABLA 3

Evolucion de la tasa de sindicación y porcentaje de los trabajadores afiliados al DGB 1971-80

<u>Año</u>	<u>Trabajadores</u>	<u>Afiliados al sindicato</u>	<u>Tasa de Sindicalización</u>
1971	22.599.000	6.869.000	30.4
1972	22.681.000	6.986.000	30.8
1973	22.837.000	7.168.000	31.4
1974	22.734.000	7.406.000	32.6
1975	22.460.000	7.365.000	32.8
1976	22.348.000	7.400.000	33.1
1977	22.377.000	7.471.000	33.4
1978	22.598.000	7.752.000	34.3
1979	22.854.000	7.844.000	34.3
1980	22.944.000	7.883.000	34.3

También entonces comenzaron las iniciativas sindicales para reformular la plataforma programática cuando el clima político y social parecía predispuesto a una política de reformas sociales. Ahora bien, lejos de reivindicaciones propias de programas sindicales anteriores los sindicatos proponían el control del poder económico

para impedir los abusos de las empresas, la participación de los trabajadores en los procesos de acumulación y la corresponsabilidad en la dirección a través de la codecisión. Por lo que respecta a los derechos de los trabajadores se reivindica sobre todo el poder adquisitivo, el puesto de trabajo y la humanización de las condiciones laborales.

Los sindicatos no querían perjudicar con agitaciones laborales las posibilidades electorales del SPD, ni obstaculizar políticamente los cambios estructurales que necesitaba la industria alemana para fortalecer su capacidad competitiva en el mercado internacional. Por ello se aprestaron a una política de concertación con el gobierno reformista tratando de aprovechar este período de colaboración en las relaciones industriales para fortalecer su posición en el mercado de trabajo donde obtuvieron sobre todo buenas garantías salariales.

No obstante, después de la victoria electoral del SPD en las elecciones de 1969 las relaciones entre el partido y el sindicato cambiaron debido a la voluntad política del gobierno para que su programa fuese más allá de los intereses específicos del DGB y representase los intereses generales. En el Congreso de 1972 Brandt afirmó que "los sindicatos no son el instrumento del partido, pero el partido tampoco es el instrumento de los sindicatos" (47).

A pesar de estas manifestaciones la colaboración entre ambos hasta 1977 fue constante. El SPD recibió créditos de la banca sindical para hacer frente a los costes de las campañas electorales y los cancilleres del partido nombraron a algunos líderes sindicales para formar parte de sus gabinetes. Así, por ejemplo, Walter Arendt, antiguo presidente del sindicato de mineros fue ministro de Trabajo desde 1969 hasta 1976, Georg Leber, antiguo presidente del sindicato de trabajadores de la construcción fue ministro de Defensa entre 1972 y 1978, y Kurt Gscheidle, antiguo vicepresidente del sindicato de correos fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones en 1974.

Por otra parte la "Acción Concertada" patrocinada por el gobierno y emprendida en 1967 por el ministro de Economía Karl Schiller, fue una de las primeras muestras del alcance de la cooperación entre partido y sindicato. Para promover la estabilidad y el crecimiento económico Schiller puso en marcha la máquina neocorporativa con el fin de consensuar las medidas económicas. Periódicamente se reunía con los representantes de los trabajadores y los empresarios para fijar las directrices de los salarios, los precios, las inversiones, la productividad y los beneficios. Después de las huelgas de septiembre de 1969 los sindicatos volvieron a la negociación colectiva y durante la expansión inflacionista de 1970 a 1974 consiguieron mejoras considerables en los salarios y en otros beneficios marginales. Sólo en 1977 la DGB se alejó de la Acción Concertada como protesta contra la decisión de los empresarios de cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Codecisión (48).

Cuando socialdemócratas y liberales formaron coalición por primera vez en 1969, los sindicatos reclamaron al SPD una política de mayor atención a las necesidades de los trabajadores que representaban la mayor parte de su electorado. Sus reivindicaciones tenían objetivos muy claros: mejorar las condiciones de los trabajadores en lo que se refiere a su participación en la riqueza, codecisión, seguridad e higiene en el trabajo, mayores prestaciones familiares, y seguridad social para los trabajadores no manuales. En los aspectos que no se refieren a las

relaciones laborales requerían la armonización de la política social dentro de la Comunidad Europea, mejorar las relaciones internacionales y contribuir más decididamente a la política de desarme.

Los dirigentes sindicales se comprometían a su vez a cooperar con el gobierno para evitar el aumento de la inflación asimilando la moderación salarial que el gabinete consideraba imprescindible si se quería mantener el nivel de crecimiento. A pesar de las reticencias y las acciones esporádicas de protesta en los sectores de la siderurgia y los servicios públicos, la situación económica mejoró durante los primeros años y el aumento de la productividad, los beneficios y el crecimiento dieron como resultado un clima político-social estable.

En el congreso del DGB de 1972 Vetter pidió algunas reformas adicionales como la estabilidad del empleo, más vacaciones pagadas, flexibilidad en la edad de jubilación, etc. Pero Willy Brandt en su discurso sobre la necesidad de representar a toda la población y no sólo a una parte de ella justificó no poder atender todas las reivindicaciones que le formulaban los sindicatos (49). Un año más tarde el mismo Vetter recordó estos temas a los congresistas del SPD, pero el gobierno acuciado por la competencia de los mercados internacionales inició una política antiinflacionista con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los asalariados. Entonces se inició, primero, la protesta de los trabajadores de la siderurgia y un poco más tarde, a comienzos de 1974, la de los empleados de los Servicios Públicos cuya huelga terminó cuando el sindicato consiguió el aumento del 11 por cien. Esta desavenencia entre sindicato y partido fue un motivo más de los que contribuyeron a que se agudizase la crisis política

del gobierno Brandt, y a la dimisión de éste pocos meses después (50).

Este período conoció también toda la polémica acerca de la Cogestión, aunque la ley se aprobó bajo el mandato del Canciller Schmidt. Los socialistas en su primera coalición con los partidos de la derecha no quisieron introducir en el Parlamento ninguna legislación que pudiese alterar el precario equilibrio político, a pesar de las presiones que en ese sentido recibieron de los sindicatos y de que buena parte de la población se mostraba a favor de la codecisión. Sólo después de su triunfo electoral en 1972 presentaron algunas proposiciones de ley respecto al cambio en la organización de las empresas, tratando de llegar a un acuerdo con el FDP para que la cogestión contemplase ampliamente los objetivos sindicales.

El ministro de Trabajo Arendt trató de llegar a un acuerdo con las partes interesadas, pero al modelo paritario del SPD-DGB que se basaba en cuatro representantes por parte de los accionistas, cuatro por parte de los trabajadores, ambos grupos eligiendo un quinto representante y los diez acordando un presidente neutral, se oponían la propuesta del FDP que trataba de diferenciar entre los representantes de los trabajadores no cualificados y los cualificados, dando además un peso mayor de representatividad a la propiedad que sería la que elegiría al Presidente del Consejo (51). Esto suscitó la reacción en contra de los sindicatos y del ala izquierda del partido socialdemócrata por lo que consideraban un ataque a la paridad. El SPD, consciente de que no tenía la mayoría absoluta en el Parlamento, cedió en el primer punto, para que la ley introdujo una diferenciación entre los representantes de los trabajadores, y trató de convencer a los sindicatos de que sin los votos del FDP no podían aprobar ninguna ley.

Todavía se hizo alguna concesión más en el texto de la ley al FDP hasta que se aprobó en julio de 1976 pero con el voto en contra de algunos diputados socialdemócratas.

Durante este periodo en el que la Cancillería fue ostentada por Helmut Schmidt las relaciones entre el gobierno y los sindicatos se deterioraron. Ya antes de las elecciones de 1976 el DGB planteó una serie de reivindicaciones que incluían el pleno empleo, la mejora de la formación profesional, la igualdad de oportunidades para las mujeres, el control de los monopolios y la mejora de la cogestión. Pero Schmidt respondió nombrando ministro de Trabajo a Ehrenberg, nombramiento que fue muy mal visto por el DGB , ya que favorecía una política donde primaban los beneficios y las inversiones de las empresas en lugar del consumo privado, la política social y el gasto público.

El sindicato atacó al gobierno por no tener suficientemente en cuenta los intereses de los trabajadores y criticó el fracaso de su política de empleo ya que en el sector industrial se habían perdido 1'3 millones de puestos de trabajo en los últimos diez años, lo que implicaba que los beneficios industriales no habían sido reinvertidos de nuevo, y el escaso crecimiento de la producción industrial no era suficiente para compensar la pérdida del empleo debido a la reconversión y racionalización que habían impulsado la microelectrónica y la automatización. Sólo la intervención decidida del gobierno podía resolver estos problemas mejorando a su vez el sistema de pensiones y el seguro de enfermedad.

Por otra parte en el programa de política económica diseñado por el DGB en 1977 se daba prioridad absoluta al pleno empleo. Los sindicatos pidieron una política de gasto

más expansiva, un mayor endeudamiento público y la expansión del sector público. Basaban sus demandas salariales con el argumento de la subida del poder adquisitivo. Un incremento adecuado de los sueldos y las rentas salariales fortalecerían la demanda interna y esto impulsaría el crecimiento y el empleo.

Pero esta mayor atención a la política social que se requería del gobierno fue contestada por Schmidt en el Congreso del DGB en 1978 declarando que si el Estado se convertía en un "almacén de autoservicios" en el que todos los grupos podían satisfacer sus necesidades pronto estaría económicamente arruinado. En estas circunstancias, con un crecimiento económico casi detenido y una tasa de paro en alza, el sindicato del metal convocó una huelga a finales de 1978 reivindicando la semana laboral de 35 horas como medida para reducir el paro. Pero esta huelga no consiguió arrastrar a otros sectores y fracasó lo que produjo divisiones tanto dentro del partido como del sindicato.

En 1980 se convocó también la huelga de correos que reivindicaba mejores condiciones de trabajo, y estalló la controversia entre la DGB y el SPD para mantener el principio de cogestión en una de las empresas más importantes del sector siderúrgico, la Mannesmann. La dirección de la empresa, en una votación muy reñida, acordó una reorganización a la que se oponían sindicatos y trabajadores. El conflicto tomó un cariz político ya que los trabajadores pidieron al gobierno un reglamento que garantizase la aplicación de la Ley de Cogestión, pero los socialdemócratas no contaron con el apoyo de los liberales para aprobar esta Ley. La desilusión de los sindicatos con el gobierno tuvo consecuencias importantes ya que habían puesto muchas esperanzas en la cogestión del sector siderúrgico. Al fracasar

esta vía paritaria de gestión se consideraron liberados de las responsabilidades que habían adquirido ante el gobierno. De esta manera el conflicto sobre la cogestión demuestra que también en la República Federal las posibilidades de superar el conflicto de intereses con un entendimiento trilateral fueron limitadas.

Así pues a pesar de la imagen de tranquilidad que siempre se nos ha transmitido sobre las relaciones laborales en la República Federal, este período de gobierno de la coalición social-liberal no estuvo exento de tensiones y conflictos. El entendimiento entre sindicato y gobierno y la aparente convergencia de sus intereses así como el funcionamiento trilateral de los pactos con la patronal tuvieron múltiples áreas y momentos de conflicto que, a comienzos de la década de los años 80, contribuyeron a la derrota electoral de los socialdemócratas. Podemos mencionar entre los más importantes el ataque de las organizaciones empresariales a la cogestión, institución fundamental para el sindicalismo alemán, ataques que terminaron con la derrota de los socialistas en el gobierno por su dependencia del voto liberal; los distintos puntos de vista de los socialdemócratas y los liberales en la distribución de los costos sociales que comportaban dificultades económicas; las consecuencias de la crisis de los obreros cualificados y de los directivos asalariados, grupos que tienen gran influencia y representatividad en los sindicatos; el nacimiento a principios de los años 80 de una oposición no proletaria ni sindical que reivindica los aspectos ecologistas de la convivencia con movilizaciones masivas, etc.(Tabla 4)(52)

Como consecuencia de la crisis económica y el cambio de gobierno en 1982 la influencia de los sindicatos en la política económica disminuyó considerablemente así como su

nivel de afiliación (Tabla 5). El aumento continuado que se había verificado a partir del final de los años 60 en el nivel de afiliación sindical alcanzó su punto culminante en 1981. Durante 1982 se registró una inversión en la tendencia, y en los dos años siguientes la DGB perdió más de 100.000 afiliados, con una caída media del 1'4 por cien en 1982 y del 1'3 en 1983.

TABLA 5

<u>Año</u>	<u>Trabajadores</u>	<u>Afiliados</u>	<u>Tasa de Sindicalización</u>
1981	24.122.000	1,0	33,0
1982	24.220.000	-1,4	32,4
1983	24.187.000	-1,3	32,0

Nota: Estos datos comprenden los trabajadores ocupados y los desocupados.

A comienzos de la coalición conservadora liberal las relaciones con el gobierno se deterioraron todavía más y aunque prosiguieron las consultas informales, éstas tomaron una forma simbólica.

Durante los años 80, los sindicatos aceptaron acuerdos salariales que les llevaron -por primera vez en el periodo de postguerra- a una considerable pérdida de renta neta real. No hubo ninguna huelga en que las demandas salariales no fueran el tema central del conflicto.

El desarrollo de la política salarial fue resultado de la débil posición negociadora de los sindicatos, pero también reflejó su renuncia a bloquear el proceso de

modernización a través de su política salarial y su énfasis en la reducción de horas de trabajo.

1.5. El SPD en la oposición

Después de perder las elecciones el SPD comenzó a escorarse hacia la izquierda. El primer tema de discusión y división interna fue el estacionamiento de los misiles Pershing II, sobre el cual Schmidt y el centro derecha mantuvieron una posición a favor, por solidaridad con los aliados de la OTAN, mientras que Brandt se manifestó en contra apoyado por la mayoría del partido. Esta división sobre la política de defensa influyó decisivamente en la dimisión de Schmidt, que fue sustituido por Hans-Jochen Vogel.

El cambio en la política de defensa unido a su mayor sensibilidad sobre los problemas del medio ambiente, al relevo de una parte de los viejos dirigentes y a una estrategia económica más expansionista e intervencionista hizo que el SPD recabara mayor apoyo del electorado de izquierda y de los pacifistas. De esta manera en 1985, favorecido por el escándalo Flick que involucró al Canciller Kohl, el SPD obtuvo un avance espectacular en Westfalia, la región occidental que comprende casi un tercio del electorado total. Algunos representantes del ala izquierda como Lafontaine deseaban la retirada de la OTAN y de los misiles de crucero Cruise y Pershing II, y otros pretendían crear una Europa neutral y desnuclearizada, frenar la creación de centrales nucleares y promover una alianza con los verdes.

La elección de Johannes Rau, como líder del partido en

el Congreso que se celebra en Nuremberg en 1986, contrarrestó esas tendencias ya que buscó un programa centrista de compromiso entre las fracciones internas del partido, en el que mezclaba su oposición al proyecto de guerra espacial (conocido como "Guerra de las Galaxias") con la vinculación a la OTAN, la reducción de las centrales nucleares, más política social y un rechazo a la posible coalición con los verdes. En el Congreso de Nuremberg de 1986 Rau obtuvo el respaldo del partido a su programa moderado de centro-izquierda en el que pedía mayor inversión en el empleo, la reducción de la semana laboral, la reducción de impuestos a los salarios medios y bajos, la opción cero, es decir la retirada del armamento nuclear tanto de EEUU como de la URSS, y su retirada del proyecto de la guerra espacial.

Pero al mismo tiempo las expectativas electorales de la derecha también subieron debido a la exculpación del Canciller Kohl en el caso Flick, al buen estado de la economía, con una inflación casi nula, y a una tasa de paro en creciente disminución. Por su parte el SPD comenzó a tener problemas debido a la crisis interna, al escándalo de las viviendas promovidas por el sindicato, a su negativa a formar coalición con los verdes y a las críticas sobre la inexperiencia administrativa de Rau. Todo lo cual le llevó a la pérdida de las elecciones a comienzos de 1987, en las que el SPD obtuvo el 37 por cien de los votos y 193 diputados.

Estos resultados electorales junto a la subida electoral de los verdes que obtuvieron el 8'3 por cien de los votos (44 diputados) fortalecieron las posiciones de la izquierda dentro del partido y provocaron la dimisión de Rau casi al mismo tiempo que dimitía también como presidente del partido Willy Brandt. Estos líderes fueron sustituidos por Oskar Lafontaine y Hans-Jochen Vogel respectivamente.

Con estos nombramientos la izquierda del partido se sentía más segura y representada para apoyar su política de defensa y medio ambiente con la intención programática de ir más allá de las reivindicaciones económicas que incluyesen aspectos "menos materiales" y nuevas políticas, como la participación democrática, la descentralización y la mejora de la calidad de vida.

Al mismo tiempo se abrió un período de reflexión que comenzó oficialmente en el Congreso de Essen en 1984, cuando se decidió comenzar la elaboración de un nuevo programa "fundamental" del partido, destinado a sustituir el viejo programa de Bad Godesberg. Para ello se eligió una comisión especial presidida por Erhard Eppler. En 1986 se presentó oficialmente el primer borrador y en 1987 se decidió la composición de una nueva Comisión programática que debería formular un nuevo texto para 1988 cuyo debate y posterior votación se programó para 1989.

Cuando en 1988 el SPD se reunió en Münster para celebrar su Congreso había superado ya el período de incertidumbre, había recuperado la unidad perdida en 1982 y las dudas sobre su programa que se habían reflejado en el Congreso de Nuremberg de 1986. Una nueva generación de líderes habían sustituido a la vieja Troika que no había sabido dar respuesta a los nuevos problemas que presentaba la sociedad. Vogel desde la presidencia había logrado la disciplina interna que se vio reflejada en su propia reelección, al conseguir el 99 por cien de los votos, y esta unidad posibilitaba la discusión interna sin miedo a las escisiones ni a las controversias.

Líder indiscutible del partido y candidato a la

cancillería fue Oskar Lafontaine que en su discurso puso sobre el tapete las nuevas directrices y categorías por las que se va a mover el partido para disputar el poder a la derecha alemana. Una concepción nueva del progreso social, de la justicia y la equidad parecen ser las categorías por las que el SPD desea reconquistar el voto de la mayoría. Se rechaza tanto el capitalismo privado como el estatal, porque en ambas estructuras de poder el trabajador pierde su facultad de control democrático. Los sindicatos como organizaciones de los trabajadores y la socialdemocracia con su aspiración a ser un partido popular moderno tienen en nuestra sociedad dos papeles diferentes, porque la socialdemocracia alemana no se puede limitar a los problemas que se dan en la organización de la clase trabajadora. Cada vez más acogemos en nuestras filas -diría en su discurso- a trabajadores autónomos y a profesionales liberales. Estamos orgullosos de contar en nuestras filas con empresarios. Si entendemos esto entenderemos también nuestra respuesta: daremos a muchos problemas las mismas respuestas que los colegas de los sindicatos, pero también habrá otras que irán más lejos y que no coincidirán siempre con las suyas. Lafontaine quiere que los sindicatos se enfrenten a las nuevas posibilidades que ofrece una sociedad desarrollada y no se vean limitados por su propio dogmatismo. El nuevo papel del tiempo libre, los problemas del armamentismo, del medio ambiente, los derechos de la mujer y otros muchos retos de la sociedad actual se verán debidamente tratados y estructurados en el Programa Básico del Partido Socialdemócrata Alemán aprobado definitivamente en el Congreso Extraordinario celebrado en Berlín en 1989.

Pero poco después de este relanzamiento del partido se producía la caída del muro de Berlín y la oposición de los socialistas a una integración demasiado rápida de las dos Alemanias en contra del criterio y la política defendida por el canciller Kohl. De este enfrentamiento saldría fuertemente derrotado en las elecciones generales de diciembre de 1990 el candidato socialista a la cancillería Oskar Lafontaine, lo cual dió pie a que en abril de 1991 se

propusiese el liderazgo del SPD a Björn Engholm quien fue elegido presidente por una mayoría aplastante de los delegados en la reunión que se celebró en Bremen al mes siguiente, sustituyendo así a Hans Joachim Vogel en un momento en el que el SPD había ganado abrumadoramente en las últimas elecciones regionales y la coalición gubernamental sufría el impacto negativo de la política económica seguida por la derecha en el acelerado proceso de la unidad alemana.

II. EL PARTIDO LABORISTA INGLES

2.1. De Wilson a Callaghan

Uno de los temas recurrentes en la literatura de la ciencia social inglesa de estos últimos años ha sido el declinar de la presencia y el protagonismo británico en el concierto de las naciones (1). Diversos estudios han tratado de averiguar las causas y deducir las consecuencias de esta pérdida de protagonismo de los británicos en el mundo económico y político después de la II Guerra Mundial indicando cuáles deberían ser los remedios que se tendrían que aplicar si se desea recuperar ese liderazgo. La inversión en nuevas tecnologías, la reforma y reconversión de los procesos productivos y la mejora de la calidad en los bienes producidos - se apuntan - son aspectos necesarios si se quiere competir en los mercados internacionales con las potencias más avanzadas. Mejoras en el sistema educativo, mayor atención a los procesos de investigación y una Administración más eficaz son medidas imprescindibles para aumentar la eficacia y abaratar los costes.

Esta llamada de atención que han hecho los científicos sociales a través de sus escritos ha sido una preocupación constante en los diversos gobiernos del Reino Unido desde la década de los sesenta. El gabinete del laborista Wilson, que ocupó la segunda parte de esa década, trató de imponer una estrategia económica más intervencionista con el fin de

crear un grupo de grandes empresas que, por el nivel de inversión y su capacidad productiva, pudieran competir con sus homólogos de los países más desarrollados y técnicamente avanzados como Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos. A su vez deseaba cambiar también algunas viejas instituciones como la Cámara de los Lores y los mismos sindicatos con la introducción del voto obligatorio antes de convocar huelgas. Pero presionado por circunstancias económicas exteriores y por un aumento del gasto militar se vió forzado a introducir recortes presupuestarios al final de su mandato con la oposición frontal de los líderes sindicales y la contestación de los grupos radicales extraparlamentarios. La administración Wilson a pesar de haber introducido medidas legales progresistas como la abolición de la pena capital, mayor permisividad en las prácticas homosexuales, el aborto o el divorcio, tuvo que soportar la crítica y contestación desde el ala izquierda de su propio grupo parlamentario, y al final de su mandato aunque había mejorado la situación económica del país fue vencido en las elecciones de junio de 1970 por el partido conservador liderado por Edward Heath (2).

Heath, considerado por muchos un liberal progresista, participaba de la misma idea y creía que el Reino Unido debía sufrir un fuerte cambio en su estructura industrial y económica si quería salir victoriosa de este periodo de decadencia que amenazaba con prolongarse demasiado. Para ello se apresuró a imponer algunos cambios institucionales, impulsando sobre todo la potenciación de los gobiernos locales y la entrada en el Mercado Común, aprovechando que el Presidente Pompidou había retirado el veto francés a la entrada del Reino Unido. Desde el punto de vista económico reimplantó la libertad de la contratación colectiva y redujo los

impuestos a costa de recortar el gasto público, privatizó algunas grandes empresas, pero la medida más polémica que tomó fue la reforma de la Ley de Relaciones Industriales que obligaba a los sindicatos a registrarse oficialmente si querían mantener su inmunidad legal y aceptar un conjunto de normas dirigidas a impedir huelgas salvajes y sin previa votación (3).

Esta decisión que se aprobó en 1971 fue muy mal acogida por los sindicatos muchos de los cuales rechazaron registrarse oficialmente y fueron suspendidos. La tensión entre el gobierno y el mundo laboral dió lugar a un aumento considerable de la conflictividad en muchos sectores, por lo cual, el número de jornadas laborales perdidas alcanzó casi los 24 millones en 1972, la cifra de parados subió a un millón y la inflación pasó del 6 por cien en 1970 al 9 por cien en 1973. El aumento de la inflación no se correspondió con el de la producción industrial y agravó todavía más el desempleo forzando al gobierno a tomar medidas drásticas. En marzo de 1972 el ministro de Hacienda Barber presentó un presupuesto expansivo que implicaba importantes reducciones de impuestos y la flexibilización del crédito con el objetivo de lograr una tasa de crecimiento anual del 5 por cien.

En este ambiente el gobierno entró en crisis cuando en 1973 los mineros, aprovechando la crisis energética suscitada por la guerra árabe-israelí, pidieron una subida salarial y se negaron a trabajar en horas extraordinarias. A estas huelgas se unieron otros colectivos de trabajadores como los maquinistas y los del sector eléctrico, que obligaron al gobierno a declarar el "estado de emergencia" para asegurar el fluido eléctrico. Cuando los mineros aprobaron por mayoría reanudar las huelgas a comienzos de febrero de 1974, Heath

convocó elecciones generales para finales de ese mes con la intención de lanzar un pulso a los sindicatos bajo el lema "who governs Britain?" para que la población decidiese si el país tenía que ser gobernado por los sindicatos o más bien éstos deberían someterse a la voluntad popular que representaba el gobierno.

Esta radicalización de una parte muy importante de los sindicatos coincidió con un giro a la izquierda del partido laborista, presidido en esos años por Anthony Benn, que impulsó un programa más radical oponiéndose a la entrada en la Comunidad Europea, al menos en los términos en que lo planteaba la derecha conservadora, y anunciando un programa de nacionalizaciones. Pero Wilson, que había sabido mantener la estrategia del equilibrio entre la derecha y la izquierda del partido, prefirió aplazar esta cuestión para que más tarde fuese renegociada y sometida a referendum. A su vez había negociado con los sindicatos en 1973 una restricción salarial voluntaria si volvía al poder, lo cual había servido también para restablecer buenas relaciones con el mundo laboral. Este comité de coordinación entre partido y sindicatos que se formalizó con una "Declaración sobre la política Económica y el Coste de la vida" preveía un gobierno laborista comprometido a: 1) un sistema permanente de control de los precios; 2) una política de vivienda y alquileres que derogase la ley de la Vivienda de 1972; 3) el fortalecimiento del transporte público; 4) la redistribución a gran escala de la renta y la riqueza, etc. Así el Congreso del Partido Laborista de 1973 en el documento "Programa del Laborismo para Gran Bretaña" perfilaba una política de futuro basada en la ampliación de la propiedad pública, en acuerdos de planificación con las grandes empresas y la aprobación de una nueva ley de relaciones industriales. Estas y otras medidas sobre el estado del bienestar, vivienda y pensiones formaron el sustrato de lo que se llamó el Contrato Social, por el cual el gobierno llevaría a cabo su programa socialista de reformas radicales como contrapartida a las restricciones salariales que aceptaban los sindicatos. Esto suponía un

giro a la izquierda respecto a la etapa tecnocrática anterior que Wilson había capitaneado desde 1964 a 1970 y un paso decisivo en la unidad de acción del partido (4).

La campaña electoral estuvo muy centrada en la primacía que debería tener el mandato del gobierno para resolver los asuntos de la nación (who governs Britain?), y, como contrapartida, el papel subordinado que deberían asumir los sindicatos que eran quienes, con sus reivindicaciones y huelgas, habían provocado la crisis del gobierno. Los conservadores hacían una llamada a la firmeza ("Firm action for a fair Britain") mientras que los laboristas se comprometían a trabajar junto a los sindicatos para salir de la crisis ("Let us work together"). Los primeros prometían flexibilidad en el futuro tratamiento de las relaciones laborales y voluntad para emprender una política conciliadora de acuerdos antes de recurrir a los procedimientos legales forzosos, pero a su vez anunciaban firmeza contra las peticiones y reivindicaciones exageradas de los sindicatos, y medidas contra los huelguistas que las apoyasen incondicionalmente. Por su parte los laboristas, que tenían buenas perspectivas para ganar las elecciones con el acuerdo que habían conseguido sobre el Contrato Social se comprometieron a extender la propiedad pública del Estado asumiendo el control de empresas grandes e inversiones, a una mayor distribución de la renta, a introducir un nuevo

sistema de conciliación y arbitraje, controlar los precios, controlar los salarios a cambio de derogar la Ley de Relaciones Industriales de 1971, y a renegociar la entrada en el Mercado Común sometiendo la decisión a la voluntad popular.

TABLA 1

Elecciones generales Febrero 1974

<u>Partido</u>	<u>Votos</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Parlamentarios</u>
Conservadores	11.869 m.	37'9	297
Laboristas	11.639 m.	37'1	301
Liberales	6.063 m.	19'3	14
SNP (Nacionalistas escoceses)	0.632 m.	2'0	7
Plaid Cymru (Nacionalistas galeses)	0.171 m.	0'6	2
Otros	0.959 m.	3'1	14
Total	31.333 m.	100'0	635

Los resultados electorales en esta convocatoria fueron muy equilibrados para ambas formaciones políticas (Tabla 1). Los conservadores obtuvieron doscientos mil votos más que los laboristas pero también perdieron más que ellos; en total 1'2 millones frente a 0'5. Heath trató de formar un gobierno de coalición con los liberales que habían obtenido 14 escaños y más de 6 millones de votos, pero éstos rechazaron la idea de formar cualquier tipo de coalición presionados sobre todo por el sector del partido más proclive a los sindicatos. De esta manera se le encargó formar gobierno a Wilson, quien apostó por un gobierno

minoritario que incluía a buena parte de los colaboradores de su etapa anterior y, desde el punto de vista del partido, trataba de mantener el equilibrio entre los sectores de izquierda y derecha.

Este gobierno heredó una pésima situación económica. Wilson decía que parecía ya casi una norma de la política británica que cuando los laboristas llegaban al gobierno heredaban un gran déficit en la balanza de pagos y cuando lo dejaban siempre había un buen superávit (5). En esta ocasión la inflación se situaba en el 15 por cien, la balanza de pagos tenía un déficit de 3000 millones de libras y tanto la producción como la renta estaban en franco declive. El primer ministro tomó medidas inmediatas aumentando el salario a los mineros, lo cual terminó con el estado de emergencia, controlando los precios, aumentando las pensiones y aprobando poco después una nueva Ley de Relaciones Industriales que dejaba sin efecto la del gobierno conservador.

En poco tiempo se produjo una mejora de la situación social que fue aprovechada por Wilson para presentar su dimisión y convocar nuevas elecciones con la excusa de que no se podía seguir gobernando en minoría, ya que esta situación lleva consigo el desgaste continuo de la lucha intraparlamentaria y el recurso al pacto continuo con otros grupos para hacer aprobar las medidas que el gobierno creía más convenientes. Era mejor para todos gobernar con mayorías estables.

Para los laboristas el eje sobre el que giró esta campaña fue el éxito que había tenido el Contrato Social. Además, a pesar de las divisiones internas acerca de las nacionalizaciones o de la entrada en la Comunidad Europea, el partido continuaba ofreciendo un programa popular, al

que añadía el establecimiento de asambleas parlamentarias regionales para los casos de Escocia y Gales con la intención de atraerse los votos nacionalistas que habían obtenido aumentos significativos en convocatorias electorales anteriores. Los conservadores, a su vez, abandonaron la idea de reimplantar la ley de Relaciones Industriales y también ofrecieron concesiones a los nacionalistas en el seno de una política nacional unitaria, pero el día de las elecciones volvieron a perder 1'4 millones de votos. Los laboristas mantuvieron su cuota de las elecciones anteriores igual que los liberales, que no alcanzaron a dar el paso adelante que se habían prefijado, y quienes más subieron relativamente fueron los nacionalistas que en Escocia alcanzaron el 30 por cien de los votos . Las elecciones dieron a los laboristas la mayoría imponiéndose por 43 escaños sobre los conservadores, pero con una mayoría de sólo 3 escaños sobre el conjunto de la oposición parlamentaria (TABLA 2).

TABLA 2
ELECCIONES GENERALES DE OCTUBRE 1974

<u>Partido</u>	<u>Votos</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Diputados</u>
Laborista	11'457 m.	39'2	319
Conservador	10'465 m.	35'9	277
Liberal	5'347 m.	18'3	13
SNP (Nacio- listas escoceses)	0'840 m.	2'9	11
Plaid Cymu (Na- cionalistas galeses)	0'166 m.	0'6	3
Otros	0'914 m.	3'1	12
TOTAL	29'189 m.	100'0	635

Dos de las medidas más importantes que emprendió inmediatamente el gabinete Wilson fueron las leyes de Reforma Industrial y de Protección al Empleo. La primera, dirigida y gestionada por el Secretario de Industria Anthony Benn, estableció el National Enterprise Board (NEB) como un nuevo "holding" de la Administración del Estado que compartía intereses con las empresas privadas; además tenía la capacidad de adquirir otros holdings y de ampliar la ayuda financiera a empresas en situación problemática. En poco tiempo la Harland and Wolff Shipyard, que tenía 12.000 trabajadores en Belfast, la British Leyland, la Alfred Herbert y la Ferrante Electronics fueron nacionalizadas. Benn apoyó también el cooperativismo de los trabajadores cuando se producía el cierre de sus empresas y además hizo grandes inversiones en la industria de tecnología avanzada (6). El NEB al que se dotó con un fondo de 1000 millones de libras, era visto por la izquierda del partido como una fórmula para extender el control del Estado sobre la industria que gozaba de una situación estratégica en el sector privado, y como una manera de introducir nuevas formas de democracia industrial. A su vez la Ley de Reforma Industrial incluía una llamada para que este tipo de empresas firmasen acuerdos de planificación con el gobierno, mientras que al mismo tiempo se establecía un Comité de investigación para examinar el tema de la participación y organización de los trabajadores, bajo la presidencia de Lord Bullock (7). La segunda medida gubernamental más importante, la Ley de Protección al Empleo, iba destinada a complementar la Ley Sindical y de Relaciones Laborales de 1974 ampliando mucho los derechos de los trabajadores, dándoles compensaciones

ante los despidos injustos y estableciendo nuevas regulaciones en el subsidio del desempleo, el derecho a la maternidad y favoreciendo otros aspectos de la vida laboral (8).

Sin embargo la situación económica empeoró rápidamente llegando a una inflación del 26 por cien a mediados de 1975, la balanza de pagos alcanzó un déficit de 3500 millones de libras, debido sobre todo a las importaciones de petróleo, el paro creció hasta alcanzar el 3 por cien de la fuerza de trabajo. Ante estos índices tan alarmantes Wilson se apresuró a tomar algunas medidas para afrontar la crisis, que consistían en: a) financiar el déficit comercial a través de un préstamo internacional; b) reducir la diferencia entre importaciones y exportaciones invirtiendo en industrias exportadoras a través del NEB; c) reducir la inflación salarial mediante la renovación del Contrato Social y comprometiendo a los sindicatos en convenios salariales razonables a cambio de introducir reformas sociales y sindicales que favoreciesen a los trabajadores; y d) aumentar los impuestos en los niveles de renta más altos a fin de obtener recursos para financiar la mayor parte de su programa social. Pero estas medidas no mejoraron la situación económica, debido también a factores externos como fueron la contracción del comercio mundial y las políticas de austeridad que aplicaron la mayor parte de los países occidentales en esos años para afrontar la crisis energética. Como consecuencia el PNB cayó bruscamente durante 1975, la balanza de pagos no mejoró sensiblemente, la inflación continuó al alza y el paro alcanzó al 5 por cien de la fuerza de trabajo (9).

Todos estos indicadores provocaron un cambio en la política económica laborista. El ministro Healey,

perteneciente a la derecha del partido, aplicó medidas de austeridad presupuestaria, aumentando los impuestos sobre la renta y sobre los bienes superfluos, reduciendo el gasto público en defensa y en subvenciones a empresas nacionalizadas. El ministro de Industria Anthony Benn fue sustituido y las directrices del NEB sobre las grandes empresas se orientaron más a concentrar sus recursos para ayudar a aquellas industrias que estaban en crisis que a nuevas inversiones, aunque todavía se nacionalizaron dos grandes grupos industriales, la British Leyland y las empresas navales y aeroespaciales. Con todo se abandonó el compromiso de imponer acuerdos de planificación obligatoria a las empresas que ocupaban un lugar estratégico en el sector privado. Estas medidas comenzaron a reducir el nivel de inflación el mismo año en que fueron tomadas, así como el déficit de la balanza comercial, pero aumentaron el desempleo y, sobre todo, agudizaron la diferencia de criterios dentro del laborismo, donde el sector más izquierdista se oponía a esta política de ajuste.

En estas circunstancias se produjo la dimisión del Primer Ministro y se planteó la difícil sucesión interna en una reñida votación que llevó a James Callaghan a la jefatura del gobierno. Callaghan accedía al poder en una situación económica crítica, con una mayoría electoral escasa y con un partido cada vez más dividido en sus dos extremos. Callaghan pidió ayuda a las potencias extranjeras para mantener el equilibrio de la balanza comercial, a fin de proseguir el saneamiento de la economía, y a su vez continuar con la política del Contrato Social, a fin de reducir la inflación, y apoyar las reivindicaciones nacionalistas de Gales y Escocia para mantener el apoyo parlamentario interior. Pero dentro de esta política de

equilibrios se encontró con un primer tropiezo; la fuerte devaluación del dólar que llevó al Fondo Monetario Internacional a pedir un recorte del gasto público británico de 3000 millones de libras en 1977 y de 4000 millones en 1978 (10).

Healey intentó primero resolver la situación a través del presupuesto con la promesa de aplicar un recorte a los impuestos si los sindicatos moderaban sus reivindicaciones salariales y proponiendo una política de rentas con el TUC (sindicatos) y el CBI (la patronal) basada en un tope de aumento salarial del 4'5 por cien. Sin embargo esta medida también fracasó en su intento de reducir el déficit fiscal del Estado. La libra continuó su tendencia a la baja y no hubo más remedio que recurrir al Fondo Monetario Internacional para no castigar más al fondo de reservas.

Las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional suscitaron un fuerte debate dentro del gabinete laborista. El ministro de Asuntos Exteriores arguyó que deberían ser rechazadas y pidió la introducción de depósitos previos a la importación; por su parte el Secretario de Energía propuso la imposición de recortes a las importaciones y controles al intercambio. Sin embargo Callaghan dió su apoyo al Canciller del Exchequer y el gabinete introdujo todavía mayores reducciones. Lo que se acordó con el FMI fueron recortes en el gasto público por valor de 1500 millones de libras en 1977 y de 2500 millones en 1978. Por tanto la estrategia de Healey de mantener la actividad económica incentivando la demanda interna había terminado y con ella la política keynesiana británica de la postguerra (11). Esta crisis del keynesianismo abrió un considerable

debate cuya polémica se centraba en saber si era el final de un modelo de política económica que había tenido éxito durante treinta años y ahora se había agotado o se estaba ante un período de crisis transitoria provocada por el alza de los precios del petróleo.

Todas estas circunstancias habían provocado la pérdida de votos laboristas en las diversas elecciones parciales, de tal manera que a mediados de 1977 ya no tenían la mayoría parlamentaria y como consecuencia aumentaron las dificultades para que los laboristas aprobasen los proyectos de ley que presentaban en la Cámara, a pesar de que los parlamentarios nacionalistas habían apoyado durante algún tiempo muchas de sus propuestas. Esta situación minoritaria les obligó a buscar un pacto de legislatura con el grupo parlamentario liberal que estaba dispuesto a aceptarlo bajo algunas condiciones como formar un comité conjunto de consulta para dar el visto bueno a la política gubernamental antes de que fuese presentada al Parlamento; debería mediar un acuerdo previo entre el Canciller del Exchequer y su homólogo liberal para pactar la política económica; se comprometían a presentar una ley para que las elecciones europeas fuesen por el sistema de representación directa; se devolvería al Parlamento la legislación sobre Escocia y Gales; se suprimirían otras nacionalizaciones de grandes complejos industriales y la ley electoral por el sistema de representación directa para los ayuntamientos. Con esto los liberales apoyarían al gobierno laborista, y aunque una parte del electorado no lo apoyó en las sucesivas elecciones parciales, sin embargo el pacto duró 18 meses (12).

En el bienio 1977-78 la situación económica comenzó a mejorar al tiempo que se llegaba a un nuevo pacto con los sindicatos que establecía una política salarial con aumentos que no fuesen superiores al 10 por cien; la libra

se recuperó y la inflación se había reducido desde un 25 por cien que alcanzó en 1975 hasta el 10 por cien, el paro iba en descenso y la balanza de pagos había recuperado el superávit, de tal manera que en junio de 1978 se habían cumplido ya las condiciones que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional. Era un momento excelente para convocar de nuevo elecciones generales tal como esperaba la mayor parte de la población, teniendo en cuenta además que terminaba el periodo de pacto con el grupo liberal. Pero Callaghan alargó la legislatura hasta 1979 con un gobierno minoritario, esperando que con un nuevo pacto sindical sobre la política salarial y con la aprobación de los estatutos regionales mejorarían las perspectivas electorales para los laboristas (13).

Pero Callaghan se equivocó y este error de cálculo tuvo resultados catastróficos, apartando a los laboristas de las tareas de gobierno durante más de una década. El Primer Ministro trató de introducir una subida salarial con el límite del 5 por cien pero se encontró con que la nueva generación de líderes sindicales, que eran más partidarios de la libre contratación colectiva, se opusieron a esta medida. Es más, en apoyo de sus reivindicaciones salariales los trabajadores de la Ford sostuvieron una huelga de más de dos meses hasta que alcanzaron subidas salariales del 15 por cien. Esto sirvió como pistoletazo de salida porque inmediatamente después comenzaron convocatorias de huelgas desde otros sectores, extendiéndose un movimiento huelguístico que duró todo el invierno (Winter of discontent) y alcanzó a muchos servicios públicos, lo cual provocó el descontento general de la población y acabó con los buenos síntomas económicos del último periodo

Callaghan, quien derrotado en el referendum para aprobar los estatutos de Escocia y Gales, y con un gobierno minoritario se vió forzado a convocar elecciones para mayo de 1979.

La campaña electoral se presentaba difícil. En el partido conservador Heath había sido sustituido en 1975 por Margaret Thatcher, quien trataba de reorganizar a la derecha contra la política keynesiana, que durante años había inspirado tanto a los laboristas como a los propios conservadores moderados (14). En sus declaraciones políticas atacaba la política económica y social de todo el periodo de postguerra por sus enormes gastos estatales que habían sobrepasado el 40 por cien del PNB, por haber permitido el fortalecimiento del poder sindical en detrimento de la productividad y de la libertad de mercado, y además por el deterioro que se observaba en la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público. Su programa pretendía rebajar la tasa de inflación recortando los gastos del Estado e impidiendo el agravamiento de su crisis fiscal, la privatización de las grandes empresas, que deberían someterse a las leyes del mercado para aumentar su competitividad y eficiencia, reducir los impuestos en las actividades mercantiles a fin de promover la actividad empresarial y terminar con un modelo económico demasiado regulado. A esta política económica de carácter monetarista se añadiría la "democratización" de los sindicatos con leyes que introdujeran el voto sindical antes de decidir las acciones de huelga, y la ruptura del diálogo corporatista que favorecía la política de los líderes sindicales en detrimento de los deseos de sus afiliados, lo cual promovería la libertad en

los convenios colectivos. Se trataba, por tanto, de una política que verbalmente favorecía a la pequeña burguesía y a la clase trabajadora descontenta con el período de ajuste, es decir se trataba de movilizar el sentimiento populista.

La campaña laborista se centró en presagiar los males que se deducirían de una política conservadora monetarista, que aumentaría el desempleo y aboliría todos los derechos de protección que habían adquirido los trabajadores, tanto los que se referían al bienestar social como a la propia organización del sindicato. A su vez se comprometían a reducir la inflación y a establecer un acuerdo con los sindicatos que permitiese la colaboración tanto en el diseño de las directrices económicas como de los derechos sindicales. Pero los resultados electorales no les fueron favorables y la opinión pública les volvió la espalda después del reciente período conflictivo que se había vivido . Los conservadores ganaron por una mayoría de 71 escaños sobre los laboristas y de 44 sobre el conjunto de la oposición, de los cuales 51 habían sido captados en los distritos tradicionalmente socialistas, 3 en los liberales y 7 en los nacionalistas escoceses (15). Buena parte de la clase obrera votó al candidato conservador y los laboristas bajaron al 36,9 por cien del voto, su nivel más bajo desde 1931 (TABLA 3) (16).

TABLA 3

ELECCIONES GENERALES 1979

<u>Partido</u>	<u>Votos</u>	<u>Porcentaje de voto</u>	<u>Escaños</u>
Conservadores	13.697 m.	43,9	339
Laboristas	11.532 m.	36,9	269
Liberales	4.313 m.	13,8	11
SNP (Nacionalistas escoceses)	0.504 m.	1,6	2
Plaid Cymru (Nacionalistas galeses)	0.132 m.	0,4	2
Otros	1.060 m.	3,4	12
Total	31.221 m.	100,0	635

(N.B. Participación 76,2 por cien)

De esta manera terminaba la legislatura del gobierno socialista en un período especialmente conflictivo para todos los países que habían sufrido el impacto de la crisis económica de 1973, en el que los laboristas tuvieron que afrontar diversas fases de colaboración con los sindicatos, pactar con otros grupos parlamentarios, sustituir a Wilson, su líder más popular, y resolver los conflictos internos entre las pretensiones y programas de sus tendencias internas. Al comienzo de su mandato, el pacto corporativo con los sindicatos y la política industrial de planificación estatal preconizaron un giro hacia la izquierda siguiendo premisas keynesianas con el fin de cambiar las relaciones de poder social e institucional y equilibrar la desigualdad de las clases sociales, pero a partir de 1976, forzados por el impacto económico de la crisis y por la presión internacional, se acogieron a la solución

monetarista que fue rechazada frontalmente por los sindicatos y por el ala izquierdista del partido, que poco a poco iba adquiriendo un peso mayor y prefirió romper la disciplina de voto antes que apoyar medidas de carácter conservador cuando ya la economía parecía mostrar síntomas evidentes de recuperación.

2.2 La ruptura del partido

Al inicio de la década de los años 70, y con motivo de la derrota electoral, los grupos de la izquierda del partido tomaron un rápido auge dentro de las filas del laborismo. En 1969 James Callaghan junto con otros parlamentarios adscritos a las posturas más radicales se opusieron a la política que deseaba aplicar Wilson respecto a los sindicatos descrita en el documento "In place of strife" que pretendía una reforma para controlar a las organizaciones obreras, con lo cual se produjo un enfrentamiento entre algunos miembros representativos del NEC (National Executive Committee) y el gobierno. A pesar de ello Harold Wilson continuó como líder del partido en la oposición tratando de evitar la ruptura del partido, que cada vez estaba más dividido sobre los presupuestos de su programa. Uno de los puntos conflictivos más importantes en política económica era la que se mantenía con Tony Benn acerca de las nacionalizaciones de las grandes empresas. En 1972 se formó el Campaign for Labour Party Democracy (CLPD) que sería uno de los grupos que impulsaron las reformas

estatutarias del partido a finales de ese período. Desde 1970 a 1974, años en que los laboristas estuvieron en la oposición los conflictos entre derecha e izquierda se agudizaron y la izquierda aumentó considerablemente su influencia (17).

Diversos grupos radicales apoyaron al CLPD, como el Labour Coordinating Committee, el Socialist Campaign for Labour Victory, el Rank and File Mobilising Committee y la Militant Tendency, mientras la derecha se apoyaba en el Manifesto Group y más tarde en el Solidarity Group. A nivel parlamentario el grupo más importante de la izquierda era The Tribune Group que se había formado en 1966, y entre 1970 y 1978 aumentó considerablemente el número de sus diputados pasando de 48 a 86. Este grupo fue el responsable de algunas derrotas gubernamentales al negarle el voto al gobierno, aunque nunca dejó de apoyarle en las mociones de confianza cuando la caída del gabinete podía estar en juego. Fuera del parlamento el CLPD tenía como objetivo asegurar que los gobiernos laboristas cumpliesen las decisiones que habían sido acordadas en los Congresos anuales y por el NEC.

Muchos de los componentes de estos grupos eran profesionales bien preparados y muy activos. Representaban sectores muy concretos de la militancia que en esos últimos años había experimentado un cambio en su composición (18) y una radicalización en su ideología. Acusaban a los programas del partido y a la política económica de los gobiernos laboristas precedentes de excesivamente moderada y contemporizadora, de tal manera que servía más para enmascarar las contradicciones y los defectos del capitalismo que para cambiar las desigualdades sociales y las relaciones de poder que predominaban en la sociedad. Por otra parte la ineficacia de los gobiernos laboristas para

mantener un crecimiento económico sostenido, mejorar la administración de los servicios públicos e impulsar a través de políticas keynesianas un cambio estructural más profundo, dio pie a la formulación de una serie de alternativas políticas desde la izquierda socialista. Uno de los primeros documentos que ya mostraron esta radicalización fue el Labour Programme de 1973. Otro, el "Economic Policy and the cost of Living" pretendía abolir la legislación que habían aprobado los conservadores respecto a las relaciones industriales, introducir medidas para una mejor redistribución de la renta, controlar precios y subvenciones, aumentar las pensiones y reformar la estructura fiscal y la de los convenios colectivos. Pero quizá el trabajo mejor estructurado en este sentido fue el libro The Socialist Challenge (19) de Stuart Holland, que pretendía ser una respuesta al de Anthony Crosland, The Future of Socialism (20) escrito veinte años antes y, que había sido una guía para el socialismo inglés en su caminar por la economía mixta y las medidas keynesianas.

Holland (21) vaticinaba el final del keynesianismo debido a que la economía estaba dominada por las empresas multinacionales cuyo poder era tan grande que la intervención de los gobiernos se podía considerar prácticamente inapreciable. Estas empresas operaban en el sector "mesoeconómico" de la economía y ocupaban los puestos de poder más importantes tanto de la economía nacional como de la internacional. El poder reside en un pequeño grupo de gerentes de alto estatus que controlan los monopolios y cuya percepción de los intereses públicos entra en conflicto muchas veces con el interés de los gobiernos, y pueden obstaculizar las medidas fiscales y monetarias que decidan éstos. Por lo tanto sin la propiedad pública

y el control de los medios de producción el Estado nunca podrá administrar los elementos estratégicos de la economía en interés de la colectividad. Predecía que en la década de los años 80 unas 100 empresas controlarían más del 60 por cien de la producción manufacturera y esta situación tenía que corregirse a través de una cierta planificación socialista, al igual que la política de los bancos e instituciones financieras más importantes. Además tenían que establecerse acuerdos de planificación voluntaria entre el gobierno, los sindicatos y las grandes empresas para pactar precios, salarios, inversiones y la política laboral (22).

Muchas de estas ideas ya habían sido incorporadas al programa del partido por la izquierda laborista antes de que se publicase el libro de Holland, algunas de ellas no eran nuevas y también se añadieron otras, como las de la política expansiva o el control de las importaciones, que al no concordar con la normativa de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea convertía al laborismo en uno de los escasos partidos parlamentarios que se oponían a la incorporación del Reino Unido a la C.E., a la que han acusado de estar formada por intereses puramente capitalistas basados en la libertad de movimientos del capital e incapaz para dotarse de poderes gubernamentales para controlar la economía. Así pues la propiedad pública, la planificación económica, el gasto público, el control de las importaciones y la retirada de la CEE eran los aspectos más distintivos del giro programático que había dado la izquierda laborista con el nombre de Alternative Economic Strategy (AES), a lo que había que añadir la reducción del gasto militar, su actitud pacifista y la exigencia del desarme nuclear, la exigencia de una mayor democratización interna del partido y la

reivindicación feminista sobre la igualdad de sexos.

Este desplazamiento hacia la izquierda del laborismo, tanto en lo que se refiere al programa como en su democratización y representatividad interna, era debido fundamentalmente al cambio que se había producido en la composición de su militancia, y a las exigencias de estos nuevos militantes en cuanto al funcionamiento y la organización del partido. En esos años se produjo un aumento considerable, hasta llegar al 50 por cien, de militantes de clase media muy activos y profesionalmente bien preparados (23), buena parte de los cuales trabajaban en el sector público que pasó a representar el 65 por cien de los afiliados. También se adhirió por esa época una nueva generación de mujeres debido en buena medida al ascenso de las reivindicaciones feministas dentro y fuera de los sindicatos, y, por último, lo que aportó una mayor contribución fue el fenómeno llamado "entrismo". El entrismo es el término trotskista para designar la formación de una facción dentro de un partido que opera como una organización estructurada y disciplinada, con su propia jerarquía de mando, comités locales y centrales y militantes dedicados exclusivamente a esta tarea. Este era el caso del Militant Group, cuyos integrantes trataban de infiltrarse en cada una de las agrupaciones y federaciones del partido por todo el país. Esta tendencia tuvo mucho éxito entre las juventudes socialistas sobre todo por su disconformidad con la política moderada de Wilson, y por su gran activismo. No hay que sobrevalorar la importancia que tuvo este grupo trotskista pero, en muchas ocasiones, contribuyó a radicalizar la postura del partido tanto entre los militantes como en el propio NEC y en sus decisiones sobre la propiedad pública, el desarme unilateral

o la retirada de la Alianza Atlántica. Otro de los factores que contribuyeron al progreso y fortalecimiento del ala izquierda fue la falta de organización de la derecha, puesto que sólo la primera había sentido siempre la necesidad de organizarse para hacer oír la voz de las minorías. La derecha, que había sido siempre mayoritaria sólo se reagrupó en 1977 en la Campaign for Labour Victory como respuesta a la proliferación de los grupos de izquierda y, en especial, para contrarrestar la Campaign for Labour Party Democracy. A partir de entonces la batalla interna para lograr el control del partido se endureció y fue decisiva a partir de 1979 cuando el laborismo sufrió la gran derrota electoral que dió la mayoría a Margaret Thatcher.

En la vida interna del partido laborista, por su estructura peculiar, no podemos dejar de mencionar a los sindicatos, que juegan también un papel importante. De hecho, en el caso de que los sindicatos votasen en bloque en los congresos, podrían dominarlos. En 1970, por ejemplo, los sindicatos controlaban 5.473.000 votos, mientras que el partido sólo tenía 634.000, y su voto ha cobrado un peso mayor recientemente a medida que ha disminuido la militancia en el partido. Esta militancia, como puede observarse en la tabla 4 ha descendido dramáticamente en los últimos quince años, sufriendo su máxima caída después de la derrota de 1979 con la división del partido y la formación del Social Democratic Party (SDP) (24). El Congreso de 1979 fue el momento decisivo en que todos los sectores de la izquierda junto a los sindicatos, liderados por Benn, decidieron dar un paso decisivo en lo que ellos llamaban "la democratización del partido", que trataba de arrebatar a los órganos de dirección del partido la nominación

de los candidatos al Parlamento y de devolver al National Executive Committee y a las bases militantes la reelección de éstos, al menos una vez durante cada legislatura, para hacerles responsables directamente ante los miembros de las agrupaciones locales. Esta propuesta tuvo diversas formulaciones con la finalidad de equilibrar el poder electoral de los grupos parlamentarios, el de los sindicatos y el de las agrupaciones.

TABLA 4

AFILIACION POLITICA

1970-----	690.191
1971-----	699.522
1972-----	703.030
1973-----	665.379
1974-----	691.889
1975-----	674.905
1976-----	659.058
1977-----	659.737
1978-----	675.946
1979-----	666.091
1980-----	384.156
1981-----	276.692
1982-----	273.803
1983-----	295.344
1984-----	323.292
1985-----	313.099

En el Congreso Anual de Blackpool de 1980 se había aprobado un programa económico muy radical que incluía un aumento considerable de la propiedad pública, la ampliación de las medidas sobre democracia industrial, una política económica claramente expansiva, el aumento de los impuestos sobre el patrimonio y el recorte del gasto militar, la propuesta de cerrar las bases americanas y la retirada de la CEE. Además aprobaba algunas de las propuestas más significativas para la democratización interna del partido como la reelección de los diputados y la extensión del derecho a votar para elegir a los líderes del partido. Callaghan trató de frenar este nuevo desplazamiento del partido hacia la izquierda y de terminar con los enfrentamientos internos dimitiendo de su cargo con la esperanza de que en su lugar sería elegido el moderado Denis Healey, que había encabezado el gobierno Wilson, pero no fue así y en su lugar salió elegido Michael Foot conocido representante del ala radical al que, dada su vinculación con los sindicatos, se le consideró como el hombre más capacitado para mantener la unidad del partido.

Todavía en 1981 se dió un paso más en esta batalla por la democratización interna instaurando el colegio electoral que también trataba de arrebatar la elección del líder del partido de las manos del grupo parlamentario estableciendo que para elegir al líder y al portavoz en el Parlamento se debería configurar un sistema electoral interno en el que los militantes tuvieran un 30 por cien de los votos, los sindicatos un 40 por cien y los miembros del parlamento el restante 30 por cien. Con ello se trataba de dar a los militantes y a los sindicatos la representación democrática que les correspondía y hacía que las decisiones de los congresos fuesen de aplicación obligatoria para los líderes parlamentarios.

A todas estas medidas se opuso siempre el ala derecha del partido alegando que un parlamentario elegido por el voto popular tenía mayor peso democrático que el de los militantes activistas del partido, que manejados por los caciques sindicales actuarían como marionetas. Esta circuns-

tancia unida a la elección de Michael Foot como el candidato ideal para evitar la ruptura del partido provocó que algunos de los líderes más representativos de la derecha como David Owen, Bill Rodgers, Shirley Williams y Roy Jenkins fundaran el Partido Social Demócrata (SDP) abandonando el laborismo y consumándose así la ruptura del partido que quedaba en manos del ala más radical. En enero de 1981 después de la asamblea celebrada en Wembley, 13 diputados del Parlamento abandonaron el partido y en ese mismo año 12 más se unieron a ellos.

La formación del SDP rompió el partido laborista, arrastró a un grupo significativo de diputados y militantes y concitó muchas esperanzas en un sector del electorado que había visto con preocupación el desplazamiento izquierdista del laborismo en los últimos años. Con su experiencia política los socialdemócratas captaron inmediatamente más de 50.000 militantes y procuraron mantener cohesionado a su grupo, mientras los conflictos continuaban dentro de la formación socialista. De esta manera en las elecciones de 1983 casi alcanzaron en porcentaje de votos a los liberales, y cuando formaron alianza con ellos se quedaron a dos puntos del voto laborista, que sólo llegó al 27 por cien, guiado por un líder que no lograba terminar ni con los conflictos internos ni con las propuestas cada vez más radicales de los grupos extremistas del partido (TABLA 5).

TABLA 5

ELECCIONES GENERALES JUNIO 1.983

<u>Partido</u>	<u>Votos</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Diputados</u>
Conservador	13.011 m.	42.4	397
Laborista	8.457 m.	27.6	209
Alianza	7.781 m.	25.4	23
(Liberales)	(4.210 m.)	(13.7)	(17)
(SDP)	(3.571 m.)	(11.7)	(6)

SNP	0.332 m.	1.1	2
Plaid Cymru	0.125 m.	0.4	2
Otros	0.963 m.	3.1	17
TOTAL	30.669 m.	100	650

El laborismo compitió en las elecciones generales de 1983 con un manifiesto que se comprometía con una política de defensa antinuclear (cancelación de los submarinos Trident, rechazo al despliegue de misiles crucero, retirada de todas las bases nucleares y la supresión unilateral del armamento nuclear británico); con una reducción de los gastos de defensa, la retirada de la Comunidad Europea, la expansión de la propiedad pública y la restauración de los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. Este manifiesto fue descrito por un político laborista más experimentado como "la nota de suicidio más larga jamás escrita" puesto que contenía compromisos políticos claramente impopulares para los seguidores tradicionales del laborismo (25).

2.3. Thatcherismo y Laborismo

No es la primera vez que el nombre de un Presidente o Primer Ministro confiere el título a un período histórico o político. Así pues muchos estudiosos han convenido en hablar de thatcherismo para referirse al período de gobierno

liderado por Margaret Thatcher, debido al impacto personal que muchas de sus decisiones han tenido en la vida política inglesa e incluso en la escena internacional. El thatcherismo ha tenido diversos significados; para unos ha sido el reflejo del resentimiento y la alienación de la pequeña burguesía contra la marcha que tomaban las grandes empresas, los grandes negocios y la política del gobierno asociada al keynesianismo y al estado del bienestar; para otros representa la "vía británica" a la próxima onda larga de la expansión económica capitalista basada en la especialización flexible y en las nuevas formas del consumo individualizado que suplantará a la anterior basada en la producción y el consumo de masas (26), y por último para otros supone la reorientación de la política exterior, y la redefinición de su lugar en el mundo, su ataque a la postura de los sindicatos y del Partido Laborista, la reestructuración del papel del Estado en la economía y la reordenación del equilibrio de poderes entre las diferentes fracciones del capital dentro del Reino Unido (27).

El thatcherismo, sin embargo, parece haber comprendido muchas de estas y otras características y según el punto de vista del análisis se puede subrayar más una faceta u otra. Lo cierto es que el gobierno Thatcher, después de un largo período de gobierno laborista y de las vacilaciones de sus propios predecesores, se propuso orientar definitivamente la economía y la política hacia premisas claramente neoliberales. En ese sentido el thatcherismo participó también de la tesis del largo declinar de la sociedad británica a la que se proponía dar un impulso para sacarla de su lento deterioro e inyectarle un proyecto de futuro. Según algunos autores esta voluntad política de la derecha ha

tenido que pasar por tres estadios progresivos: a) el del desarrollo del propio thatcherismo como movimiento social opuesto a los pactos de postguerra y a las políticas que se habían puesto en práctica para mantenerlos; b) el periodo de consolidación que culminó en el control del partido y del gobierno; y c) el periodo en que el control se ha extendido a la transformación a largo plazo de la sociedad británica eliminando la mayor parte de los mecanismos estatales que habían consolidado una política de consenso (28).

Su estrategia económica se basó fundamentalmente en la aplicación de una política monetarista, en la destrucción de las conquistas políticas y económicas de los sindicatos, en el proyecto hegemónico de la economía social de mercado y en la estrategia para resolver la crisis dual del Estado que consistía en abandonar los acuerdos del corporatismo tripartito y toda tentación de dirigismo desarrollando al máximo la libertad de las fuerzas del mercado. Su primer objetivo fue reducir la inflación a través del control férreo del crédito y el descenso del PSBR (Public Sector Borrowing Requirement), después reducir el gasto público mediante un programa de privatización de las empresas públicas y una disminución de los gastos sociales y, por último, aumentar los incentivos a la industria privada, reducirle impuestos y fomentar la desregulación puesto que la regulación coarta la capacidad e iniciativa empresarial.

El primer gobierno del periodo Thatcher aplicó un programa económico monetarista que aumentó considerablemente el desempleo pasando de 1,3 millones a casi 2 millones de parados y poco después a 2,7 millones, pero no consiguió reducir la inflación, que al contrario pasó del 10 al 22 por cien, lo que trajo una oleada de protestas.

La política laboral del período Thatcher tuvo como objetivo terminar con el protagonismo de los sindicatos en la elaboración de la política económica suprimiendo su participación en la toma de decisiones y debilitando su fuerza social a través de una legislación que obstaculizase su capacidad de movilización. Sus primeros pasos en este sentido fueron las July Orders de 1979 y el Employment Act de 1980 que otorgaban a los empresarios el derecho a emprender acciones legales contra el "secondary picketing", permitiendo nuevos "closed shops"* sólo cuando fuesen aprobados por un margen del 80 por cien de los afiliados en votación secreta y concediendo a la dirección mayor libertad de acción en cuanto a despidos. Cuando en 1981 el desempleo llegó a su punto más álgido y se produjeron importantes disturbios en las principales ciudades industriales el gobierno contraatacó con un "Second Employment Act" que ponía fuera de la ley las "secondary Strikes", responsabilizaba a los sindicatos por los daños causados en las huelgas y fortalecía los derechos de los individuos contra los "closed shops". Más tarde la Trade Union Reform Bill de 1984 obligó a celebrar votación secreta para elegir a los mandos sindicales, para convocar huelgas y para la reafiliación (con intervalos de cinco años) al partido laborista.

La filosofía thatcherista sobre el movimiento sindical y obrero se fue imponiendo poco a poco en esta década a través de la legislación, la coerción y el cambio en la composición de las fuerzas sociales. Los trabajadores sufrieron serias derrotas -los siderúrgicos en 1980, los mineros en 1984-85, y en el 1986-87 los enseñantes y funcionarios-, de tal manera que si en 1979 la proporción de la fuerza de trabajo afiliada a los sindicatos era del 54,3 por cien es decir 13,3 millones, a lo largo de la década

de

los ochenta fue descendiendo hasta 9,5 millones, es decir el 40 por cien . El número de huelgas disminuyó considerablemente y apareció el sentimiento corporatista sobre todo entre los profesionales, el sindicato minero se dividió y, en general, la fuerza del sindicalismo se debilitó considerablemente.

Esta crisis de los sindicatos guardaba cierto paralelismo con la del partido socialista. La batalla interna continuó primero en la disputa por el liderazgo en la Cámara de los Diputados entre Tony Benn y Denis Healey. Buena parte del partido, e incluso de los líderes sindicales, pensaban que el liderazgo de Foot en el partido debería ser compartido con el de Healey en el parlamento y eso supondría un equilibrio de las fuerzas internas entre la izquierda y la derecha, y que así debería continuar en el futuro inmediato, pero entonces Benn comenzó una dura campaña, muy personalizada, para disputarle el liderazgo en la Cámara Baja a Healey. Cuando a finales de 1981 se celebró la votación y Healey se alzó con la victoria por una mínima diferencia, la izquierda reaccionó con dureza contra Foot y aquellos sectores de sus propias filas que no habían apoyado la candidatura de Benn.

Este comportamiento político disminuyó la fuerza del laborismo que se vio duramente rechazado por el voto popular en las elecciones generales de 1983. El fracaso se debió más a las deficiencias propias de la izquierda que a los éxitos de la derecha, puesto que el gobierno no conseguía frenar el desempleo que había sobrepasado ya los tres millones de parados ni tampoco la inflación. Ante este panorama la derecha se aprovechó del nacionalismo popular que provocó la guerra de las Malvinas para convocar elecciones presentando un programa sin

cambios en su política de ajuste económico, mientras la izquierda presentaba un programa radical cuyos puntos más llamativos eran el resultado de los últimos congresos donde se habían impuesto los criterios situados más a la izquierda, como la retirada de la Comunidad Europea, el desarme nuclear unilateral, la nacionalización de las empresas que había privatizado el gobierno conservador y la abolición de la Cámara de los Lores. El resultado como ya hemos visto fue desastroso para los laboristas que bajaron al 27,4 por cien de los votos, obteniendo 209 diputados mientras los conservadores alcanzaron el 42,4 por cien con 397 diputados.

Las consecuencias de esta derrota no se hicieron esperar; derecha e izquierda se lanzaron mutuas acusaciones sobre las causas de división del partido, sobre el contenido del programa y sobre la estrategia de la propia campaña electoral. Pero esta derrota sirvió para dejar claro que se hacía necesario un nuevo liderazgo en el partido, cambio que tendría lugar en octubre de ese mismo año en el Congreso de Brighton, donde Neil Kinnock, que provenía del ala izquierda, y Roy Hattersley, de la derecha, fueron elegidos para encabezar una nueva etapa política que superase todas las contiendas y fuese capaz de relanzar la vida política del partido y volver a conectar con los sectores de la sociedad que le habían abandonado. Hattersley era visto como un portavoz de la derecha laborista, partidario de la OTAN y la entrada en el Mercado Común, abogaba por una política de rentas y una actitud desideologizada de la intervención del Estado que debería practicar una política de bienestar como la que él había vivido en sus tiempos de juventud bajo el gobierno Attlee. Kinnock era un político prácticamente

desconocido, hijo de un minero galés, profesor de economía y con una visión realista del socialismo. Perteneciente a la izquierda del partido fue, a pesar de ello, un enemigo declarado del "entrismo" y de los grupos radicales de vanguardia, se opuso a Benn como líder del grupo parlamentario y poco a poco devolvió la unidad al partido dotándole de un programa más acorde con las expectativas de la sociedad (29). Su elección contó con más del 70 por cien de los votos pero pronto tuvo que afrontar la desagradable y larga huelga de los mineros en la que el partido optó por la moderación y el distanciamiento de esta acción sindical, sin poder evitar que el sindicato minero NUM (National Union of Miners) se partiese en dos dando pie a la creación de la UDM (Union of Democratic Mineworkers).

Su deseo de reconquistar el voto perdido de las clases trabajadoras en ascenso y de las nuevas clases medias le obligó a reformular el programa cambiando su actitud respecto a la participación en la Comunidad Europea, la reivindicación de la nacionalización de las empresas, el rechazo de la legislación laboral, etc. El programa que perfilaron entre 1984 y 1987 priorizaba la revitalización de la industria manufacturera a través de la creación de un Banco de Inversión Nacional al estilo del modelo japonés, que se abastecería del fondo de pensiones, a través de una combinación de incentivos sobre los impuestos y de garantías sobre los intereses, con créditos a largo plazo a las empresas con intereses subvencionados. El programa reivindicaba también grandes inversiones estatales en infraestructuras y vivienda; mejoras en la educación técnica y el compromiso de mantener cada año Reuniones Nacionales Económicas entre el gobierno, los sindicatos y la patronal. Otros

aspectos del programa se referían a la abolición de la legislación laboral que había puesto en práctica el gobierno conservador y a campañas de prevención contra la delincuencia (30). Aun así el partido no mejoró sus perspectivas electorales durante los años 1986 y 1987 debido a temas muy puntuales en los que su actitud no acababa de convencer al electorado, como la polémica sobre el racismo y sexismo, o la política de defensa nuclear. A pesar de todo ello y de que las diferencias internas continuaron pesando en la imagen que proyectaban sobre la sociedad, Kinnock consiguió establecer a su alrededor un grupo de trabajo homogéneo y eficaz que cada vez suscitaba más adhesiones y consiguió cierto éxito en la campaña para las elecciones de 1987. En esta campaña se insistió sobre los temas clásicos del laborismo como el aumento del gasto público, sobre todo en dos áreas a las que era especialmente sensible la población como son salud y educación, la creación de puestos de trabajo, el establecimiento de conversaciones tripartitas para alcanzar acuerdos sobre precios y salarios a fin de controlar la inflación, el establecimiento de una Asamblea Escocesa democráticamente elegida, la creación de ministerios dedicados a los problemas de la mujer y del medio ambiente y una política de defensa no nuclear (31). Con este programa consiguieron avanzar en un 3,3 por cien el número de votos, lo que suponía veinte escaños más que en 1983.

2.4. Keynesianismo frente a Monetarismo

El interés de los dirigentes políticos por superar el declive que ha experimentado durante muchos años la economía de su país está basada en datos y apreciaciones objetivas y, en los últimos años, ha constituido una de las metas que más les ha preocupado. Entre 1950 y 1976 la economía británica creció solamente las dos terceras partes de lo que lo hicieron las dieciseis economías occidentales más grandes. Sólo la exportación mundial de sus manufacturas cayó desde el 25,5 por cien del total de las exportaciones en 1950 al 7,5 por cien en 1985 (32). Algunos autores apuntan que este menor crecimiento en comparación con otros países que se estudian aquí, como Francia o Alemania, se debe al mayor coste de la mano de obra a causa de la caída de su natalidad. El crecimiento de la productividad en los países del continente se debió al peso que tuvo la fuerza de trabajo del sector agrícola y de los trabajadores autónomos que pasaron a la industria, mientras que en 1950 en el Reino Unido ya sólo quedaba un 5 por cien de fuerza de trabajo empleada en el sector primario, en los otros países todavía quedaba el 21 por cien en Alemania, el 29 por cien en Francia y el 43 por cien en Italia (33). A medida que estos países continentales se fueron modernizando después de la II Guerra Mundial e introdujeron nuevas tecnologías necesitaron menos importaciones para abastecer sus necesidades internas y al mismo tiempo se convirtieron en competidores de los países

más avanzados llegando a invertir esta relación. De esta manera en 1978 para producir una tonelada de acero el Reino Unido necesitaba 10,9 horas-hombre, comparados con las 6,4 que se necesitaban en Francia. La industria del automóvil podía producir sólo 5,1 vehículos por empleado y día en 1973 respecto a los 6,8 que se producían en Francia e Italia y los 7,3 en Alemania (34). Tres son los factores que se aducen para explicar estas deficiencias: a) la inversión ha ido siempre por detrás de la de sus competidores; b) su ritmo de adaptación a las nuevas tecnologías industriales ha ido siempre por detrás de los otros países, y c) su organización del trabajo ha sido menos eficiente. Una de las explicaciones más recurrentes, por parte de la derecha, para justificar esta decadencia es el crecimiento del gasto público que ha pasado del 32 por cien del PIB en 1950 al 45 por cien en 1980; esta enorme intervención estatal ha fomentado el crecimiento de la carga fiscal y ha desactivado la inversión. Sin embargo, otros estudiosos son del parecer contrario; piensan que no existe una conexión tan estrecha entre ambos fenómenos y demuestran que el Welfare state ha mejorado la situación general de la economía británica.

Las características que han definido esta política desde la II Guerra Mundial se han basado en la aplicación de un enfoque keynesiano de regulación de la demanda. Los déficits presupuestarios fueron utilizados para estimular el consumo y la inversión cuando la economía parecía estancada; los controles sobre las alzas de precios, los aumentos de los intereses bancarios y los recortes del gasto se

utilizaron para reducir la demanda cuando el rápido crecimiento parecía aumentar la inflación o el déficit de la balanza de pagos (35). A finales de los años 50, sin embargo, uno de los defectos intrínsecos del keynesianismo se puso de manifiesto ya que demostró ser una excelente técnica para estimular el empleo, pero no era el mecanismo adecuado para frenar la inflación.

Teniendo en cuenta esto el gobierno laborista de 1964-70 en lugar de hacer cumplir una política de rentas confió en sus buenas relaciones con los sindicatos para asegurarse medidas de restricción salarial voluntaria. En este período el gobierno obtuvo la colaboración sindical debido a su convicción de que la economía estaba en peligro, y también por el deseo de mantener a los socialistas en el gobierno. Pero en el siguiente gobierno conservador de 1971-74 la fuerza de los sindicatos fue suficiente para impedir a Heath la aprobación de la ley de Relaciones Industriales, que pretendía aumentar la autoridad del liderazgo sindical frente a las bases y situar los convenios colectivos dentro de un marco legal. El fracaso de estos intentos explica por qué los sucesivos gobiernos fueron incapaces de intervenir por la fuerza en la esfera de las relaciones industriales, hasta que la llegada del thatcherismo aprovechó la división de la izquierda para debilitar a los sindicatos.

Para controlar la inflación el gobierno laborista de 1974-79 confió inicialmente en el llamado Contrato Social un pacto voluntariamente negociado con los sindicatos para que los aumentos salariales no excediesen el incremento del coste de la vida; como contrapartida el gobierno tomaría diversas medidas para restaurar el poder sindical en el puesto de trabajo y

aumentar el salario social destinado a pensionistas, parados y a los sectores obreros peor remunerados. Para ello impulsó una política económica reflacionista, sobre todo a través del crecimiento del gasto social y de los salarios en el sector público. Consecuentemente el consumo creció pero la inversión permaneció estancada. La reflación empujó momentáneamente a la economía que creció de nuevo pero a costa de un ritmo de inflación que alcanzó el 25 por cien en la primavera de 1975. La población empezó a ver la inflación como un problema más serio que el paro, aunque también éste continuaba en ascenso. A su vez la reactivación de la economía aumentó las importaciones lo cual generó problemas en la balanza de pagos y obligó al gobierno a escoger entre una política proteccionista frente a la competencia internacional o el recurso al Fondo Monetario Internacional que forzaba al Estado a recortar el gasto público por una parte, y a establecer una política de rentas más restrictiva por otra. En 1976 la crisis económica era de tal magnitud que el FMI impuso su política al Partido Laborista a cambio de ayuda financiera internacional. De esta manera los socialistas adoptaban una estrategia monetarista contra los deseos del propio gabinete. El ministro de Hacienda Healey anunció que el crecimiento en las prestaciones del sector público se limitaría a 9.000 millones de libras y que habría recortes en el gasto público dirigido a la industria, defensa, salud y servicios sociales, subvenciones a los alimentos básicos y préstamos a los ayuntamientos. Cuando un poco más adelante se obtuvo del FMI un crédito adicional de 2.300 millones de libras se introdujeron nuevos recortes en el gasto público por valor de 2.500 millones de libras para los próximos dos años (36). En principio los sindicatos negociaron la política salarial basada en una subida restringida de 6 libras semanales por lo que quedaba del año 1976, pero el apoyo de los sindicatos se vino abajo cuando sus contrapartidas se vieron incumplidas con el recorte del gasto público. El gobierno hizo un llamamiento para mantener el 10 por cien de aumento salarial en 1977,

pero los sindicatos sólo aceptaron esta medida por un año, al término del cual rechazaron el intento de Callaghan de imponer un 5 por cien de aumento como norma salarial. Esta política de rentas, aunque fue bastante efectiva para no contener el salario real entre 1976-77, fracasó en el invierno de 1978-79 cuando estallaron diversas huelgas en algunos servicios vitales del sector público al ver recortado su presupuesto.

En ese momento el partido se dividió en dos partes cada una de las cuales defendía un camino distinto en la política económica que se debería aplicar. La corriente que estaba más representada en el Parlamento continuó defendiendo una política restrictiva de rentas, mientras que la más enraizada en las agrupaciones acusó al gobierno de renunciar a la política industrial intervencionista que se había acordado en el programa de 1973 y de imponer a los sindicatos una política salarial arbitraria de corte monetarista. Este grupo se inclinaba por una política proteccionista y expansionista unida a una política industrial agresiva. Las dos corrientes chocaron en el congreso del partido de 1977-78 con las consecuencias que ya hemos descrito.

De esta manera fracasaba la política keynesiana. Puesto que el control de la demanda no fue suficientemente efectivo en su lucha contra la inflación, la política de

rentas se convirtió en el complemento indispensable, pero dada la organización del movimiento obrero y su estructura de participación la puesta en práctica de una política de rentas estaba destinada a ser conflictiva y en lugar de aumentar la efectividad del Estado la experiencia neocorporatista minó su autoridad.

El "Winter of discontent" aumentó la reacción pública contra el neocorporatismo y en 1979 el 79 por cien del electorado y el 50 por cien de los propios sindicalistas opinaban que los sindicatos tenían demasiado poder. Buena parte de la población comenzó a pensar en otro camino de gestión económica que no conllevara continuos conflictos industriales y constantes negociaciones tripartitas y empezó a ver ventajas en las doctrinas económicas vinculadas al monetarismo. Los monetaristas, basándose en la teoría de las llamadas expectativas racionales de los agentes económicos, pensaban que los sindicatos limitarían automáticamente sus exigencias salariales frente a las medidas monetarias de ajuste, porque eran conscientes de que actuar de otra manera sólo conduciría al desempleo. La perspectiva de una inflación más baja sin que el paro aumentase era el milagro que prometía el monetarismo.

La estrategia económica de la derecha en los presupuestos de los primeros años del gabinete Thatcher, en los que recortaba los impuestos directos, subía los indirectos y reducía los aumentos en el gasto público, se basaba en la creencia de que el control estricto del gasto público y la oferta de dinero reducirían la inflación. Para los gobiernos de Margaret Thatcher la inflación era el primer y principal enemigo a batir no porque minase el valor de los ahorros de la clase media sino porque pensaban que el Reino Unido no alcanzaría una posición competitiva en los mercados internacionales

mientras los costes de producción no se situasen al nivel de sus competidores; factores como los tipos de cambio y de interés deberían ser determinados más por el mercado que por la intervención gubernamental. Pero en realidad la inflación no alcanzó el 3 por cien hasta 1986 al tiempo que el paro se resistía a bajar del 12 por cien. Esto se debió en buena medida a que el gobierno había encontrado grandes dificultades para recortar el gasto público, en parte porque se había comprometido a aumentarlo considerablemente en algunos sectores clave para su política, como defensa o salud y, en parte, porque muchos de los compromisos ya adquiridos por los gobiernos anteriores respecto a la política de bienestar no podían desaparecer de inmediato. Tanto es así que el gasto público se incrementó realmente en un 10,3 por cien en términos reales entre 1980 y 1985, lo cual indica que el objetivo global de reducir el gasto público no fue cumplido por los conservadores, aunque sí que cambiaron la distribución interna de ese gasto (37).

Este cambio en el gasto reflejaba las preferencias políticas de los conservadores, que redujeron las ayudas a los sectores que les suponían menos costes electorales, sin olvidar que el aumento de estos gastos se veía compensado considerablemente por los enormes beneficios que les aportaron las ventas procedentes de su programa de privatizaciones.

Por lo que se refiere a las políticas de bienestar social éstas tienen hondas raíces en la cultura, que se extiende desde la filosofía de los socialistas utópicos y las comisiones de investigación parlamentaria de finales del siglo XIX hasta las últimas aportaciones de la ciencia social y su puesta en práctica después de la II Guerra Mundial. Aquí vamos a dejar de lado todas las referencias históricas

y teóricas para centrarnos más bien en la praxis política que ha tenido lugar en Gran Bretaña desde los años 70 (38).

El gasto público en políticas de bienestar no es una actividad planificada y dirigida hacia determinados grupos sociales a causa de sus necesidades, sino que consiste más bien en un conjunto de programas e instituciones que actúan separadamente teniendo cada una su propia organización e identidad. En el caso británico el gasto global ha crecido poco durante muchos años debido a que su punto de partida después de la II Guerra Mundial fue muy alto. En líneas generales tomando su nivel más alto y el más bajo no les ha separado más de 10 puntos , y desde 1950 que era de un 42,2 por cien ha pasado al 47 por cien después de 1980. En relación al Producto Nacional Bruto ha crecido desde el 34,9 por cien en 1950 hasta poco más del 40 por cien en la actualidad, aunque en algunos períodos, sobre todo en la década de los años 70 y con gobierno laborista, ha logrado alcanzar cotas del 50 por cien.

Todos los programas han crecido en términos reales pero el que más ha crecido, y con mayor rapidez, ha sido el que afecta al mantenimiento de las rentas que, como gasto global y durante todo este período, se ha doblado, lo que le ha supuesto pasar del 27 por cien del PNB al 40 por cien. La mitad de este gasto se dedica a jubilaciones siendo los otros grupos de este programa por orden de importancia, la enfermedad y la invalidez que suponían el 13 por cien del total en 1980, mientras que las subvenciones al paro suponían sólo el 5 por cien excluyendo a los jóvenes y los desempleados de larga duración, que son las categorías que más han aumentado recientemente. Las prestaciones familiares se cifraban normalmente en el 18 por cien del total y afectan a los subsidios por maternidad, la pobreza, los jardines de

infancia etc. La Seguridad Social que en el Reino Unido es un servicio universal representa el 21 por cien del gasto social y el 5,4 por cien del PNB. El gasto en educación se ha triplicado desde 1950 a 1980 subiendo del 3,3 al 5,5 por cien del PNB, y desde 1971 es obligatoria hasta los 16 años. La política más variable ha sido la de vivienda.

Estos colectivos han sufrido cambios notables en los últimos años, así el grupo más grande, que son los pensionistas, ha crecido desde los 4,2 millones que eran en 1950 a los 9,3 que eran en 1981. El segundo grupo por orden de importancia son los niños; el número de familias que recibe prestaciones por este concepto ha pasado, en ese mismo período, de 3,2 a 7,3 millones. El gasto en desempleo que no había recibido gran atención hasta 1980 creció considerablemente a partir de esa fecha para atender a los varios millones de parados.

¿Se puede decir que con esta distribución del gasto público se han corregido las desigualdades y ha desaparecido la pobreza? La acusación más fuerte que se hace contra el Estado de Bienestar británico es que no ha conseguido eliminar la pobreza, tal como demostraron Townsend a comienzos de los años 70 (39) y más tarde Mack y Lansleg (40), quienes afirmaban que a más de un 20 por cien de la población se le podía incluir dentro de una definición amplia de "vivir en pobreza", basándose en la carencia de alguna de las necesidades sociales de que disfruta la mayor parte de la población. Estas cifras son, por supuesto, más altas que las que se manejan convencionalmente para fijar el umbral de renta que se necesita para tener acceso a la asistencia social, es decir para entrar en la "línea de pobreza". Con todo la población pobre creció del 3,4 por cien en 1972 al 5,3 por cien en 1981, siendo los colectivos más importantes los

desempleados, los jubilados y las familias monoparentales . Los trabajos de Townsend muestran que los cuatro grupos más necesitados por orden de importancia son: a) los parados, especialmente los de larga duración (más de un año), b) los de salarios bajos, especialmente cuando no trabaja la mujer, c) los minusválidos, y d) las familias monoparentales (especialmente cuando la cabeza de familia es mujer); esta situación se ha agravado con el aumento de los divorcios. En el estudio se pone de relieve la tendencia de estas cuatro características a estar interconectadas generando segmentos de población aislados de la sociedad y de la economía de mercado.

El impacto de la política social en individuos y hogares se verifica también a través de las transferencias de impuestos y prestaciones, tanto directos como indirectos. Los indicadores de igualdad muestran un cambio gradual hacia la igualdad pero todavía quedan marcadas diferencias entre los grupos que son difíciles de corregir a través de los impuestos y que tienden a agravarse durante los periodos de gobierno conservador. La desigualdad es mayor si se toma como punto de referencia a la riqueza; el 10 por cien de los más ricos posee más del 50 por cien de la riqueza total. La distribución de la renta está más igualada que la de la riqueza pero menos sujeta a cambios; así, el 25 por cien de la población ha tenido el 50 por cien de la renta total en todos estos años desde la postguerra.

Por otra parte el examen pormenorizado de los datos por grupos de renta revela el alcance limitado de las transferencias del Estado. El 20 por cien que apenas tiene

recursos propios, puesto que la mayoría son jubilados, recibe 3020 libras al año del Estado pero paga 840 en concepto de impuestos indirectos. Si consideramos al 35 por cien de ese grupo, integrado por no jubilados, vemos que sus ingresos medios son de 1440 libras que equivalen prácticamente a lo que pagan en impuestos.

Este fracaso aparente en la ayuda directa a los más necesitados parece que debería estar compensado con una política más igualitaria en la prestación de servicios por parte del Estado. Pues bien, Le Grand, siguiendo un modelo de distribución similar al de los bienes y servicios privados (41) ha demostrado que muchos programas de bienestar benefician más a los ricos que a los pobres. Usando datos de finales de los años 70 probó que el servicio de distribución más desigual era el transporte, donde los más ricos reciben subsidios 17 veces superiores en transporte privado y 10 veces más en transporte por ferrocarril. La redistribución de los servicios educativos era menos desigual siguiéndole la vivienda, y el servicio más igualitario era la salud. Los ricos reciben una cantidad más elevada de servicios sociales que los pobres. El valor medio de los servicios sociales en 1983 era de 1550 libras por familia. En el caso del 20 por cien más rico era de 902 libras y en el del 20 por cien inmediatamente por encima del 20 por cien más pobre de 670 libras. El 20 por cien más pobre quiebra la tendencia al recibir como media 691 libras debido a que reciben subsidios para vivienda más elevados.

De todas formas la mayor parte de los servicios sociales ha mejorado en estos últimos veinte años. En sanidad el número de hospitales ha crecido en un 48 por cien entre 1960 y 1983, y aunque ha disminuido el número de días de residencia ha aumentado la lista de espera. El número de

médicos se ha doblado y el de enfermeras ha crecido en un 50 por cien. En educación el número de alumnos que accede a la etapa secundaria ha crecido considerablemente, lo que ha constituido uno de los mayores éxitos de la política educativa de estos años; también ha descendido mucho el fracaso escolar y se ha triplicado la escolarización de los niños menores de 5 años. En vivienda las viviendas unipersonales sobrepasaron el número de viviendas familiares a comienzos de los 60 y en los 80 el surplus pasaba el millón. Han mejorado las condiciones de habitabilidad y las viviendas sin condiciones han disminuido desde 9,7 millones en 1950 a 4,1 en 1971. Pero esta tendencia ha remitido a mitad de la década de los 80.

¿Podemos afirmar, por tanto, que el Estado de Bienestar británico, uno de los modelos en que han intentado inspirarse muchos otros países, ha constituido un éxito? Si nos referimos a uno de sus objetivos que es la redistribución de la renta y la riqueza y el uso de los servicios sociales para cambiar los modelos de poder y de relación social podemos decir, con la mayor parte de sus estudiosos y como confirman los datos hasta aquí expuestos, que el Estado de Bienestar ha constituido un fracaso. Pero si consideramos otras de sus finalidades, como son la cobertura social y la extensión de la igualdad de oportunidades, entonces hemos de convenir en que ha conseguido un éxito relativo.

Parece que a los gobiernos laboristas no les ha sido posible aplicar instrumentos fiscales suficientemente radicales como para asegurar una redistribución significativa de la renta y la riqueza. En su esfuerzo por mejorar los servicios sociales, sin una base económica suficientemente

fuerte, los gobiernos han descuidado los resultados distributivos, la interacción que existe entre el sistema de impuestos y el de prestaciones, y las dificultades para transformar los recursos ingresados en prestación de servicios. La política social británica ha mostrado así mucha más capacidad para afrontar la tarea física de los programas de construcción de viviendas, escuelas y hospitales que los problemas diarios de gestión y funcionamiento. Se pensó que la igualdad de oportunidades aumentaría con el crecimiento de la oferta de servicios, y se hizo caso omiso de los datos que indicaban que la distribución de los subsidios había cambiado poco.

Si en la postguerra hubo un amplio consenso entre laboristas y conservadores sobre los objetivos de la política social, lo cual se reflejó en sus escasas diferencias políticas, a partir de los años 70 la discrepancia se agudizó. Desde 1950 a 1980, durante los 17 años de gobierno conservador hubo un crecimiento anual medio del 2,9 por cien del PNB y de un 4,1 por cien de gasto social; mientras que los 13 años de gobierno laborista vieron un 2 por cien de crecimiento anual del PNB y un 3,5 por cien del gasto social. Los gobiernos conservadores subieron el gasto social más deprisa a pesar de que aparentemente tenían un compromiso ideológico menor; pero los laboristas mantuvieron una distancia mayor entre los dos ritmos de crecimiento siempre a favor del gasto social. Esto se puede apreciar en que durante el gobierno Heath de 1970 a 1974 el gasto social creció en un 5,5 por cien pero fue acompañado por un 4,1 por cien de crecimiento del PNB, mientras que durante el gobierno laborista de 1974 al 1979 el gasto social multiplicó por dos el crecimiento del PNB siendo el primero del 3,2 por cien y el segundo del 1,3 por cien.

El desarrollo del Estado de Bienestar en Gran Bretaña hasta 1980 ha sido producto de factores demográficos, políticos y económicos más que de la competitividad ideológica de los partidos. Después las restricciones presupuestarias del programa de Margaret Thatcher se aplicaron más a los recortes en determinado tipo de servicios que en el gasto social total. Desde 1979 a 1985 el gasto social subió un 12 por cien a pesar de que cayó un 46 por cien en la subvención a las viviendas y se estabilizó en educación. Salud y servicios sociales subió un 19 por cien y la seguridad social un 30 por cien. Esto representaba la continuidad de la dirección que había impulsado el gobierno laborista entre 1974 y 1979, en la que el gasto social subió un 15 por cien. Los conservadores también aumentaron el gasto social por desempleo, puesto que el número de parados aumentó considerablemente, en la reconversión de la mano de obra, en defensa, orden y seguridad ciudadana. Algunos servicios disminuyeron sus partidas presupuestarias como las viviendas subvencionadas por los ayuntamientos, los comedores escolares, etc., pero otros las aumentaron, bien porque eran prioritarios en el programa tory bien porque proporcionaban puestos de trabajo a los profesionales cualificados de las clases medias que eran la clientela electoral de la derecha, como en el caso de la asistencia social o de los servicios de trabajo social.

Durante estos años se ha asistido a un cambio de propuestas dirigidas hacia la "responsabilidad personal", es decir hacia la privatización. En ese sentido ha habido un intento decidido de incrementar el papel y el tamaño del sector privado en los campos de la educación, la vivienda y

la salud. En vivienda se ha animado a los inquilinos de viviendas públicas a comprar sus casas, en educación se ha ofrecido asistencia a las familias con bajos niveles de renta que desean llevar a sus hijos a centros privados y en sanidad se han privatizado determinados servicios hospitalarios auxiliares, así como se ha estimulado la extensión de los seguros sanitarios privados. También se han reducido los poderes y atribuciones de los gobiernos locales y de los sindicatos, a base de establecer topes en la financiación de los servicios que dependen de ellos o reduciendo sus funciones de planificación y dirección. De esta manera los recortes han afectado sobre todo a los servicios que se aplican a las minorías necesitadas (42).

El resultado de todo esto ha sido una estructura de bienestar más discriminatoria basada en la estrategia electoral más que en la pretensión de luchar contra la desigualdad de las rentas. El Estado de Bienestar británico parece encaminarse así a una división en dos sectores de prestaciones. Por un lado un núcleo fuerte de protección personal que cubrirá las necesidades primarias y por otro un sector marginal donde el énfasis se pondrá en la flexibilidad y la elección personal. Las pensiones, sanidad y educación entrarán en el primer apartado, mientras que la vivienda, la asistencia social y otras prestaciones en metálico irán a parar al segundo.

2.5. Los sindicatos: de la participación política a la exclusión

En Gran Bretaña la organización sindical y la contratación colectiva se centran en el sistema productivo y no en el sistema político, es decir que la afiliación sindical no se produce en base a las ideologías políticas sino en base al sector de la producción donde el trabajador se encuentra ubicado. Las divisiones entre las organizaciones sindicales reflejan las divisiones existentes en la estructura de las ocupaciones, en la estructura sectorial y empresarial, antes que en ideologías políticas. La contratación colectiva tiene lugar a nivel empresarial o sectorial, no existen formas de contratación nacional ni con las organizaciones empresariales ni con el sindicato. El TUC (Trade Union Congress) que es la organización sindical estatal no desempeña ningún papel específico en la contratación colectiva, y a excepción de algunos sectores y de algunas categorías de trabajadores no existen normas relativas a salario mínimo o a condiciones de trabajo. La estructura sindical británica es compleja y fragmentada y refleja el proceso de una continua evolución de la organización sindical desde el siglo XIX hasta hoy. Después de la II Guerra Mundial ha sufrido algunos cambios debido sobre todo a: 1) el elevado número de fusiones sindicales que se han producido, de tal manera que en 1983 los sindicatos eran 393 respecto a los 650 de 1960; 2) el nacimiento de nuevos sindicatos principalmente en el sector público; 3) el desarrollo de organizaciones federales entre los sindicatos más importantes y 4) la difusión de la organización de los delegados de empresa (shop steward) (43).

Por otra parte conviene tener presente que el movimiento sindical ha estado siempre vinculado al Partido Laborista, aunque no todos los sindicatos tienen una relación directa con el partido. Debido a esto el movimiento sindical tiene un protagonismo político menos directo del que tienen otros movimientos sindicales en otros países donde presentan programas políticos independientemente de los gobiernos y, en ocasiones, enfrentándose a estos. Su función es más bien la de la contratación colectiva o individual, la defensa de las condiciones de trabajo, etc. Con todo, el peso electoral que tiene el sindicato en el Congreso Anual del partido es igual al número total de inscritos que se han afiliado, lo cual da al sindicato una cuota enorme de votos en el congreso, puesto que la pertenencia a través de la afiliación sindical es mucho mayor que la pertenencia individual a través de las circunscripciones electorales del partido. Esto ha ocurrido así desde su fundación puesto que los sindicatos fueron quienes dieron origen a la formación del partido, pero podemos ver como ejemplo de esta relación la tabla 6, que se refiere a la década de los años setenta (43).

TABLA 6

AFILIACION SINDICAL AL PARTIDO LABORISTA

<u>Año</u>	<u>Inscritos a través del sindicato (miles)</u>	<u>Inscritos a título individual (miles)</u>	<u>TOTAL (miles)</u>	<u>Porcentaje de de los inscritos sindicales sobre el total</u>
1970	5.518,52	690,19	6.222,58	88,69
1975	5.750,04	674,91	6.468,87	88,89
1977	5.913,16	659,74	6.616,27	89,37
1978	6.259,60	675,95	6.990,16	89,55
1980	6.434,66	689,00	7,183,03	89,58

La débil participación del movimiento sindical británico en la política se debe a la opinión generalizada según la cual una participación directa en política constituiría una intromisión de los sindicatos y un abuso de su fuerza social. Esta situación cambió en 1969 cuando los sindicatos obligaron al gobierno laborista a retirar el proyecto de ley de relaciones industriales (Industrial Relations Bill) que trataba de imponer algunas restricciones sobre los derechos sindicales. Posteriormente los sindicatos bloquearon también durante el gobierno conservador de 1971-74 la Industrial Relations Act y provocaron su retirada con la huelga de los mineros. Como durante el gobierno laborista del 1974-79 consiguieron una legislación favorable, y tuvieron éxito en algunas de sus huelgas más importantes, se extendió la opinión de que los sindicatos aunque no imponían la política económica que debía seguir el gobierno sí que eran al menos capaces de evitar toda ingerencia interna en su organización y de no permitir ningún retroceso en los derechos legales que habían conquistado con sus reivindicaciones.

Después del fracaso del gobierno conservador de Heath en 1974 empezó una nueva fase de estrechas relaciones entre el Estado y los sindicatos. La oposición conjunta al gobierno conservador había cicatrizado las divisiones entre los sindicatos y el partido laborista y la unidad se había consolidado con la formación de un Comité de Colaboración. Este resultado dió lugar a una serie de acuerdos sobre el programa económico y social de un futuro gobierno laborista cuya planificación sería más directa que en el período anterior de 1964 a 1970, y asumiría poderes para controlar los precios e intervenir en decisiones de inversión empresarial. El Estado de Bienestar se ampliaría considerablemente y como prioridad inmediata la Ley de Relaciones Industriales sería reemplazada por una legislación acorde con las aspiraciones sindicales. Esta amplia agenda, ya lo hemos visto, pronto adquirió en la opinión popular el nombre de "Contrato Social" (45).

En el terreno de la legislación laboral los objetivos sindicales fueron ampliamente satisfechos. La Ley Sindical y de Relaciones Laborales de 1974 y la Ley de Protección del Empleo de 1975 sustituyeron la legislación de 1971 restaurando las garantías tradicionales para la actividad sindical y reconociendo nuevos derechos para los trabajadores. Todavía fue más importante el conjunto de derechos colectivos contenidos en la legislación como eran: los mecanismos para el reconocimiento de los sindicatos y para castigar a las industrias que no observasen el "nivel general" de condiciones laborales en su empresa; la protección de los sindicalistas contra las represalias y los medios para acceder a la información de la empresa y para obtener tiempo libre para los representantes sindicales en el puesto de trabajo. A su vez la ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974 amplió la legislación anterior y estableció la representación sindical. La Ley contra la discriminación Sexual de 1975 y la de Relaciones Raciales de 1976 permitía las protestas ante un Tribunal Industrial contra la discriminación en el empleo. A nivel del puesto de trabajo también hubo desarrollos normativos paralelos. El proceso de "reforma" articulado por el Informe Donovan, y bien acogido por algunos líderes empresariales, suponía la formalización, racionalización y centralización de los pactos, el ajuste de los controles de la gestión interna, la introducción de un número menor de sistemas salariales, de esquemas de evaluación del puesto de trabajo y de acuerdos sobre la productividad.

Toda esta legislación tuvo un efecto simbólico importante; sin embargo, en la práctica tuvo escasa efectividad, sobre todo después de la destitución de Benn como ministro de Industria y del giro que tuvo que dar el gobierno cuando el control de la economía y la inflación se le escaparon de las manos. Clark y otros autores afirman que los acuerdos de planificación a través de los cuales el gobierno y los sindicatos tenían que ayudar a la producción y a la inversión fueron papel mojado. El National Enterprise

Board, nacido en 1975 para impulsar los sectores más dinámicos de la economía, apenas tenía recursos, el gasto público en bienestar social cayó víctima de la crisis de la libra en 1975, y las presiones directas del Fondo Monetario Internacional sobre la política presupuestaria y los recortes en los programas de gasto social en 1975, condujeron al año siguiente al presupuesto más austero que se había aplicado en mucho tiempo (46).

Recordemos que el gobierno, a su vez, para afrontar la crisis financiera de 1975 introdujo un conjunto de controles salariales, como el límite de 6 libras semanales que los sindicatos admitieron. Al año siguiente se acordó otro tope salarial, fijando el 5 por cien de techo, pero esto hizo que los salarios fuesen cayendo poco a poco por debajo del coste de la vida y entonces los sindicatos rechazaron el límite gubernamental del 10 por cien para el ejercicio 1977-78, aunque no emprendieron acciones reivindicativas contra esta decisión. Pero en 1979 cuando se intentó imponer de nuevo un tope salarial del 5 por cien en las negociaciones con el sector público, esto provocó toda una serie de huelgas, sobre todo en las administraciones locales y la sanidad, que trajeron entre otras consecuencias la caída del gobierno (TABLA 7).

TABLA 7

CONFLICTOS INDUSTRIALES 1970-86 (47)

<u>Año</u>	<u>Conflictos (miles)</u>	<u>Trabajadores en huelga</u>	<u>Jornadas de trabajo perdidas (miles)</u>
1970	3.906	1.793	10.980
1971	2.228	1.171	13.551
1972	2.497	1.722	23.909
1973	2.873	1.513	7.197
1974	2.922	1.622	14.750
1975	2.282	809	6.012

1976	2.034	668	3.284
1977	2.737	1.166	10.142
1978	2.498	1.041	9.405
1979	2.125	4.608	29.474
1980	1.348	834	11.964
1981	1.344	-----	4.266
1982	1.538	-----	5.313
1983	1.364	-----	3.754
1984	1.221	-----	27.135
1985	903	-----	6.402
1986	1.074	-----	1.920

El protagonismo sindical de toda esta década hizo que el número de afiliados al sindicato aumentase en tres millones, alcanzando un techo de 13.4 millones de inscritos. Las principales afiliaciones tuvieron lugar en el sector de los servicios tanto públicos como privados, que fue

también donde más creció la ocupación, y este aumento del poder sindical se debió en parte a las reformas institucionales y a su mayor fuerza contractual (TABLA 8).

TABLA 8
AFILIADOS AL SINDICATO 1970-85 (47)

<u>Año</u>	<u>Total (en miles)</u>	<u>Porcentaje de Sindicalización</u>
1970	11.179	47,7
1971	11.127	47,9
1972	11.349	49,4
1973	11.444	49,2
1974	11.755	50,4
1975	12.026	51,1
1976	13.386	52,2
1977	12.846	53,4
1978	13.112	54,2
1979	13.498	55,6
1980	12.947	52,6
1981	12.106	49,4
1982	11.593	47,9
1983	11.236	46,4
1984	10.994	44,5
1985	10.716	43,0

En el análisis comparado que de manera regular realiza el Centro de Estudios Sociales y Sindicales italiano, Colin Crouch afirma que 1979 fue un año crucial para el cambio de orientación en las relaciones industriales de Gran Bretaña, el momento culminante en el que se pasó del máximo poder y credibilidad, alcanzado por los sindicatos en los últimos años, a la desconfianza y paralización. Es el año en el que la oposición conservadora decidió atacar el poder sindical como parte fundamental de su programa electoral tratando de poner fin al protagonismo político que los sindicatos habían alcanzado. El gobierno conservador interrumpió inmediatamente sus relaciones con el sindicato, suspendió muchas de las conquistas consolidadas en las relaciones

industriales y aprobó una legislación hostil a sus intereses.

Los gobiernos de Margaret Thatcher han aprovechado algunas de las tendencias estructurales de la sociedad, que se han agudizado en la década de los años 80, para reforzar su lucha contra los sindicatos. Estas tendencias son: la segunda recesión mundial, el aumento considerable de la desocupación, que sobrepasó los tres millones en 1982, la crisis de la industria manufacturera, que durante muchos años ha sido crucial para su economía, y la aplicación de las nuevas tecnologías, que han reducido y sobre todo, transformado la mano de obra tradicional. Aun así las tres leyes que se habían aprobado bajo el gobierno laborista (la Trade Union and Labour Relations Act de 1974, la Employment Protection Act de 1975, y la Trade Union and Labour Relations Act de 1976) no fueron abolidas sino sólo debilitadas en muchas de sus disposiciones. Estos cambios se llevaron a cabo con la aprobación de la Employment Act de 1980, donde se contempla que los trabajadores tienen el derecho a no ser expulsados o excluidos por el sindicato en aquellas empresas donde no se aplica el "closed shop" (49). Además nuevos acuerdos de closed shop solo pueden ser introducidos después de una votación en la que el 80 por cien de los trabajadores los aprueben, en caso contrario existe la posibilidad de recurrir por el despido injusto de los trabajadores que no se hayan adherido al sindicato. Los trabajadores que presenten objeción de conciencia respecto

a la afiliación sindical pueden mantener el derecho a la no inscripción. Por otra parte los trabajadores sólo podrán participar en piquetes fuera de su puesto de trabajo, además se imponen acciones legales contra los piquetes indirectos, es decir los que se refieren a las empresas suministradoras de las que están en huelga.

Con estas medidas el número de conflictos bajó radicalmente, puesto que en los momentos de recesión la mayor parte de los conflictos se deben no tanto a las reivindicaciones salariales de los trabajadores y a las condiciones de trabajo cuanto a la resistencia a los cambios en la organización del trabajo o a la reducción de la mano de obra impuesta por los empresarios. Ahora bien, aunque la conflictividad bajó sustancialmente, sin embargo el número de trabajadores involucrados y el de jornadas perdidas ha permanecido relativamente elevado (tabla 7).

Con todo las principales huelgas, que han movilizado al sector público, la siderurgia, la sanidad, ferrocarriles y sobre todo la de los mineros de 1984-85, se han resuelto en fracasos para la clase obrera.

También han descendido sustancialmente los afiliados al sindicato, descenso que se ha prolongado a lo largo de toda la década situándolos en la cuota de afiliación que tenían en los años 60, aunque es cierto que esta caída se ha producido, sobre todo, entre la mano de obra no cualificada, que es la que más ha sufrido las consecuencias del paro. A su vez ha aumentado la afiliación entre los trabajadores empleados en los servicios y entre los profesionales.

Ha sido sobre todo en el plano legislativo donde los gobiernos Thatcher han tomado la iniciativa para debilitar

la estructura de los sindicatos. Las tres leyes de empleo de 1980, 82 y 84 constituyeron un cambio radical en la medida en que: 1) establecieron un nuevo conjunto de derechos individuales sobre el empleo para los no afiliados al sindicato en situación de "closed shop"; 2) estrecharon los límites legales de la acción huelguística; 3) aumentaron las sanciones económicas a los sindicatos que se extralimitaran en sus atribuciones; 4) introdujeron la votación obligatoria y secreta para los afiliados sindicales en un conjunto de temas cruciales como son elegir a los líderes sindicales o convocar huelgas; 5) eliminaron las ayudas para complementar los convenios colectivos, etc. (50). La nueva orientación tuvo su punto culminante en la huelga minera que duró desde 1984 a 1985, y se prolongó con otras medidas como la de 1987, en que el gobierno forzó una considerable disminución de las funciones y protagonismo del Consejo Nacional para el Desarrollo Económico, donde tanto los sindicatos como la patronal habían participado tradicionalmente.

En este marco el desafío más directo y prolongado a la política económica del thatcherismo provino del sector minero cuya huelga fue seguida con detenimiento por todas las fuerzas políticas y sociales del país y a su alrededor suscitó una serie de problemas que iban desde los derechos civiles al uso de los servicios de seguridad del Estado, desde la legitimidad de los piquetes hasta la solidaridad sindical. El retorno a las minas en marzo de 1985, sin haber obtenido ninguna de las reivindicaciones, y la división del propio sindicato minero no sólo supuso una gran victoria moral del gobierno sino la legitimación de los medios que había utilizado para combatir la huelga, como fueron la negación del diálogo y la negociación o el uso de la fuerza pública (51).

El resultado de estas luchas reivindicativas, la imposición de un nuevo y restrictivo marco legal y, en general, la actitud del gobierno respecto a los sindicatos han conducido al debilitamiento y retraimiento de éstos. Crouch ha resumido en cinco puntos la estrategia gubernamental encaminada a obtener estos resultados; 1) acciones destinadas a debilitar el poder de los sindicatos o de los trabajadores en relación con los empresarios, como son la imposición de límites salariales o la legislación que obstaculiza la acción sindical; 2) medidas legales para incrementar el poder de los afiliados a los sindicatos y de los trabajadores, impuestas, en general, contra la estructura sindical, como son el derecho de los trabajadores a no afiliarse a los sindicatos donde exista el "closed shop", o la obligatoriedad de la votación secreta en acciones reivindicativas decisivas; 3) acciones para reducir la institucionalización del conflicto y disminuir el conjunto de medidas que en las relaciones industriales estaban sujetas a acuerdos regulatorios, de esta manera algunas instituciones constituidas para asegurar los índices salariales y las condiciones de trabajo sin recurrir al conflicto, especialmente en los servicios públicos, fueron abolidas, como el Standing Commission on Pay Comparability, o el Pay Research Unity, y; 4) acciones destinadas a reducir la legitimidad de los sindicatos como organizaciones integradas en la vida política nacional (52).

Ahora bien la crisis de los sindicatos no se debió solamente al fracaso de la política laborista ni al asalto ideológico de los conservadores, sino que estuvo condicionada fundamentalmente por factores estructurales, como el desempleo que llevó a un descenso en la militancia, la innovación tecnológica que provocó un cambio en la estructura del empleo que perjudicó a los sectores sindicalizados, y el aumento de las fuerzas del trabajo que dejaron al sindicato con la intención de representar intereses sectoriales.

La estrategia sindical para afrontar estos problemas en los próximos años ha sido motivo de reflexión y polémica en los sucesivos congresos y reuniones sindicales. En general existe cierta coincidencia en subrayar la importancia de: a) la reducción y reorganización del horario laboral, que podrían ayudar en la lucha contra el desempleo, b) reivindicar una mayor influencia sobre las inversiones y la producción, (algunas empresas reconocen ya la necesidad de implicar a los trabajadores en sus objetivos de su producción), y; c) el fomento de la formación y el reciclaje que haría que los trabajadores fuesen menos vulnerables cuando perdiesen sus puestos de trabajo.

Los sindicatos, además, en sus consecutivos congresos han exigido la derogación de las leyes que coartan sus actividades y libertades, acusando al partido laborista de falta de sensibilidad sindical por no recoger en su programa muchas de sus reivindicaciones. Por su parte el laborismo está de acuerdo en eliminar los elementos más draconianos de las leyes antisindicales conservadores, pero advirtiéndole que esto no ha de servir para facilitar actividades sindicales como las que sucedieron en el invierno de 1979, cuyas consecuencias todavía parecen pesar en la sociedad británica.

2.6. La reconstrucción del Laborismo

La transformación del Partido Laborista tuvo lugar, en gran medida, después de su derrota en las elecciones generales de 1987. No obstante, muchos de los avances que se hicieron entonces estuvieron basados en las propuestas y los errores que su secretario general Neil Kinnock había realizado en los cuatro años precedentes.

Kinnock (53) presionó al partido para avanzar hacia una fórmula democrática interna en la que cada afiliado

contase solamente con un voto para la elección de los candidatos parlamentarios, lo cual suponía un cambio importante para un partido que estaba basado en un modelo de toma de decisiones con representantes y delegados. Esta presión tropezó con el grupo de intereses más amenazado por el cambio , los sindicatos , de tal manera que sus votos junto con la presión ejercida por otros cuadros infligieron una seria derrota a la propuesta del secretario general, con quien llegaron al compromiso de establecer un colegio electoral en cada distrito a fin de conservar la voz sindical en la política de los delegados.

No obstante desde 1983 la dirección del partido tuvo una doble estrategia para afrontar la reorganización interna. En primer lugar la de reducir el poder de los cuadros del partido en relación a los militantes, sustituyendo la democracia de delegados por la democracia participativa y, en segundo lugar, reducir también el peso relativo del "voto en bloque" de los afiliados sindicales en el congreso anual del partido. Esta doble estrategia terminó poco a poco con el peso abrumador que ejercían en la formación política tanto los sindicatos como los sectores más radicalizados, lo que contribuyó a modernizar una estructura que había permanecido inalterable desde 1918.

Por otra parte, después de las elecciones de 1983 con el laborismo estando en minoría en el Parlamento y una dirección que pretendía cambiar la relación de fuerzas dentro del partido, la izquierda más radicalizada se refugió en los gobiernos locales que ofrecían una oportunidad para responder a los ataques del thatcherismo y a las propuestas de Kinnock.

A comienzos de los años 80 había más de 150 municipios bajo control laborista, con más de 9000 concejales. Esto incluía prácticamente todas las poblaciones más importantes - Londres, Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, Sheffield, Newcastle, Leeds, Edinburgh y Bradford. Aunque algunas autoridades estaban bajo el control del ala derecha del laborismo, surgió una influyente izquierda en algunas

zonas como Liverpool, Manchester, Sheffield y Edinburgh. No obstante la joya de la corona de los "ayuntamientos socialistas" era el Greater London Council (GLC) en el que el partido obtuvo el control en 1981 y eligió a Ken Livingstone como líder del grupo laborista (54).

La determinación conservadora de recortar el gasto público tuvo como efecto una constante reducción de la subvención del gobierno a los ayuntamientos -el Rate Support Grant-. El gobierno impuso entonces una limitación a las contribuciones municipales, limitando así la capacidad de unos ayuntamientos específicos (mayoritariamente los controlados por el laborismo), para obtener recursos por medio de las tasas.

Los ayuntamientos laboristas tuvieron que aplicar la política de "Los tres noes" : no a los recortes, no a la subida de los alquileres, no a la subida de las tasas. Sin embargo a medida que el gobierno apretaba los tornillos, los laboristas no pudieron sostener sus declaraciones radicales con hechos. Elevaron las tasas, elevaron la renta y llevaron a cabo recortes.

Durante algunos años los ayuntamientos laboristas declararon su intención de lucha, aun cuando esto condujera a infringir la ley. El Congreso Laborista de 1983 hizo un llamamiento "a todas las autoridades locales laboristas a resistir colectivamente a todas las limitaciones del gasto impuestas a las autoridades locales....utilizando para ello la fuerza política y sindical del movimiento laborista ". El congreso de ayuntamientos laboristas de julio de 1984 añadió nuevas resoluciones a fin de desafiar las limitaciones a las contribuciones municipales (55).

Pero Kinnock procuró no vincularse a esta política. Defendió que los ayuntamientos laboristas deberían permanecer en el poder y actuar legalmente a fin de proteger los servicios. El mismo Ken Livingstone prometió apoyar la posición de Kinnock en febrero de 1985, y al mes siguiente promovió el hundimiento de la política del GLC de desafiar la ley conservadora sobre la limitación de las contribuciones. No fué ninguna casualidad que esto

coincidiera con la derrota de la huelga de los mineros. La semana que los mineros regresaron a su trabajo, la lucha de los ayuntamientos de izquierda también se hundió. El GLC abandonó su postura de enfrentamientos y los otros tardaron pocas semanas en hacer lo mismo.

Nunca se entendió que el gobierno local es impotente ante el gobierno central a no ser que el poder colectivo de los trabajadores pueda respaldarlo. Los ayuntamientos no pudieron ni siquiera mantener los logros reformistas del pasado frente a los ataques de los tories. De ese modo, de 244.916 viviendas construidas en 1953, el número bajó a 151.824 en 1976, a 86.194 en 1979 y a 17200 en 1986.

La derrota electoral de 1987 obligó a la dirección del partido a un replanteamiento de su política. En el congreso del partido de 1987 se inició una revisión del programa político : se establecieron siete grupos de revisión que incluían a miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del Gabinete en la sombra. Los informes de estos grupos de revisión conformaron el informe final ,Meet the Challenge, Make the Change :a new agenda for Britain, que fué aprobado en el congreso del partido de 1989 (56).

Este nuevo documento político ha sido descrito como la última sombra del antiguo bagaje ideológico del laborismo : su "Bad Godesberg", treinta años después del SPD.

Las presiones electorales jugaron un papel muy significativo para que el partido abandonase la política nacionalizadora, sindicalista, antieuropea y antinorteamericana de los años ochenta. Por otra parte, las presiones institucionales externas e internas le llevaron a abandonar su política laborista nacional al viejo estilo.

El laborismo estaba deseando incluso abrazar algunas leyes conservadoras antisindicales. El documento del Partido Laborista y el TUC de septiembre de 1986, **People at Work :New Rights, New responsibilities,** aceptaban las votaciones impuestas por los tories antes de las huelgas y a fin de elegir los dirigentes sindicales (57). De esta manera los derechos individuales de los sindicalistas en el lugar de trabajo serán protegidos, pero no existe previsión

para la restauración de todos aquellos derechos colectivos sindicales suspendidos desde 1979.

El Congreso Laborista de Brighton, celebrado en octubre de 1989 saldó los elementos más anacrónicos del laborismo y de los sindicatos y terminó la reconstrucción de un alto grado de consenso interno. Además se aprobó un programa a largo plazo en el que se introducían importantes modificaciones en la política económica y se sentaban las bases de una nueva política de defensa. Esta renovación pasó su revalida en las inmediatas elecciones que se celebraron para el parlamento europeo, en las que Kinnock aventajó en más de quince puntos a los conservadores.

Dos hechos positivos para el laborismo han despejado recientemente algunos obstáculos de su futuro: la disolución del Partido Socialdemócrata (SDP) de David Owen, que se produce a principios de junio de 1990, y la dimisión de Margaret Thatcher en noviembre de ese mismo año. Owen reconoció en el acto de disolución de su partido que los laboristas, al introducir cambios significativos en su programa, se habían aproximado a la socialdemocracia y que por esa razón el SDP no debería avergonzarse de su fracaso. Su fracaso constituía una victoria histórica.

Por otra parte, el abandono del poder de Margaret Thatcher con el fin de recuperar expectativas electorales para su partido parecía abrir también mejores perspectivas para la unidad europea. En realidad Thatcher se benefició del crecimiento que experimentaron todos los países de la OCDE en la década de los 80, pero aun así su política económica fue poco brillante puesto que cuando dejó el gobierno la inflación era tan alta como cuando accedió a él, y el país volvía a experimentar un crecimiento negativo de tal manera que en términos relativos el Reino Unido ha retrocedido en esos años aún más que Europa.

En este marco su sucesor John Major se ha de enfrentar en las próximas elecciones generales de 1992 a un laborismo más europeizado y con un programa moderno ; un nuevo modelo de partido que aparece mucho más competente y seguro en su

dirección, más unificado y decidido a ganar la próxima convocatoria electoral.

III. EL PARTIDO SOCIALISTA FRANCES

3.1. Mitterrand y la batalla por la hegemonía

El Partido Socialista Francés (PS) comenzó a tener una presencia significativa en la escena política a comienzos de los años 70 y sobre todo después del congreso de Epinay. Hasta esa fecha se había caracterizado en la historia por cierta rigidez ideológica, que le acompañó hasta el acceso al gobierno, por la división entre sus líderes, consolidada en un fuerte fraccionalismo y por su rivalidad con el Partido Comunista, característica que compartía con todos los partidos socialistas del Sur de Europa (1), y que le obligaba a formar gobiernos de coalición con los partidos centristas.

Antes de llegar a estas fechas, y en su larga marcha hacia el poder y la unidad del partido (2), François Mitterrand ya había lanzado su candidatura en 1965, como líder de la izquierda francesa, ante la impotencia de Gaston Defferre para concitar la unidad de las fuerzas de izquierda. Mitterrand fundó la FGDS (Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste), una asociación compuesta por la SFIO (Section Française de l'Internationale Ouvrière, creada en 1905), el partido Radical, la CIR (Convention des Institutions Républicaines) y otros pequeños grupos, con la finalidad de presentar una fuerza común en el espectro de la izquierda no comunista, y formó incluso un gobierno en la sombra con los líderes de todas estas facciones. Al año siguiente llegó a un acuerdo con el Partido Comunista

Francés (PCF) para presentar una estrategia común ante las elecciones de 1967. Esta coalición alcanzó 193 escaños que junto a los 44 de los partidos de centro le quitaron la mayoría absoluta al general De Gaulle.

Con esta política de hábil negociador Mitterrand consiguió situarse como el líder de la oposición no comunista y como mediador de los diversos grupos y corrientes socialistas (3). La crisis del 68 acabó momentáneamente con todos estos intentos unitarios de la izquierda socialista y con la dimisión de Mitterrand como presidente de la FGDS. Los congresos posteriores hasta el de 1971 en Epinay se caracterizaron por las profundas divisiones entre los líderes socialistas, sus antagonismos personales y las diversas posturas que mantenían respecto a su colaboración con el PCF, todo lo cual reforzó la estrategia unitaria de Mitterrand cuya propuesta de integración a finales de 1970 propició el congreso de la unidad.

Durante todos estos años, en que se fraguaba la unidad de los socialistas, la sociedad francesa experimentó transformaciones estructurales de notable importancia que incidieron en el cambio posterior de la estructura política. Se produjo un rápido proceso de industrialización que conllevó una importante disminución del sector primario y la expansión de todo el sistema burocrático y de servicios. Las nuevas tecnologías minaron el sistema productivo tradicional (carbón, acero y textiles) y se desarrollaron nuevas industrias como la química y la electrónica que alcanzaron un papel protagonista. Los sindicatos no se contentaron con reivindicaciones exclusivamente económicas y reclamaron la participación en la gestión de las empresas. Todo esto cambió la estructura ocupacional, la composición de la clase trabajadora y su actividad sindical (4).

Los partidos de izquierda, su ideología, composición y militancia se vieron afectados por estos cambios. En 1969 cuarenta y siete secretarios federales del partido socialista fueron sustituidos por otros pertenecientes a generaciones más jóvenes, lo que dió paso a una transformación generacional de suma importancia. A esta nueva configuración social contribuyó también el nacimiento de los nuevos movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo y el regionalismo, cuyas reivindicaciones se integraron en los programas del partido socialista a fin de captar nuevos afiliados y grupos de electores.

El Congreso de Epinay (1971) supuso para el partido socialista un giro radical ya que consiguió la unidad anhelada durante tantos años, completó el proceso de renovación e instaló a Mitterrand en el liderazgo. Los congresistas tuvieron que escoger entre el lento progreso propuesto por Savary, la unidad de acción con el PCF propuesta por el CERES (Centre d'Etudes de Recherches et Education Socialistes) y la moción de Mitterrand sobre el fortalecimiento de la unidad y la renovación del partido. La batalla comenzó con el método de elección para los órganos de dirección del partido y al final se llegó al acuerdo común de que las facciones gozarían de representación proporcional con un umbral mínimo del 5 por cien lo cual permitió formar una coalición entre el CERES, Mitterrand y las dos federaciones más grandes de Savary. Esta nueva mayoría se comprometió a llevar adelante dos acciones; formular un programa socialista que debería confrontarse con el del PCF e iniciar conversaciones para un programa gubernamental conjunto con los comunistas. Mitterrand asumió así la secretaría con una composición muy heterogénea y una representación minoritaria de sus partidarios. Pero inmediatamente se establecieron comités de trabajo para preparar el programa y revitalizar el partido (5).

Bajo la orientación del CERES que coordinó los grupos de trabajo el documento resultante contenía proposiciones muy izquierdistas y un vocabulario claramente marxista. La autogestión empresarial, el neutralismo en defensa y las nacionalizaciones fueron algunos de los puntos a los que se opusieron otros sectores del partido más moderados. También se reconocieron las tendencias y corrientes organizadas y se aceptó la representación proporcional de dichos grupos en todos los niveles de gobierno del partido, tratando así de distanciarse de lo que había sido el estancamiento interno y el monolitismo histórico de la SFIO de Guy Mollet (6). Quienes estaban más próximos al CERES como Chevénement y Poperey querían conservar la tradición estatalista de la izquierda, mientras que los más próximos a la antigua SFIO, como Mauroy, tenían una predisposición mayor hacia la descentralización y la participación. Esta diversidad ideológica rozaba algunas veces la confusión ya que las diversas corrientes daban significados distintos a aspectos muy concretos del programa como la autogestión o la descentralización. Pero a su vez estas sensibilidades tan diversas de las distintas corrientes suponían un enriquecimiento interno y eran una ventaja para la captación de militantes y electores muy diversos.

Algunos aspectos de este programa fueron modificados posteriormente, pero el documento sirvió como base para las futuras conversaciones con el PCF que trataba de llegar a un Programa Común de unión de la izquierda como preparación para las elecciones parlamentarias de 1973.

El Programa Común fue negociado y acordado en dos meses. En las negociaciones se pusieron de acuerdo sobre las nacionalizaciones, la

democracia industrial y la política fiscal, pero algunos sectores no aceptaron la disciplina electoral de la izquierda que suponía votar a los comunistas en la segunda vuelta. Con respecto a la política de defensa hubo acuerdo unánime sobre el desarme tanto del Pacto de Varsovia como de la OTAN, y sobre la no integración de Francia en la estructura militar de ésta última, aunque tampoco se proponía una retirada de la Alianza Atlántica, con lo cual se llegaba a una formulación muy ambigua. Se reconocía la Comunidad Europea y el Tratado de Roma, pero se hacía una llamada a su democratización, a que contemplase las demandas de los trabajadores y a la libertad de acción para un posible gobierno francés de izquierda. En cuanto a la política de nacionalizaciones las diferencias entre comunistas y socialistas se referían a la mayor o menor amplitud de la lista de empresas que deberían nacionalizarse, con el consiguiente temor socialista de que esto repercutiese excesivamente en el electorado (7). Con este programa la izquierda obtuvo un 45 por cien de los votos en las elecciones de 1973, lo que suponía un avance respecto al 40 por cien que había obtenido en 1968. En estas elecciones el Partido Comunista mantuvo su posición dominante pero los socialistas detuvieron su caída llegando a obtener más de cuatro millones y medio de votos.

En el siguiente congreso socialista, celebrado en Grenoble en 1973 quedaron establecidas definitivamente las tres tendencias o corrientes de opinión dentro del partido. Por un lado estaban los seguidores de Mollet que controlaban el 13 por cien de los votos, por otro la amplia corriente mitterrandista con un 60 por cien de la militancia y por último la izquierda autogestionaria del CERES con el 27 por cien restante. En estas circunstancias era evidente el

predominio del sector mayoritario liderado por Mitterrand. A su vez el PCF, encabezado desde 1970 por Georges Marchais, aun manteniendo una notable rigidez ideológica, comenzó a distanciarse de Moscú muy en consonancia con la línea del Partido Comunista Italiano e influenciado por los cambios que se estaban produciendo en la escena internacional, en especial respecto a la distensión Este-Oeste, las desavenencias chino-soviéticas y los acontecimientos de Checoslovaquia.

Las elecciones presidenciales de 1974 se presentaban así como una ocasión excelente par revalidar la unidad de la izquierda, aumentar su credibilidad y alzarse con la victoria para la próxima legislatura. Por su parte la derecha se aglutinó alrededor de Giscard d'Estaing que era el candidato representante de la coalición más numerosa y quizá el más preparado en ese momento para afrontar la situación económica heredada del Presidente Pompidou; una economía con serios problemas de paro y una inflación del 17 por cien. La campaña electoral fue muy dura y los candidatos lucharon por una presidencia cargada de grandes expectativas entre la población, como demostró el grado de participación que alcanzó el 86'7 por cien del electorado y lo apretado de la victoria un 50,8 por cien para Giscard y un 49,2 por cien para Mitterrand.

El período posterior hasta las elecciones a la Asamblea Nacional de 1978 se mostró especialmente difícil tanto para la derecha en el poder como para la coalición de izquierdas. El presidente Giscard lanzó una serie de medidas reformistas de talante progresista, como la de rebajar la edad del voto a los 18 años, la despenalización del aborto durante las diez primeras semanas del embarazo, la aceptación del divorcio sobre bases de mutuo consenso y la prohibición de la discriminación por razones de sexo; además
aumentó

los subsidios familiares, mejoró las disposiciones que afectaban a los disminuidos físicos, amplió la red de asistencia hospitalaria, planificó adelantar la edad de jubilación a los sesenta años con pensión completa, etc. Para reducir la inflación se presentaron presupuestos de carácter restrictivo, con lo cual aumentó el paro y la economía comenzó a experimentar efectos negativos. Estas medidas económico-sociales junto a otras decisiones de marcado carácter político, como la decisión presidencial de apoyar las elecciones directas al Parlamento Europeo, chocaron con la línea gaullista de su primer ministro Chirac, que dimitió en 1976 y fue sustituido por Raymond Barre, un economista de tendencia neoliberal que había sido vicepresidente de la Comisión Europea. Las primeras medidas del plan Barre, que pretendían reducir la inflación en un año, fueron la congelación de los precios, la reducción del IVA, el aumento de los impuestos y de los tipos de interés, y la disminución de la masa monetaria, lo que llevó a un aumento del desempleo.

A su vez las relaciones en el seno de la izquierda fueron muy conflictivas entre 1974 y 1978 debido a la rivalidad competitiva de socialistas y comunistas que luchaban por obtener la hegemonía en el ámbito de la izquierda tanto desde el punto de vista electoral como ideológico. Los grandes beneficiarios de esta alianza de la izquierda iban a ser los socialistas, tanto por el número de militantes como de votantes, mientras que los comunistas permanecerían en principio más estancados y poco a poco perderían peso a favor de sus aliados. Esta realidad no correspondía a las expectativas que se generaron desde un principio, sobre todo por parte del PCF. Los comunistas esperaban que su política de apertura, su tradicional unidad y

su enraizada militancia, les daría un papel protagonista en la coalición y, a su vez, esto ampliaría su base electoral. Sin embargo los acontecimientos demostraron todo lo contrario, ya que el liderazgo de Mitterrand, por una parte, y el impacto de la unidad socialista, por otra, fueron elementos clave para arrastrar militancia comunista y electores hacia el PS, de tal manera que a comienzos de 1978 los socialistas aventajaban ya en un 7 por cien al número de electores que apoyaban al PCF, arrebatándole así la primacía.

Este cambio en la balanza electoral de la izquierda había venido manifestándose poco a poco en las elecciones locales de 1976 y 1977, puesto que un electorado más joven y tecnocrático iba incorporándose a las distintas convocatorias, favoreciendo así la situación política de los socialistas.

Para preparar las elecciones municipales de 1977 los socialistas decidieron rechazar todas las alianzas que no fuesen de izquierdas y exigieron a los comunistas un compromiso vinculante para votar los presupuestos anuales de los ayuntamientos, vista la experiencia anterior de 1975 en la que el PCF rechazó votar determinados presupuestos socialistas. El claro bipartidismo con que se afrontaron estas elecciones benefició a la unidad de la izquierda y trajo considerables pérdidas a la derecha, que sucumbió en la mitad de las ciudades con más de 30.000 habitantes, en las que había dominado desde 1971. Con este impulso, los socialistas, y sobre todo la corriente principal de Mitterrand, se aprestaron a renegociar con más fuerza el Programa Común, en el que veían propuestas demasiado radicales y poco actualizadas, y a su vez pretendían consolidar su unidad en el próximo congreso de Nantes rechazando la vuelta del

CERES a la Secretaria General. La estrategia de Mitterrand consistía en dismantlar los grupos de izquierda, que se constituían como organizaciones internas dentro del partido y, al mismo tiempo, aprobar un programa más moderado que permitiese al PS abrir sus puertas a sectores del electorado vinculados a las clases medias y a los electores de centro.

El conflicto entre comunistas y socialistas se intensificó y el PCF denunció el deslizamiento reformista de los socialistas. Los comunistas querían incluir en la revisión del Programa Común muchas de sus propuestas políticas, en especial las que se referían al aumento del salario mínimo y a la nacionalización de 729 empresas, siguiendo las demandas de la CGT. Entre estas peticiones maximalistas del PCF y las minimalistas del PS la distancia era muy grande y además el desacuerdo alcanzaba también a otros aspectos de la política social y de defensa. Por otra parte para aumentar su fuerza en las empresas los comunistas proponían la representación obrera en los Consejos de Administración de las industrias nacionalizadas, cuyo número era considerable, pero para la mayor parte de los socialistas esta propuesta era excesiva. Por último en defensa existía también un gran desacuerdo ya que los socialistas deseaban permanecer en la Alianza Atlántica. De esta manera, las diferencias de criterio que se mantuvieron respecto al Programa Común acabaron con cinco años de unión de la izquierda que se rompía con un año de antelación a los comicios electorales a la Asamblea Nacional de 1978 (8).

Esta división de la izquierda junto a la buena imagen que dió el Presidente de la República en la campaña electoral de la derecha y sobre todo el miedo a la

inestabilidad política de muchos electores que temían a los candidatos comunistas dio finalmente la victoria a la coalición de derechas, que a pesar de perder algunos escaños mantuvo una holgada mayoría en la Asamblea Nacional (Tabla 1) (9).

TABLA 1
ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL DE 1978 (1ª vuelta)

	<u>Votos</u>	<u>Porcentaje de votos</u>	<u>Escaños</u>
UDF (Giscardianos)	5.74 m	20.4	138
RPR (Gaullistas)	6.30 m	22.4	153
Socialistas+MRG	7.02 m	25.0	114
Comunistas	5.79 m	20.6	86
Extrema Derecha	0.91 m	3.3	----
Extrema Izquierda	0.91 m	3.3	----
Otras Izquierdas	0.81 m	2.9	----
Ecologistas	0.61 m	2.2	----

Aun así los votos socialistas aumentaron llegando al 22,5 por cien, lo cual supuso un significativo avance electoral, sobre todo en el marco de la izquierda, ya que el PS había sobrepasado por primera vez desde 1936 al PCF que obtuvo el 20.6 por cien, constituyéndose el PS en el partido más importante de la izquierda francesa, lo cual iba a tener importantes repercusiones para el inmediato futuro.

Esta segunda victoria de Giscard d'Estaing terminó con todo su programa reformista, comenzando a imponer restricciones en el gasto público y estimulando a la empresa francesa para que cortase su dependencia estatal a fin de ganar eficiencia y competitividad para afrontar los mercados

internacionales. En ese marco, la segunda fase del Plan Barre trataba de eliminar el control de los precios industriales introduciendo una política económica de mayor *laissez-faire*, a fin de que el aumento de los beneficios potenciase las inversiones aplicadas a la modernización empresarial. A su vez el Estado no abandonó determinadas líneas de planificación como en el caso de las telecomunicaciones, las centrales nucleares y los centros productivos de alta tecnología, a los que suministró abundantes fondos de inversión. Esta política tuvo, en un primer momento, efectos positivos ya que el PNB creció un 3,5 por cien en 1978 mientras la inflación se mantenía estable en un 9,5 por cien. El tipo de cambio se estabilizó y la balanza comercial volvió al superávit. Pero con motivo de la guerra Irán-Irak que cuadruplicó los precios del petróleo, la situación francesa empeoró ostensiblemente aumentando la tasa de inflación, el déficit de la balanza comercial y el desempleo, que pasó de 1.3 millones de parados en 1978 a 1.69 millones a comienzos de 1981 (10).

Esta severa recesión acabó con la imagen brillante de gestor económico y administrativo que había acompañado a Giscard. Si a esto añadimos la promulgación de algunas leyes controvertidas como la de "Libertad y Seguridad" de 1980, que endureció los poderes de la policía, y la crítica que los medios de comunicación difundieron sobre la imagen cada vez más autoritaria del Presidente de la República, se puede entender cómo aumentó la división entre los distintos grupos de la derecha. De ahí que algunas de las principales figuras políticas conservadoras y del centro comenzaran a negarle su apoyo. El partido radical de Servan-Schreiber le abandonó a causa de su estrategia

económica y social, Chirac después de la primera vuelta aconsejó a sus partidarios el voto en conciencia y otros grupos más pequeños, como los agricultores, también le abandonaron por sentirse marginados de sus preferencias políticas.

Los socialistas por su parte, después de las elecciones parlamentarias de 1978 habían afrontado sus divisiones internas en el Congreso de Metz (1979), donde se puso de manifiesto por primera vez el enfrentamiento entre las posiciones de Mitterrand y las de Rocard, que había emergido en el congreso anterior como líder de la corriente más moderada del partido. En esta ocasión la novedad significativa era que el liderazgo de Mitterrand en lugar de verse amenazado desde la izquierda, por las posiciones maximalistas del CERES como había ocurrido en 1975-77, se vió desafiado por el "minimalismo" de la derecha. Michel Rocard atacó la planificación centralizada y las nacionalizaciones haciendo una apología de la economía mixta y pidiendo una dirección colegiada donde todas las corrientes estuviesen representadas. Todas estas proposiciones fueron rechazadas por la mayoría mitterrandista que incorporó al secretariado a la nueva generación del CERES (11). Esta derrota condicionó la retirada de Rocard, un año más tarde, como candidato a la presidencia de la República.

Para preparar las elecciones presidenciales de 1981 Mitterrand encargó la redacción del programa al CERES, que preconizaba un relanzamiento keynesiano de la economía esperando que la crisis internacional terminase en poco tiempo e insistiendo menos sobre un programa económico detallado y más sobre un proyecto de sociedad global. Contra este programa reaccionó Rocard con una contrapropuesta

mucho más próxima a las tesis de la CFDT, pero será finalmente Mitterrand quien realizará una síntesis de las diversas tendencias y cuando resulta elegido candidato en enero de 1981 promueve una redacción del programa en proposiciones muy concretas, convirtiéndolo en el proyecto de "las 110 proposiciones para Francia" que fue respaldado por el 85 por cien de los militantes. El programa se fija como objetivo el relanzamiento de la economía con los instrumentos keynesianos clásicos; obras públicas, equipamientos colectivos, viviendas sociales, creación de 210.000 puestos de trabajo en el sector público, ayudas puntuales a la inversión, control de las importaciones, nacionalización de nueve grandes grupos industriales, aumento del salario mínimo, impuesto sobre la herencia, bonificación del tipo de interés para las empresas que se encuentren en dificultades económicas, disminución del horario laboral, aumento del periodo vacacional a cinco semanas(12). Aun así, este manifiesto electoral era algo más moderado que los programas anteriores.

Con este programa, al que se unía una política más liberal en el tratamiento de la sociedad civil y más independiente de los americanos en política exterior, la batalla para la presidencia se presentaba difícil dada la división que existía tanto en la derecha como en la izquierda, con la única pero sustancial diferencia de que el PCF de Marchais criticó duramente a Mitterrand en la primera vuelta pero le apoyó electoralmente en la segunda, mientras que algunos sectores de la derecha no apoyaron a Giscard en la segunda vuelta. Además de este apoyo decisivo los socialistas se beneficiaron de los nuevos electores que podían ejercer su voto a partir de los 18 años, del millón

de votos ecologistas y de muchos votantes de centro que esta vez se decidieron por Mitterrand, quien encarnaba la reforma sin revolución y se presentaba en la campaña electoral como "la fuerza tranquila". De esta manera en la primera vuelta quedaron eliminados Chirac y Marchais, quien sufrió una fuerte derrota y muchos de cuyos votos huyeron hacia el candidato socialista, que en la segunda vuelta, con una participación del 85,9 por cien ganó por 15,7 millones de votos (51,8 por cien) contra 14,6 millones que recogió Giscard (48,2 por cien).

Después de la victoria socialista, aunque Mitterrand había declarado previamente que si era elegido Presidente disolvería la Asamblea Nacional y convocaría nuevas elecciones generales, aprovechó el abatimiento de la derecha para establecer un gobierno provisional de coalición de izquierdas, presidido por Mauroy, y lanzar las primeras medidas sociales que contribuirían aún más al relanzamiento de una campaña electoral en la que el PS deseaba obtener la mayoría más amplia posible para poder gobernar sin alianzas. Así, aumentó en un 20 por cien los fondos para bienestar social y en un 10 por cien el salario mínimo interprofesional, apoyó la creación de 50.000 puestos de trabajo y tomó otras medidas populares con el fin de atraer todavía más a la clase trabajadora, a los votantes del centro moderado y a los grupos que se habían considerado tradicionalmente marginados. En este ambiente de euforia, y teniendo controlados los resortes económicos del poder y los ambientes sindicales, las elecciones generales de junio reafirmaron la victoria socialista en la Asamblea Nacional donde alcanzó un 37,8 por cien frente a un 16 por cien de los comunistas (TABLA 2) (13)

TABLA2

ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL JUNIO 1981 (1ªvuelta)

	<u>VOTOS</u>	<u>PORCENTAJE</u>	<u>ESCAÑOS</u>
Socialistas + MRG	9,38 m	37,8	286
RPR (Gaullistas)	5,19 m	20,9	83
UDF (Giscardianos)	4,77 m	19,2	61
Comunistas	4,00 m	16,1	44
Extrema Izquierda	0,33 m	1,3	----
Extrema Derecha	0,75 m	3,0	----
Otras Izquierdas	0,14 m	0,6	----
Ecologistas	0,27 m	1,1	----

En estas elecciones el partido socialista obtenía la mayoría absoluta mientras los comunistas sufrían una gran derrota y pasaban a ser la fuerza secundaria en el espectro político de la izquierda. Los cambios en la estructura social francesa no habían ayudado al partido que siempre se había considerado el representante de la clase obrera, pero a su vez los líderes comunistas no habían tenido la capacidad de renovación demostrada por sus vecinos italianos. Así, en los hechos más recientes de la escena internacional, no habían rechazado la invasión soviética de Afganistán ni habían apoyado las reivindicaciones del sindicato polaco Solidaridad. Esto, junto a las medidas que el PCF había pedido recientemente contra los trabajadores inmigrantes sembró la disensión dentro de sus filas y la demoralización general.

La rivalidad electoral que durante tantos años había fragmentado a la izquierda en beneficio de la derecha se zanjó con el predominio de la izquierda moderada, que en

adelante hegemonizará todo el proyecto de izquierdas. A su vez la derecha pasará a la oposición, permanecerá dividida y aunque volverá a ganar las elecciones generales en 1986 su mandato será muy breve. Así la década de los años 80 tendrá color claramente socialista y en ella el PS sufrirá una transformación estructural e ideológica similar a la de sus homólogos europeos.

3.2. La lucha por el liderazgo interno

El actual Partido Socialista francés es el resultado del renacimiento de un conjunto de pequeñas corrientes que han luchado por hacerse con el control del poder después de la II Guerra Mundial, corrientes que habían tenido como tronco común la SFIO.

Como en otros partidos socialistas europeos, el fraccionamiento se condena en los estatutos pero las corrientes de opinión son toleradas y forman parte de su funcionamiento regular. Ahora bien, la naturaleza presidencial de la política francesa ha fomentado la personalización del conflicto dentro del partido y ha disminuido la fuerza del debate ideológico, como ha podido observarse con toda claridad en la pugna que mantuvieron Mitterrand y Rocard

antes y después de la victoria electoral de 1981.

La fracción es un grupo permanente, con disciplina y estabilidad que se distingue por su coherencia ideológica, mientras que la corriente o tendencia carece de organización interna y disciplina e incluso de homogeneidad ideológica. Desde ese punto de vista sólo el CERES se podía calificar como fracción y en algunas ocasiones fue calificado como partido dentro del partido con su propia organización y publicaciones, con una imagen e identidad propia (14). Las corrientes muchas veces están representadas por federaciones concretas, pero sobre todo se agrupan alrededor de algún líder político. En el caso francés la federación del Norte en el área de Lille, que era la más numerosa, tenía como cabeza visible a Pierre Mauroy y la federación Bouches-du-Rhône, centrada en Marsella, estaba controlada por Gaston Defferre. Pero en general se puede afirmar que las corrientes en el Partido Socialista francés no tenían una acepción geográfica sino más bien política. Así, en el congreso de Epinay celebrado en 1971, donde se consiguió por primera vez la unidad del partido, cada corriente votó sus propias mociones políticas y con ello se podía constatar el porcentaje de militantes que seguían detrás de cada una de ellas así como el peso de las alianzas (TABLA 3) (15).

TABLA 3

Congreso de Epinay (1971). Porcentaje de votos que obtuvieron las mociones políticas de cada grupo

Savary-Mollet (SFIO Centro-Izquierda)-----	34.0
Defferre-Mauroy (SFIO-Derecha)-----	30.0
CERES (SFIO-Izquierda)-----	8.5
Mermaz-Pontillon (CIR y otros de SFIO)-----	15.0
Poperen-----	12.0
Católicos de Izquierda (aliados al CERES)-----	0.5
TOTAL	100.0

Este congreso fue también el origen del programa base de los socialistas. Redactado bajo la guía del líder del CERES Jean Pierre Chevènement, se aprobó en 1972 con el título Changer la vie, y sobre él se añadieron, quitaron, ampliaron y refundieron otros textos a lo largo de toda una década hasta llegar a las "110 Proposiciones" de 1981. Se trataba de un programa pactado por las distintas corrientes de tal manera que sobre él había un cierto grado de consenso. Fue el texto que sirvió de base para establecer el Programa Común con el PCF y por tanto era un programa redactado por un partido de oposición con una fuerte carga ideológica, que no fue modificado sustancialmente hasta el fracaso de la política económica de 1982-83, a pesar de las críticas a que se veía sometido por una corriente interna que aparecería algunos años más tarde, la moderada de Rocard.

El programa utilizaba un marco de referencia ideológicamente marxista, con un vocabulario muy radical.

Los socialistas se sentían los representantes de la clase trabajadora en una sociedad capitalista donde imperaban los intereses del capital y las multinacionales, y donde una economía liberal de mercado no podía resolver los problemas del desarrollo humano. Sólo un cambio en las formas de gestión y distribución del capital podría acabar con la agudización de estas desigualdades y en esta línea estaba la política del PS.

Uno de los elementos que más esperanzas concitó por entonces para llevar a cabo este cambio, y que se convirtió en un patrimonio de casi toda la izquierda europea, fue la autogestión. Sobre esta forma de organizar la sociedad se escribieron numerosos libros y se realizaron congresos. Por autogestión no se entendía tanto la propiedad social de los medios de producción cuanto la descentralización del poder y la responsabilidad en todas las actividades de la vida, aunque también hubo distintas formas de entender este término según al tipo de actividades económicas y sociales a que se refiera (16). Junto a la autogestión debería practicarse una política de nacionalizaciones, sobre todo de las grandes empresas, y del sistema crediticio. El sector público debería actuar como una cuerda de arrastre para las pequeñas empresas del sector privado y contribuir a resolver, a través de la planificación democrática, el problema del paro. El PS contribuiría, por otra parte, a profundizar en las libertades civiles ampliando los derechos de los ciudadanos con medidas administrativamente descentralizadoras y moralmente secularizadoras. La descentralización regional y la nacionalización de la enseñanza privada constituían dos puntos fundamentales del programa. Por último en política exterior eran partidarios del desarme nuclear unilateral

con una política pacifista, del apoyo incondicional a la formación de la Comunidad Europea y de la desaparición del arsenal nuclear (17).

Este programa estuvo muy condicionado no sólo por las exigencias ideológicas de cada corriente vencedora en el congreso, sino por la necesidad de pactar una plataforma común con el PCF. Ahora bien, con el transcurso de los años algunos de los puntos de la política exterior y de la política económica tuvieron que ser cambiados, en primer lugar por exigencias de la política internacional y también por la necesidad de captar votos en otros estratos electorales de tal manera que les permitiesen obtener la mayoría en la Asamblea Nacional.

En esta política de componendas y pactos se confiere una especial habilidad a François Mitterrand que no era considerado un excelente orador como su contrincante Rocard, o un ideólogo que suscitase en el grupo un especial entusiasmo por sus ideas, sino más bien un negociador que trataba siempre de lograr acuerdos entre las partes erigiéndose como árbitro indispensable en los conflictos internos del partido. Procedente de una minicorriente que se había formado por la unión de varios pequeños grupos de procedencia ideológica muy diversa, radicales, socialdemócratas, independientes y marxistas, logró alzarse con el poder aliándose con la izquierda, primero, y absorbiendo, después, otros grupos o personalidades que, a la muerte de Guy Mollet en 1975, le consideraron ya como el líder indiscutible del PS.

Mitterrand había sido ministro precedentemente en diversas ocasiones, en algunas de las cuales alcanzó un protagonismo relativo, bien por la importancia de la cartera que asumió bien por el equipo de gobierno del que formó

parte, como sucedió en 1954 cuando fue ministro del Interior con Mendès-France o en 1956 cuando fue ministro de Justicia en el gobierno que formó el líder histórico de la SFIO, Guy Mollet. Fue a partir de 1965 cuando, al ser presentado como candidato a la Presidencia de la República como rival del indiscutible De Gaulle, aprovechó su imagen política para situarse como una de las figuras políticas más importantes de la izquierda, sobre todo porque quienes pensaban que el escaso seguimiento que tenía dentro de su propio partido no sería suficiente para obligar al general a una segunda vuelta electoral, se vieron frustrados en sus expectativas.

Desde su pequeño grupo, el CIR (Convention des Institutions Républicaines), se situó en el ámbito de la izquierda procurando unir a la mayor parte de los grupos de esta tendencia y siendo consciente de que era la única postura posible a partir de la cual se podían trazar puentes hacia el Partido Comunista sin romper con los grupos socialistas que se situaban más a la derecha. Su objetivo desde el primer momento fue la creación de un movimiento político capaz de equilibrar las fuerzas con el Partido Comunista para adelantarle y obtener, más tarde, la mayoría en el seno de la izquierda (18). En buena medida el Programa Común estuvo basado en este tipo de estrategia que era complementaria a la planteada por los comunistas quienes deseaban lo mismo pero con fines propios y nunca pudieron imaginar en 1971 que el 10 por cien de la base electoral socialista sería capaz de superarles hasta el extremo de invertir la correlación de sus fuerzas políticas.

Su estrategia personal se basaba en situarse dentro del partido como el portavoz de una corriente moderada de izquierda. De esta manera pactó en el Congreso de Epinay para obtener la mayoría y con ello el poder dentro

del partido. Con el CERES estableció el Programa Común hasta 1975 que dió a los socialistas excelentes resultados electorales en todas las elecciones locales de ese período. Pero en 1975, en el momento de la ruptura con el PCF, que se vió amenazado electoralmente y deseaba una reformulación del programa con propuestas más radicales, Mitterrand rompió el pacto con el CERES y, viéndose atacado como reformista socialdemócrata vetó la entrada en la Secretaría General a quienes habían sido sus aliados hasta entonces. Sólo en 1979 les permitió su vuelta al órgano central del partido con motivo de preparar las elecciones presidenciales de 1981 y, sobre todo, para que sirviesen de contrapartida a la amenazadora candidatura de Rocard.

Michel Rocard (19) se había erigido unos años antes en el líder indiscutible del ala moderada del PS, que poco a poco iba adquiriendo mayor importancia. Orador efectivo, y con una personalidad que había demostrado su capacidad de atracción en las diversas campañas electorales, se presentó como candidato a la batalla presidencial que se libró en el trienio 1978-81. Mitterrand en el Congreso de Metz de 1979 se valió de los marxistas del CERES para desafiar el programa socialdemócrata de los rocardianos quienes, al contar con un respaldo mucho menor entre la militancia del partido, perdieron el congreso y dos años más tarde su líder tuvo que retirar la candidatura dos años después cuando Mitterrand anunció su intención de participar en las elecciones presidenciales de 1981 en interés de la unidad socialista. El programa moderado de Rocard, rechazado por los partidarios de Mitterrand no era probablemente un buen reclamo para captar el voto de buena parte de la izquierda francesa, sobre todo de los comunistas, pero después de que los socialistas alcanzasen la presidencia

tuvo que ser adoptado en la mayor parte de sus proposiciones a partir de la crisis gubernamental de 1982. Entonces Mitterrand también cooptó en todos los centros del poder, tanto del partido como del Estado, a las distintas corrientes y a sus miembros más significativos.

A la izquierda del partido se encontró siempre el CERES , una corriente liderada por Jean-Pierre Chevènement y Pierre Guidoní que polarizaba a un conjunto de estudiosos e intelectuales de la escena político-cultural francesa. Esta fracción, aunque había nacido en 1964 bajo el ya establecido SFIO de Mollet, sólo llegó a tener una importancia considerable y a jugar un papel más claramente definido después del congreso de 1971, cuando entró a formar parte de la Secretaría General. Desde entonces hasta 1978 el CERES se benefició de su influjo dentro del partido para adscribir nuevos militantes. En 1971 obtuvo el 8,5 por cien de los votos del congreso de Grenoble, en 1973 el 21 por cien y en Nantes en 1977 el 24 por cien. A partir de aquí comenzó a descender y en el congreso de Metz en 1979 sólo alcanzó el 15 por cien (20).

El CERES fue el principal colaborador de Mitterrand en su estrategia para la unidad de la izquierda y constituyó siempre el lazo natural del PS con el PCF sobre todo en el periodo de redacción y defensa del Programa Común. Sustentado por un análisis de la sociedad claramente marxista era partidario de la lucha de clases para superar la sociedad capitalista, defendía la planificación económica en un sistema productivo donde los bienes han de tener primordialmente una finalidad de uso para evitar la explotación y alienación a la que conduce el sistema de mercado a ultranza. La autogestión en la toma de decisiones

fue un elemento central en su programa y era concebida como una forma de participación imprescindible para la transición al socialismo. Los acontecimientos de mayo de 1968 tuvieron mucha incidencia en todas estas discusiones y los escritos y libros sobre este tema proliferaron tanto en Francia como en Italia. Parecía que los intelectuales y las nuevas capas de profesionales se unían al movimiento obrero para dar un duro golpe a la explotación del sistema productivo capitalista, con la finalidad de aunar fuerzas en el proceso de emancipación de la sociedad.

Esta crítica contra la lógica del capitalismo les hacía ser profundamente antiamericanos y por tanto contrarios a la Alianza Atlántica y partidarios del desarme nuclear. Tampoco eran pro Comunidad Europea sino que más bien pretendían establecer una alianza entre los países sureuropeos muy en línea con las tesis de la izquierda radical de esos mismos países.

Su participación en el poder institucional de la República Francesa les creó muchos problemas a causa de las contradicciones entre las tesis políticas que defendían y la praxis que desarrollaron, sobre todo en el Ministerio de Industria, que durante un tiempo estuvo en manos de su líder J.P. Chevènement. Esta experiencia política les hizo desistir en muchos de sus postulados, y en 1986 les llevó a cambiar de nombre adoptando el de Socialisme et République.

Por último Rocard, ya lo hemos dicho, representaba al sector más moderado del partido y aunque se afilió al PS en 1974 su presencia como cabeza de grupo sólo se puso de manifiesto en su propuesta alternativa a Mitterrand en 1979.

Militante primero del partido Socialista Autónomo y

dirigente después del PSU se incorporó al PS con algunos colegas de partido y una sección de la CFDT a la que adherirán futuros cuadros de la izquierda como Martinet, Serge Mallet, Poperen y Bérégovoy. Piensa que la izquierda ha de ser creída por su gestión económica, por ello es partidario de la autogestión pero desconfía de las nacionalizaciones y defiende que se han de respetar las reglas del mercado aunque en los sectores prioritarios se ha de imponer la planificación.

A mediados de la década de los años 70 fue partidario de poner en práctica una estrategia socialista autónoma para el acceso al poder y por tanto distanciada del Partido Comunista y del Programa Común. Esto le grangeó la enemistad del CERES que veía en su persona la imagen más derechista y pro-americana del partido. Con todo Rocard contaba con el apoyo del sindicato anticomunista CFDT, de muchos de los nuevos militantes socialistas que provenían de las clases medias y profesionales y, en general, de los reformistas moderados que conectaban mejor con un electorado de centro.

Más tarde, en su periodo de Primer Ministro, un año antes del congreso de Rennes, diferencia la imagen antigua y moderna del socialismo. Si la vieja imagen del socialismo tiene sus inconvenientes, como el de la ineficacia económica o el de la incompatibilidad con el cuadro internacional en que se vive, sin embargo tiene también sus ventajas, plasmadas, sobre todo, en que se le atribuye una identidad muy fuerte con la voluntad de justicia social y con la acción colectiva, en una sociedad altamente competitiva, de economía mixta y cada vez más internacionalizada en su funcionamiento. No obstante el bien común siempre se ha de redefinir debido al cambio permanente de las relaciones sociales que configuran a la democracia como un movimiento

y no como una situación estática. De ahí que el método Rocard se base en el diálogo como medio para fundamentar sólidamente las reformas, la autonomía como principio para difundir las responsabilidades y la gradación temporal como exigencia para asumir los cambios sin violencia social (21).

Este tipo de discurso socialdemócrata ha sido muy bien acogido recientemente por la militancia del PS que pertenece en su mayoría a la clase media-baja en la que tienen una gran representación los profesionales de la enseñanza, sobre todo maestros. La participación de la clase obrera es muy escasa, mucho menor que en los países vecinos como Gran Bretaña, Alemania o Italia, de ahí que el partido tenga muy poca presencia en los sindicatos, si exceptuamos el de enseñantes (FEN). Tanto en el congreso de Grenoble de 1973 como en el de Valence en 1981 sólo un 10 por cien de los representantes socialistas eran trabajadores manuales, mientras que el 31 por cien eran maestros y el 50 por cien desempeñaban otras ocupaciones (22). Con esta composición de afiliados, al PS le ha sido más fácil evolucionar hacia posiciones reformistas moderadas.

3.3. El P.S.: Del Socialismo a la Socialdemocracia

Ya hemos observado que el programa político con el que llegaba la izquierda francesa, y sobre todo el Partido

Socialista, al poder era el resultado del pacto programático de las diferentes tendencias internas del partido por una parte, y de su alianza con el PCF por otra. El Partido Socialista, como ya hemos visto al tratar las corrientes, no era una formación unitaria, sino que tenía diversas raíces sociales y era más bien un conglomerado de corrientes rivales formadas por un conjunto de grupos que iban desde quienes se autoproclamaban socialdemócratas, en el mismo sentido que sus homólogos europeos, hasta los que en consonancia con su ideario se sentían más revolucionarios. Cada una de estas corrientes tenía su propia estrategia e ideología y tanto la estructura interna del poder como el programa eran el resultado de transacciones y alianzas. Si a esto añadimos la necesidad de los socialistas de contar con el apoyo más o menos directo del Partido Comunista no es de extrañar que el programa gubernamental tuviese todavía muchas de las raíces que lo vinculaban al periodo en el que se fraguó la Unión de la Izquierda.

Este condicionamiento histórico explica el amplio abanico que se contemplaba en la nacionalización de las grandes empresas, aunque todavía eran muchas menos de las que habían propuesto los comunistas. El programa decía que se estimularía el crecimiento a base de una política redistributiva; el paro, que aumentaba cada vez más, debería cortar su trayectoria como resultado del crecimiento económico, del reparto del trabajo (la semana de 35 horas, la reducción de la edad de jubilación, la prolongación de las vacaciones, la creación de puestos de trabajo en el sector público) y de la restauración del dinamismo industrial. La empresa iba a ser reformada y democratizada especialmente a través de la introducción de los "nuevos

derechos de los trabajadores". La Administración Pública iba a ser descentralizada y todo ello contribuiría a la expansión económica y a la mejora de las condiciones de vida. Este manifiesto de enero de 1981 etiquetado como el de las "110 Propositions pour la France" era una versión moderada de los programas que se habían elaborado hasta entonces, y con ello se proponía iniciar la transición al Socialismo buscando una tercera vía entre el socialismo real y la socialdemocracia reformista europea (23).

En estas circunstancias el primer gobierno Mitterrand se encontró con algunas limitaciones que condicionaron su política. Desde el punto de vista interno las tendencias mantenían a veces relaciones tensas, sobre todo cuando cada una de ellas quería imponer su criterio a la exigua mayoría del 50 por cien de los diputados con que contaba la corriente mayoritaria del Presidente de la República. El acceso al gobierno de cuatro ministros comunistas aseguró en un primer momento la paz social, debido al control que el PCF mantenía sobre el sindicato CGT, pero a medio plazo la crisis económica debilitó al sindicalismo y éste, situado tradicionalmente muy a la izquierda en sus postulados ideológicos y reivindicativos, reaccionó contra las medidas correctoras del gobierno. A su vez el corporativismo era una tendencia muy enraizada en la vida laboral y cultural francesa, a través del cual se regulaban las relaciones con muchos grupos de profesionales, y el cambio de política social enfrentaría al gobierno con muchos de estos grupos. Desde el punto de vista externo la segunda recesión económica, a comienzo de los años 80, alcanzó de lleno a la economía francesa todavía en proceso de reconversión y por tanto con dificultades para competir en los mercados

internacionales con la tecnología industrial de sus vecinos. La rentabilidad y la competitividad de la industria francesa se habían deteriorado en los últimos diez años debido sobre todo a que sus costes laborales eran muy superiores a los de sus competidores en el mercado internacional. Además las subidas del precio del petróleo disminuyeron la inversión y el crecimiento, lo que a su vez generó desempleo. De ahí que durante los últimos años que precedieron a la victoria socialista la economía acusase alzas en la tasa de inflación y en el déficit comercial.

Para afrontar esta recuperación económica el gobierno lanzó una reforma estructural del Estado cuyo primer objetivo fue la economía. Mitterrand trataba de recuperar el protagonismo en las áreas del capital y el trabajo a través de las nacionalizaciones y la ampliación de los derechos de los trabajadores puesto que las multinacionales se habían erigido en monopolios privados extrayendo grandes beneficios de los consumidores y actuando en detrimento del interés general de los franceses (24). El plan consistía en nacionalizar las industrias modernas clave inyectándoles fuertes sumas de capital para convertirlas en empresas líderes dentro de sus propios sectores y a su vez en las más competitivas del panorama internacional sobre todo respecto a las alemanas, americanas y japonesas. Así en 1981 se escogieron doce grupos industriales para aplicar esta política : el consorcio de armamentos Dassault y Matra, el Rhône-Poulenc, el Rousell-Velaf y Pèchiney-Ugine-Kuhlmann, que lideraban las industrias químicas, farmacéuticas y del aluminio; Usinor y Sacilor del acero, la Thomson Brandt y CGE de electricidad, el complejo industrial de Saint-Gobin y los imperios de computadoras Cii-Honywell-Bull e ITT francesa.

A estas se añadieron algunas